



BOLETÍN OFICIAL DE LAS **CORTES DE ARAGÓN**

Número 44
Año XXXVIII
Legislatura X
11 de marzo de 2020

Sumario

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

1.1. PROYECTOS DE LEY

1.1.2. EN TRAMITACIÓN

Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón..... 2694

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. 2740

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO

3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY

3.1.1. APROBADAS

3.1.1.2. EN COMISIÓN

Aprobación por la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Proposición no de Ley núm. 80/19-X, sobre la mejora de la seguridad vial. 2748

Aprobación por la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Proposición no de Ley núm. 25/20, sobre el arreglo de la carretera A-2511 entre Ferreruela y Segura de los Baños. 2748

3.1.2. EN TRAMITACIÓN

3.1.2.1. EN PLENO

Proposición no de Ley núm. 64/20, sobre la mejora de la calidad de las prestaciones y de la atención de las personas amputadas. 2748

Proposición no de Ley núm. 67/20, sobre los recursos sanitarios destinados a los trastornos de la conducta alimentaria en Aragón. 2750

Proposición no de Ley núm. 68/20, sobre familias numerosas. 2751

Proposición no de Ley núm. 69/20, sobre empleo femenino y conciliación laboral y familiar. 2751

3.1.2.2. EN COMISIÓN

La Proposición no de Ley núm. 19/20, sobre un convenio con la Universidad de Zaragoza para el apoyo al alumnado ACNEAE por Altas Capacidades, pasa a tramitarse ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 2752

Proposición no de Ley núm. 62/20, sobre el reconocimiento y competencias de los colegios profesionales de Aragón, para su tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. 2753

Proposición no de Ley núm. 63/20, sobre listas de espera para la valoración de la discapacidad, para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 2754

Proposición no de Ley núm. 65/20, sobre la elaboración de un estudio sobre la inteligencia límite, para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 2754

Proposición no de Ley núm. 66/20, sobre el fomento de la apicultura en Aragón, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 2755

Enmienda presentada a la Proposición no de Ley núm. 25/20, sobre el arreglo de la carretera A-2511 entre Ferreruela y Segura de los Baños. 2756

3.1.3. RECHAZADAS

3.1.3.2. EN COMISIÓN

Rechazo por la Comisión de Sanidad de la Proposición no de Ley núm. 12/20, sobre la ampliación de la UCI Neonatal del Hospital Materno Infantil de Zaragoza. 2757

Rechazo por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Proposición no de Ley núm. 27/20, sobre un Plan Estratégico de Gobierno Abierto e Innovación Social. 2757

Rechazo por la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Proposición no de Ley núm. 41/20, sobre las estaciones de esquí. 2757

3.2. INTERPELACIONES

3.2.1. EN TRAMITACIÓN

Interpelación núm. 26/20, relativa a la política general en materia de energía.	2758
Interpelación núm. 27/20, relativa a la vivienda de alquiler.	2758
Interpelación núm. 28/20, relativa al porcino en Aragón.	2759
Interpelación urgente núm. 29/20, sobre la política general en relación con las inversiones en las comarcas mineras y, en particular, con la gestión de las ayudas destinadas a los planes de reindustrialización alternativos al carbón.	2760

3.3. MOCIONES

3.3.1. APROBADAS

3.1.1.2. EN COMISIÓN

Aprobación por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Moción núm. 6/20, dimanante de la Interpelación núm. 2/20, relativa a la política general en materia frutícola en Aragón.	2761
---	------

3.3.2. EN TRAMITACIÓN

3.3.2.2. EN COMISIÓN

Moción núm. 9/20, dimanante de la Interpelación núm. 20/20, relativa al coste de los servicios de los centros de mayores, para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales.	2762
Moción núm. 10/20, dimanante de la Interpelación núm. 18/20, relativa a la política general del Gobierno en relación al sector primario y las diferentes problemáticas que le afectan en la actualidad, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.	2763
Moción núm. 11/20, dimanante de la Interpelación núm. 21/20, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de protección civil, con especial referencia a la gestión de emergencias en las que intervengan sustancias peligrosas, para su tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.	2763
Enmienda presentada a la Moción núm. 6/20, dimanante de la Interpelación núm. 2/20, relativa a la política general en materia frutícola en Aragón.	2764

3.4. PREGUNTAS

3.4.1. PARA RESPUESTA ORAL

3.4.1.1. EN PLENO

Pregunta núm. 155/20, relativa a la opacidad de la agenda de actividad institucional del consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.	2765
Pregunta núm. 156/20, relativa al protocolo que está adoptando el Departamento de Sanidad respecto al coronavirus.	2765
Pregunta núm. 157/20, relativa a la situación de la atención sanitaria en el medio rural.	2766
Pregunta núm. 158/20, relativa a la accesibilidad a los tratamientos de radioterapia por los pacientes aragoneses.	2766
Pregunta núm. 159/20, relativa a la vacuna meningococo tetravalente.	2767
Pregunta núm. 160/20, relativa al pago por la resolución del contrato de la autopista autonómica ARA-A1.	2767
Pregunta núm. 165/20, relativa al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.	2767

Pregunta núm. 166/20, relativa a la situación del centro de salud de Sabiñánigo.	2768
Pregunta núm. 167/20, relativa a residencia de menores extranjeros no acompañados bajo la tutela del IASS.	2768
Pregunta núm. 168/20, relativa a bienes de Sijena.	2769
Pregunta núm. 169/20, relativa a la relación económica de Aragón con China.	2769
Pregunta núm. 170/20, relativa a la visita comercial a China de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo.	2769

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA

3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 154/20, relativa a proyectos de envejecimiento activo.	2770
Pregunta núm. 161/20 relativa a la carta enviada por el Gobierno de Aragón a la Ministra de Hacienda sobre la reclamación del mes 13 de IVA correspondiente a 2017.	2770
Pregunta núm. 162/20, relativa a la inejecución del presupuesto para el 2019.	2771
Pregunta núm. 163/20, relativa al coste de la licitación de un contrato de operaciones de crédito a corto plazo.	2771
Pregunta núm. 164/20, relativa a la subvención afectados Idental.	2772

3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 89/20, relativa a la salud bucodental en personas con discapacidad (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).	2772
Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 90/20, relativa a las acciones de la Dirección General de Consumo relacionadas con los servicios bancarios de seguros y de inversiones (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).	2773
Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 91/20, relativa a la regulación del asistente personal (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).	2774
Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 94/20, relativa al seguimiento de la calidad de las plazas concertadas (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).	2774
Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 95/20, relativa a las personas con inteligencia límite (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).	2777
Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 135/20, relativa a la financiación de la dependencia (BOCA núm. 41, de 25 de febrero de 2020).	2778

3.5. COMPARENCIAS

3.5.1. DE MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

3.5.1.1. EN PLENO

Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón.	2778
Solicitud de comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública.	2778
Solicitud de comparecencia de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.	2778

3.5.1.2. EN COMISIÓN

La solicitud de comparecencia del Consejero de Educación, Cultura y Deporte pasa a tramitarse ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.	2779
Solicitud de comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública.	2779
Solicitud de comparecencia de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento ante la Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.	2779

3.5.2. DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y OTRAS PERSONAS

Solicitud de comparecencia de la Directora General de Planificación y Equidad ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.	2780
---	------

12. CÁMARA DE CUENTAS**12.2. OTROS INFORMES**

Resolución del Presidente de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón por la que se abre el plazo de presentación de propuestas de resolución al Informe de fiscalización de las cuentas anuales de determinados consorcios y de la situación financiera de determinadas empresas del sector público aragonés en el ejercicio 2016.	2780
Informe que la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas de Aragón eleva a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el Informe de la Cámara de Cuentas de Aragón de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a las Cortes de Aragón de 26 de mayo de 2019.	2781

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

1.1. PROYECTOS DE LEY

1.1.2. EN TRAMITACIÓN

Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.1 del Reglamento de la Cámara, la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha procedido a la calificación del Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo común.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón

Índice

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley.

Artículo 2. Ámbito subjetivo.

Artículo 3. Principios generales.

Artículo 4. Potestades y prerrogativas.

CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SECCIÓN 1.ª DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 5. Órganos administrativos.

Artículo 6. Creación.

Artículo 7. Órganos consultivos.

Artículo 8. Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.

SECCIÓN 2.ª COMPETENCIA

Artículo 9. Competencia.

Artículo 10. Delegación de competencias.

Artículo 11. Ámbito de la delegación.

Artículo 12. Prohibición de delegación.

Artículo 13. Requisitos formales de la delegación de competencias.

Artículo 14. Delegación de competencias en Corporaciones de Derecho Público.

Artículo 15. Avocación.

Artículo 16. Encomienda de gestión.

Artículo 17. Requisitos formales de la encomienda de gestión.

Artículo 18. Delegación de firma.

Artículo 19. Suplencia.

Artículo 20. Designación de suplentes.

Artículo 21. Conflictos de atribuciones.

Artículo 22. Competencia para la resolución de los conflictos de atribuciones

SECCIÓN 3.ª DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

Artículo 23. Órganos colegiados.

Artículo 24. Régimen jurídico de los órganos colegiados.

Artículo 25. Presidencia de los órganos colegiados.

Artículo 26. Miembros de los órganos colegiados.

Artículo 27. Secretaría.

Artículo 28. Funciones del Secretario o de la Secretaria.

Artículo 29. Convocatorias y sesiones.

Artículo 30. Actas.

Artículo 31. Delegación de competencias.

Artículo 32. Normas de funcionamiento de determinados órganos colegiados.

SECCIÓN 4.ª ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

Artículo 33. Abstención.

Artículo 34. Recusación.

CAPÍTULO III. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Artículo 35. Principios y régimen jurídico de la potestad sancionadora.

Artículo 36. Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial.

CAPÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO

Artículo 37. Principios aplicables.

Artículo 38. Sede electrónica.

Artículo 39. Portal de Internet.

Artículo 40. Sistemas de identificación y firma en la sede electrónica y sedes asociadas.

Artículo 41. Catálogo de Servicios.

Artículo 42. El procedimiento administrativo electrónico.

Artículo 43. Actuación administrativa automatizada.

Artículo 44. Dato único.

Artículo 45. Política de Protección de Datos Personales y Política de Seguridad de la Información.

TÍTULO I. DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA**CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES**

Artículo 46. Principios de colaboración, auxilio y mutua información.

Artículo 47. El principio de coordinación en la actuación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO II. PROGRAMACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

Artículo 48. Planificación y Programación de la actuación administrativa.

Artículo 49. Elaboración y aprobación de los planes.

Artículo 50. Racionalización de los procedimientos.

Artículo 51. Medios electrónicos.

CAPÍTULO III. DE LAS AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 52. El control de eficacia y eficiencia.

CAPÍTULO IV. DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Artículo 53. Derecho a relacionarse por medios electrónicos.

Artículo 54. Derecho de acceso a la información pública.

Artículo 55. Derecho a la protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO V. FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 56. Régimen de ejercicio de la actividad administrativa.

Artículo 57. Encargos de ejecución a medios propios.

Artículo 58. Concepto y régimen general de acción concertada.

TÍTULO II. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**CAPÍTULO I. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS**

Artículo 59. Producción y contenido de los actos administrativos.

Artículo 60. Actos que ponen fin a la vía administrativa.

CAPÍTULO II. DE LA REVISIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 61. Revisión de oficio.

Artículo 62. Revocación de actos administrativos.

Artículo 63. Rectificación de errores.

CAPÍTULO III. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Artículo 64. Recursos de alzada y de reposición.

Artículo 65. Recurso extraordinario de revisión.

Artículo 66. Reclamaciones económico-administrativas

CAPÍTULO IV. DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 67. Criterios generales.

Artículo 68. Notificaciones específicas.

Artículo 69. Composición de las comisiones o tribunales.

TÍTULO III. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN**

Artículo 70. Principios organizativos.

Artículo 71. Órganos superiores y órganos directivos.

Artículo 72. Los Delegados y las Delegadas Territoriales del Gobierno de Aragón.

Artículo 73. Los Servicios.

Artículo 74. Los elementos organizativos básicos.

Artículo 75. Contenido de las normas organizativas.

Artículo 76. Competencias generales.

CAPÍTULO II. LOS DEPARTAMENTOS Y SU ESTRUCTURA INTERNA

Artículo 77. Los Departamentos.

Artículo 78. Estructura orgánica de los Departamentos.

Artículo 79. Las Secretarías y los Secretarios Generales Técnicos.

Artículo 80. Los Directores y las Directoras Generales.

Artículo 81. Los Jefes y las Jefas de Servicio.

CAPÍTULO III. ÓRGANOS TERRITORIALES

Artículo 82. Las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón.

Artículo 83. Organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 84. Los Servicios Provinciales.

TÍTULO IV. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL AUTONÓMICO

CAPÍTULO I. DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

Artículo 85. Composición y clasificación del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 86. Principios generales de actuación.

Artículo 87. Régimen jurídico general.

Artículo 88. Participación en otros entes

Artículo 89. Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón

Artículo 90. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

CAPÍTULO II. EFICACIA Y SUPERVISIÓN CONTINUA

Artículo 91. Control de eficacia y supervisión continua.

CAPÍTULO III. DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTONÓMICOS

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 92. Definición y actividades propias.

Artículo 93. Clasificación y adscripción.

Artículo 94. Personalidad jurídica y potestades.

Artículo 95. Creación de organismos públicos autonómicos.

Artículo 96. Contenido y efectos del plan inicial de actuación.

Artículo 97. Contenido de los estatutos.

Artículo 98. Régimen jurídico.

Artículo 99. Estructura organizativa en los organismos públicos autonómicos.

Artículo 100. Fusión de organismos públicos.

Artículo 101. Extinción.

Artículo 102. Representación y defensa en juicio.

SECCIÓN 2.ª ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Artículo 103. Definición.

Artículo 104. Régimen jurídico.

Artículo 105. Régimen de personal.

Artículo 106. Régimen de contratación.

Artículo 107. Régimen patrimonial.

Artículo 108. Régimen presupuestario.

Artículo 109. Régimen de contabilidad y control económico-financiero.

SECCIÓN 3.ª LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

Artículo 110. Definición.

Artículo 111. Régimen jurídico.

Artículo 112. Ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 113. Régimen de personal.

Artículo 114. Régimen de contratación.

Artículo 115. Régimen patrimonial.

Artículo 116. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero

CAPÍTULO IV. DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

Artículo 117. Definición.

Artículo 118. Participación minoritaria en otras sociedades.

Artículo 119. Principios rectores

Artículo 120. Régimen jurídico.

Artículo 121. Creación y extinción.

Artículo 122. Régimen de personal.

Artículo 123. Régimen patrimonial.

Artículo 124. Régimen presupuestario.

Artículo 125. Régimen de contabilidad y de control económico-financiero.

Artículo 126. Régimen de contratación.

CAPÍTULO V. DE LOS CONSORCIOS AUTONÓMICOS

Artículo 127. Definición y actividades propias.

Artículo 128. Régimen jurídico.

- Artículo 129. Régimen de adscripción.
- Artículo 130. Régimen de personal.
- Artículo 131. Régimen presupuestario, de contabilidad, y control económico-financiero.
- Artículo 132. Régimen patrimonial y de contratación.
- Artículo 133. Creación.

CAPÍTULO VI. DE LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

- Artículo 134. Definición y actividades propias.
- Artículo 135. Participación en fundaciones que no forman parte del sector público autonómico.
- Artículo 136. Régimen de adscripción de las fundaciones.
- Artículo 137. Régimen jurídico.
- Artículo 138. Régimen de contratación.
- Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal.
- Artículo 140. Régimen patrimonial.
- Artículo 141. Creación y extinción de fundaciones del sector público autonómico.
- Artículo 142. Protectorado.
- Artículo 143. Designación de miembros del patronato.
- Artículo 144. Fusión, disolución, liquidación y extinción.

TÍTULO V. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

- Artículo 145. Principios.
- Artículo 146. Deberes de colaboración y cooperación.

CAPÍTULO II. DE LOS CONVENIOS

- Artículo 147. Definición de convenio.
- Artículo 148. Tipos de convenios.
- Artículo 149. Contenido de los convenios.
- Artículo 150. Autorización y firma.
- Artículo 151. Procedimiento de tramitación de los convenios.
- Artículo 152. Extinción y efectos de la resolución de los convenios.

CAPÍTULO III. RELACIONES Y ÓRGANOS DE COOPERACIÓN

- Artículo 153. Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado.
- Artículo 154. Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros.
- Artículo 155. Comisión Mixta de Transferencias.
- Artículo 156. Otros órganos de cooperación.
- Artículo 157. Designación de representantes autonómicos.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA Y REUTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA ENTRE ADMINISTRACIONES

- Artículo 158. Transferencia y reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición adicional primera. Del Servicio Jurídico del Gobierno de Aragón.

Disposición adicional segunda. Boletín Oficial de Aragón.

Disposición adicional tercera. Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos de Cooperación.

Disposición adicional cuarta. Adaptación de entidades y organismos públicos existentes.

Disposición adicional quinta. Referencias y concordancias.

Disposición adicional sexta. Especialidades de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición adicional séptima. Cláusula de progreso y adaptación a la evolución tecnológica en materia de administración electrónica.

Disposición adicional octava. Adaptación a la tramitación electrónica del procedimiento en materia de expropiación forzosa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición adicional novena. Sustitución del recurso de alzada en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción.

Disposición adicional décima. Remisiones normativas.

Disposición transitoria primera. Encargos a empresas públicas.

Disposición transitoria segunda. Entidades y organismos públicos existentes.

Disposición transitoria tercera. Inscripción en el Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 diciembre, del Gobierno de Aragón.

Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón

Disposición final quinta. Desarrollo de la ley.

Disposición final sexta. Desarrollo de la administración *electrónica*.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La configuración normativa del régimen jurídico y procedimental, así como la organización propia de la Administración autonómica, ha estado presente en las preocupaciones del legislador autonómico desde los albores del discurrir de Aragón como Comunidad. Ya el Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982, en su artículo 35 establecía la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en la organización de sus instituciones de autogobierno y en el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia. Por su parte, los artículos 42 y 43 del citado Estatuto regulaban la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

En desarrollo de estas previsiones estatutarias, y tras una primera regulación contenida en la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se dictó la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cual según expresaba su Preámbulo aspiraba a «contener una regulación comprensiva de las distintas adaptaciones exigidas por la organización propia de la Administración autonómica».

Por su parte la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de medidas en materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporó determinadas previsiones sobre desconcentración administrativa en función de la singular estructura del territorio aragonés y adaptó la normativa aragonesa de procedimiento administrativo a las novedades de la legislación básica estatal, contenidas, singularmente en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En cumplimiento de la autorización prevista en la citada Ley 11/2000, el Gobierno de Aragón adoptó el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, aprobando el Texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha constituido la regulación esencial en esta materia hasta la aprobación de esta Ley.

II

La Ley tiene por objeto, por un lado, determinar el régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporando las especialidades del procedimiento administrativo que le son propias así como los principios de la responsabilidad patrimonial y la potestad sancionadora, y por otro, configurar de manera precisa el marco organizativo y de funcionamiento de la Administración autonómica y de su sector público institucional.

Dos son las razones fundamentales que abonan la necesidad de proceder a la revisión del régimen jurídico de la Administración Pública autonómica: de una parte, el cambio experimentado por la Administración autonómica como consecuencia de la mayor complejidad de la gestión pública y de las nuevas exigencias ciudadanas; de otra parte, la adaptación a la normativa básica estatal contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, a fin de configurar un marco regulador de esta materia coherente y estable.

La Administración autonómica es hoy una organización estable y consolidada tras el incremento de su tamaño y competencias por la asunción de nuevas funciones y servicios consecuencia de los trasposos efectuados a la Comunidad Autónoma, la singularidad y diversidad de las nuevas funciones asumidas que configuran modos de gestión diferentes y más exigentes que los tradicionales y la apuesta decidida en la consecución de niveles de eficiencia y calidad en la prestación del servicio público. A ello se unen las nuevas demandas de la ciudadanía en la actuación de los poderes públicos vinculadas a una mayor participación ciudadana y transparencia pública. Al cumplimiento de todos estos objetivos debe coadyuvar esta Ley de manera decisiva.

La aprobación y entrada en vigor de la legislación básica estatal contenida en las Leyes 39 y 40/2015, dictadas fundamentalmente al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18º de la Constitución Española, exige su desarrollo normativo y la adaptación de las normas reguladoras contenidas en las mismas a la organización y régimen jurídico del sector público de la Comunidad Autónoma, lo cual se realiza mediante esta Ley, reuniendo en un único texto legal las relaciones «ad extra» y «ad intra» de la Administración Pública aragonesa, con el objeto de conformar una regulación uniforme, coherente y sistemática del ordenamiento jurídico público de la Comunidad Autónoma.

La adaptación de la normativa aragonesa a la legislación básica estatal se realiza de acuerdo con las previsiones señaladas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

III

La Ley se dicta al amparo de la previsión contenida en el artículo 71.1º del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, el cual atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva para la creación, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Del mismo modo, el artículo 71.7º del referido Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para regular el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia. Por su parte, los artículos 61 y 62 del Estatuto, contenidos en su Título III sobre la Administración Pública en Aragón, se refieren a la competencia de la Comunidad Autónoma para crear y organizar su propia Administración, que ostentará la condición de

administración ordinaria en el ejercicio de sus competencias, recogiendo los principios esenciales de organización y funcionamiento de la misma.

La aprobación y entrada en vigor de la legislación básica estatal exige, como se ha establecido con anterioridad, su desarrollo normativo y la adaptación de las normas reguladoras al ámbito propio autonómico, lo cual se ha realizado con arreglo a los principios de buena regulación en la elaboración de las normas, plasmados por el legislador estatal en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La necesidad de esta norma ya ha sido expresada al indicar las razones que la justifican, esto es, el cambio experimentado por la Administración autonómica como consecuencia de la mayor complejidad de la misma y de las nuevas exigencias ciudadanas y la adaptación a la normativa básica estatal, siendo su aprobación el instrumento que permite cumplir con los objetivos propuestos. En su tramitación se cumple igualmente con el principio de transparencia mediante la difusión pública de los documentos integrantes del proceso de elaboración y la incorporación a su texto de diversos elementos que profundizan dicho principio. Se respeta asimismo el principio de proporcionalidad, al incorporar a la Ley una regulación adecuada de la organización administrativa propia de la Comunidad Autónoma e incluir la regulación estrictamente indispensable del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de dicha organización propia. Al incorporar medidas precisas sobre planificación y la evaluación posterior de la actuación del sector público, su aprobación y aplicación posterior contribuirá a cumplir los principios de eficacia y eficiencia y, en definitiva, a una racional y equilibrada gestión de los recursos públicos. Finalmente, se cumple el principio de seguridad jurídica respetándose la distribución de competencias derivada de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Aragón y se configura una regulación precisa y sistemática, contenida en una única norma de referencia.

IV

Las novedades incorporadas en esta Ley son especialmente relevantes en el ámbito del funcionamiento electrónico del sector público y por ello merecen destacarse de manera singular.

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación no solo ha afectado a la sociedad sino que ha supuesto que distintas normas, como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y, en mayor medida, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, iniciaran el cambio en la forma en la que deben instrumentarse las relaciones de las Administraciones con la ciudadanía y las de ellas entre sí, dando paso a las comunicaciones electrónicas y a la denominada administración electrónica.

Actualmente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha venido a sistematizar toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, con el objetivo de clarificar e integrar el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundizar, como indica su preámbulo, en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico. Así, en dicho preámbulo se afirma que la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Dicha Ley acoge reglas para una Administración basada en un funcionamiento íntegramente electrónico. A este nuevo marco se une la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge una regulación unitaria sobre el funcionamiento electrónico del sector público y las relaciones de las Administraciones Públicas entre sí por medios electrónicos.

En ambas Leyes se apela a las Comunidades Autónomas para que adopten medidas destinadas a una efectiva y completa implantación de la Administración electrónica tanto en las relaciones de la Administración con la ciudadanía como de las Administraciones entre sí, si bien dichas medidas en algunos casos son de carácter puramente técnico y, en otros, se precisarán medidas normativas de naturaleza reglamentaria.

La Ley acoge en su articulado los principios de origen tecnológico que han de pasar a formar parte de la lógica administrativa como la neutralidad tecnológica o la interoperabilidad de los sistemas de información. Estos principios son de gran importancia a la hora de prestar servicios digitales de administración electrónica de acuerdo a los estándares esperados por los usuarios. Los servicios digitales se realizarán primando la facilidad de uso de los mismos sobre otras consideraciones. En este ámbito, se primará la utilización de lenguaje natural junto con el lenguaje administrativo, la organización de la información de acuerdo a arquitecturas lógicas para la ciudadanía sobre organizaciones de la información basadas en la arquitectura institucional y la simplificación de todos los elementos que conlleven transacciones digitales.

V

El título preliminar incluye, en su capítulo I el ámbito subjetivo de aplicación de esta Ley, los principios generales de actuación y funcionamiento del sector público y las potestades y prerrogativas que se reconocen a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Ley se aplica a todo el sector público autonómico que comprende la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón así como su sector público institucional y se definen además con precisión los entes que forman parte del sector público institucional.

En el capítulo II se regulan los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el régimen de ejercicio de sus competencias. Dentro del régimen jurídico de los órganos colegiados es de destacar la regulación de su funcionamiento tanto de forma presencial como a distancia, haciendo uso de las potencialidades y recursos de

las tecnologías de la información y la comunicación. Se potencia, en consecuencia, la utilización de medios electrónicos en las reuniones de los órganos colegiados. Respecto a los principios reguladores de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial se efectúa una remisión a la regulación básica del Estado. Se delimita también la competencia para la imposición de sanciones administrativas.

Por último, se dedica un capítulo al funcionamiento electrónico en el que se regula la sede electrónica, el Portal de Internet, los sistemas de identificación y firma, el Catálogo de Servicios, el procedimiento administrativo electrónico, la actuación administrativa automatizada, el dato único y la política de protección de datos personales y seguridad de la información.

VI

El título I se dedica íntegramente a la regulación de la actuación administrativa. Sobre la base de los principios de colaboración y coordinación se profundiza en la importancia de la planificación y programación. Asimismo, para garantizar la relación de la ciudadanía con la administración autonómica a través de medios electrónicos, se otorga un especial protagonismo al departamento competente en materia de administración electrónica, que establecerá los criterios para la racionalización de los procedimientos administrativos pudiendo instar la revisión de los mismos bajo los parámetros de prestación de servicios digitales.

Se garantiza también el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración a través de un punto de acceso general electrónico junto a los derechos ya reconocidos en otras normas de acceso a la información pública y a la protección de datos de carácter personal.

Como novedad frente a la regulación anterior, se sistematizan en esta Ley las formas de ejercicio de la actividad administrativa, ya sea mediante gestión directa o con medios propios, mediante gestión indirecta con arreglo a la normativa vigente en materia de contratos del sector público o a través de los acuerdos de acción concertada con entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación de servicios a las personas.

VII

En el título II se desarrolla el régimen jurídico de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma mediante la adaptación de la normativa básica sobre el procedimiento administrativo común a la estructura organizativa autonómica; siendo la novedad más significativa la supresión de las reclamaciones administrativas previas a la vía civil y laboral, novedad ésta impuesta por la normativa estatal.

VIII

El título III regula la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se organiza en Departamentos para el desarrollo de uno o varios sectores de actividad administrativa con su correspondiente organización territorial en las distintas provincias. La principal novedad es la supresión de las Viceconsejerías en la estructura orgánica de los Departamentos asumiendo las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas las funciones hasta ahora atribuidas a aquéllas.

IX

Las principales novedades en la organización y funcionamiento del sector público autonómico se incluyen en el título IV dedicado al sector público institucional. Se comienza definiendo de manera precisa las entidades que forman parte del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón donde se incluyen los organismos públicos —categoría que comprende a organismos autónomos y entidades de derecho público—, las sociedades mercantiles autonómicas, los consorcios autonómicos, las fundaciones del sector público y las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón. Además, con objeto de limitar la participación de la administración autonómica y de sus organismos o entidades dependientes en cualquier otro tipo de ente o asociación no integrada en el concepto de sector público institucional autonómico, se requiere el acuerdo previo del Gobierno de Aragón que irá acompañado de informes del departamento competente en materia de hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta de participación.

También es novedad la creación de un Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón que contendrá la información tanto de los entes integrantes del sector público autonómico cuanto de cualesquiera otros entes en los que participen los órganos y entidades del sector público autonómico con independencia de su naturaleza jurídica y porcentaje o forma de participación.

Junto a los principios generales de actuación se desarrollan el control de eficacia y el principio de supervisión continua del sector público institucional autonómico. Para ello serán decisivos el plan de actuación y los planes anuales que se elaboren junto con los presupuestos. El control de eficacia se ejercerá por el departamento o entidad de gestión en el caso de las sociedades mercantiles autonómicas y por el departamento de adscripción en el resto de entidades; y en la supervisión continua junto con el departamento de adscripción participará la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Además de definir y clasificar los organismos públicos, incluyendo en este concepto organismos autónomos y entidades de derecho público se precisa, en mayor medida, el contenido del plan inicial de actuación así como de sus estatutos. Se desarrolla también el procedimiento de fusión y extinción de los mismos. Especialmente significativa es

la nueva regulación sobre régimen de personal de las entidades de derecho público que será funcionario o laboral, y únicamente de manera excepcional, podrá seleccionar personal laboral propio. Se introducen también especialidades en materia de régimen jurídico, contratación y personal para aquellas entidades de derecho público que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.

Respecto a las sociedades mercantiles autonómicas se supera la definición de las mismas que venía incluida en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón vinculada única y exclusivamente al porcentaje de participación en su capital social. La nueva regulación es más acorde con la evolución que se ha producido en la legislación sobre patrimonio de las administraciones públicas donde lo relevante es el ejercicio de influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen.

Se definen y regulan por primera vez los consorcios autonómicos y se desarrolla de manera exhaustiva la regulación de las fundaciones del sector público autonómico que se limitaba hasta ahora a una disposición adicional en la normativa que ahora se deroga.

X

El título V desarrolla las relaciones interadministrativas y los principios que las rigen. Se define de una manera más clara el concepto de convenio y sus distintas tipologías integrándose su regulación en esta Ley al derogarse la hasta ahora vigente Ley de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este título se incluyen también los órganos de cooperación ya definidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón como son la Comisión Bilateral de Cooperación, la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros o la Comisión Mixta de Transferencias.

Las relaciones electrónicas entre Administraciones se desarrollan en el último capítulo de este título bajo los principios de interconexión e interoperabilidad, reutilización de sistemas y aplicaciones y transferencia de tecnología entre administraciones.

XI

En las disposiciones adicionales se definen el Servicio Jurídico del Gobierno de Aragón y el Boletín Oficial de Aragón que se publicará en la sede electrónica del Gobierno de Aragón. Se regula el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos de Cooperación así como la adaptación a la nueva regulación de las entidades y organismos públicos existentes y de los convenios hasta ahora vigentes. Además de las especialidades de la Administración Tributaria autonómica es importante la cláusula de progreso y adaptación a la evolución tecnológica en materia de administración electrónica. Por último, se regula la adaptación a la tramitación electrónica del procedimiento en materia de expropiación forzosa y la sustitución del recurso de alzada en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción.

Se establece el régimen transitorio aplicable a las entidades y organismos públicos existentes, los encargos a empresas públicas ya realizados y las reclamaciones presentadas ante la Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés de Inserción.

En la disposición derogatoria única se recogen las normas de igual o inferior rango que quedan derogadas.

Entre las disposiciones finales se incluyen modificaciones puntuales de la Ley del Presidente y del Gobierno, de la Ley del Consejo Consultivo de Aragón y de los textos refundidos de la Ley de Patrimonio y de la Ley de Hacienda, con objeto de adaptarse a la nueva regulación. Se incluye también una habilitación al Gobierno de Aragón para el desarrollo reglamentario de la administración electrónica.

En la tramitación de esta norma se ha efectuado el trámite de audiencia con el resto de Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se han emitido los informes preceptivos de la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Pública, de la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería y de la Dirección General de Servicios Jurídicos así como el informe de evaluación de impacto de género.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.— *Objeto de la Ley.*

Esta Ley establece y regula el régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, las especialidades del procedimiento administrativo que son aplicables a la Administración autonómica, los principios de responsabilidad patrimonial, y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración autonómica y de su sector público institucional.

Artículo 2.— *Ámbito subjetivo.*

1. La Ley se aplica, en la forma y términos previstos en la misma, a todo el sector público autonómico que comprende:

- a) La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- b) El sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. El sector público institucional se integra por los siguientes entes:

- a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los cuales se clasifican en:
- 1º Organismos autónomos.
 - 2º Entidades de derecho público.
- b) Las sociedades mercantiles autonómicas.
- c) Los consorcios autonómicos.
- d) Las fundaciones del sector público.
- e) Las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón.
3. Tienen la consideración de Administración Pública la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los organismos autónomos, las entidades de derecho público y los consorcios autonómicos.
4. Cada una de estas entidades actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

Artículo 3. — *Principios generales.*

1. Bajo la dirección del Gobierno de Aragón, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Aragón, a la Ley y al Derecho.
2. Deberá respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
- a) Servicio efectivo a la ciudadanía.
 - b) Simplicidad, claridad, accesibilidad y proximidad a los ciudadanos y a las ciudadanas.
 - c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
 - d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
 - e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
 - f) Responsabilidad en la gestión pública.
 - g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
 - h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
 - i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
 - j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
 - k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
3. Las relaciones interorgánicas en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de ésta con sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes se realizará a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garanticen la protección de los datos de carácter personal y faciliten preferentemente la prestación conjunta de servicios a las personas interesadas.
4. Cuando la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exija el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberá:
- a) Aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva.
 - b) Motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen sin que, en ningún caso, se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
 - c) Evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.
 - d) Velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrá comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias, con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal.

Artículo 4. — *Potestades y prerrogativas.*

1. La Administración de la Comunidad Autónoma actuará con personalidad jurídica propia y gozará, en el ejercicio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración General del Estado y, en todo caso, de las siguientes:
- a) La potestad de autoorganización.
 - b) La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos.
 - c) Los poderes de ejecución forzosa, incluida la facultad de apremio.
 - d) La potestad expropiatoria.
 - e) Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de los bienes públicos.
 - f) La potestad inspectora y sancionadora.
 - g) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos establecidos en la normativa de patrimonio, así como los privilegios de prelación, preferencia y aquellos otros reconocidos a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a la Hacienda Pública del Estado y en igualdad de derechos con las demás Comunidades Autónomas.
 - h) La exención de toda obligación de garantía o caución ante los órganos administrativos o ante los tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales.
2. Estas potestades y prerrogativas corresponderán también a los organismos públicos y consorcios autonómicos en la medida en la que les sean expresamente reconocidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso, les corresponderán las recogidas en los apartados b), g) y h) del apartado anterior.

CAPÍTULO II

DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sección 1.ª

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 5. — Órganos administrativos.

1. Tendrán la consideración de órganos administrativos aquellos a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, podrá crear los órganos administrativos que considere necesarios para el ejercicio de sus competencias.

Artículo 6. — Creación.

1. La creación de un órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 - a) Determinación de su forma de integración en la Administración de la Comunidad Autónoma y su dependencia orgánica y funcional.
 - b) Delimitación de sus funciones y competencias.
 - c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
2. La creación de un nuevo órgano, así como cualquier modificación de la estructura orgánica del Gobierno de Aragón hasta el nivel de jefaturas de servicio, determinará su inscripción o modificación en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas existente en cada momento, dependiente de la Administración General del Estado, con el fin de obtener el correspondiente código de identificación que permita la interoperabilidad organizativa.
3. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población, previo informe del departamento competente en materia de organización.

Artículo 7. — Órganos consultivos.

La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En este último caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.

Artículo 8. — Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
2. Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de las personas destinatarias o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones, circulares y órdenes de servicio se publicarán mediante Orden de la persona titular del Departamento en el «Boletín Oficial de Aragón», sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la normativa en materia de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón.
3. El incumplimiento de las instrucciones, circulares u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Sección 2.ª

COMPETENCIA

Artículo 9. — Competencia.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
2. La delegación de competencias, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
3. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
4. Si alguna disposición atribuye la competencia a la Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de la materia y del territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a su superior jerárquico común.

Artículo 10.— Delegación de competencias.

1. Los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.

2. Asimismo, los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión.

3. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

4. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

5. Las delegaciones de competencias no perderán su eficacia por cambio del titular del órgano delegante.

Artículo 11.— Ámbito de la delegación.

1. Las competencias de naturaleza administrativa atribuidas a la persona titular de la Presidencia y, en su caso, a la persona titular de la Vicepresidencia serán delegables en las personas titulares de los Departamentos en los términos establecidos en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

2. Las competencias de quienes ostentes la titularidad de los Departamentos serán delegables con las excepciones establecidas en el artículo siguiente.

3. Las competencias de las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, de las Direcciones Generales, de las Delegaciones Territoriales, de las Jefaturas de Servicio y de las Direcciones de Servicios Provinciales serán delegables previa autorización expresa de la persona titular del Departamento del que dependan.

Artículo 12.— Prohibición de delegación.

1. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con órganos constitucionales o estatutarios.

b) La adopción de disposiciones de carácter general.

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Los actos que supongan propuestas de resolución que deban ser sometidas a la aprobación del Gobierno de Aragón

e) La revisión de oficio de los actos nulos, la declaración de lesividad de los actos anulables y los recursos extraordinarios de revisión.

f) La revocación de los actos de gravamen o desfavorables.

g) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

2. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

Artículo 13.— Requisitos formales de la delegación de competencias.

1. La delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por la persona titular del Departamento de quien dependa el órgano delegante y, en el caso de los organismos públicos vinculados o dependientes, por quien ostente la titularidad del órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación.

2. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del órgano superior común si ambos pertenecen al mismo Departamento, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Departamentos.

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

5. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.

Artículo 14.— Delegación de competencias en Corporaciones de Derecho Público.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, podrá delegar competencias en las corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, sin perjuicio de la aplicación de otras técnicas de colaboración.

2. La delegación a la que se refiere el apartado anterior podrá realizarse mediante convenio específico, que deberá ser autorizado por el Gobierno de Aragón.

3. La delegación contendrá el régimen jurídico del ejercicio de las competencias por la corporación delegada y hará mención especial de las formas de dirección del ejercicio de la competencia delegada que se reserve la Administración autonómica.

4. Las resoluciones que dicte la corporación en uso de la delegación acordada no agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular del Departamento a quien corresponda por razón de la materia.

Artículo 15.— Avocación.

1. Los órganos jerárquicamente superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando cir-

cunstances de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La avocación requerirá la autorización expresa de la persona titular del Departamento.

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

3. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

Artículo 16.— *Encomienda de gestión.*

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos, los organismos públicos o los consorcios podrá ser encomendada a otros órganos, organismos públicos o consorcios de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. El órgano administrativo, el organismo público o consorcio que acuerde la encomienda deberá dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte a la misma o en los que se integre la concreta actividad material o técnica objeto de encomienda.

3. En todo caso, el órgano administrativo, organismo público o consorcio que reciba la encomienda tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la misma, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

4. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

Artículo 17.— *Requisitos formales de la encomienda de gestión.*

1. Sin perjuicio de las exigencias establecidas para otros casos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la encomienda de gestión entre órganos administrativos, organismos públicos y consorcios del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón requerirá acuerdo expreso de los órganos o entidades intervinientes.

2. El órgano competente para formalizar las encomiendas de gestión es la persona titular del Departamento o del órgano máximo de dirección del organismo público o consorcio encomendante. En el caso de que la encomienda se realice con un órgano u organismo público que no pertenezca a la Administración de la Comunidad Autónoma, requerirá la autorización previa del Gobierno de Aragón. En estos casos, se formalizará mediante la firma de un convenio.

3. La Orden mediante la que se autorice la encomienda de gestión o, en su caso, el convenio en el que ésta se formalice, contendrá el régimen jurídico que incluirá, al menos:

a) Mención expresa de la actividad o actividades a las que afecte y a la competencia del órgano encomendante sobre dicha actividad.

b) El plazo de vigencia y posibilidad de prórroga.

c) La naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

d) Las obligaciones asumidas por cada parte.

4. Para su eficacia, el documento de formalización deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón». Además, cuando la encomienda se formalice mediante convenio, éste deberá inscribirse en el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos de Cooperación.

Artículo 18.— *Delegación de firma.*

1. Quienes sean titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten ya sea por atribución o bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 12.

2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

Artículo 19.— *Suplencia.*

1. En los supuestos de vacante, ausencia, o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación, quienes ostenten la titularidad de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente.

2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.

3. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.

Artículo 20.— *Designación de suplentes.*

1. La designación de suplente podrá efectuarse:
 - a) En los decretos de estructura orgánica de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma o en los estatutos de sus organismos públicos vinculados o dependientes según corresponda.
 - b) Por los órganos competentes de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.
2. Serán órganos competentes para la designación de suplentes en los supuestos previstos en el artículo anterior los siguientes:
 - a) Las personas titulares de los Departamentos se sustituirán entre sí, previa designación de suplente por la Presidencia del Gobierno.
 - b) El Consejero o Consejera del Departamento designará a quien sustituya a las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, de las Direcciones Generales o de las Direcciones de los organismos públicos.
 - c) El superior jerárquico directo designará al suplente de las Jefaturas de Servicio.
3. Cuando la designación no se realice de manera expresa, la suplencia se efectuará entre los órganos de la misma jerarquía atendiendo al orden de precedencia establecido en los correspondientes decretos de organización departamental y estructura orgánica.

Artículo 21.— *Conflictos de atribuciones.*

1. El conflicto de atribuciones podrá plantearse a partir de una decisión positiva o negativa sobre el conocimiento y la resolución de un determinado asunto que manifiesten los órganos concernidos, de oficio o a instancia de las personas interesadas en el procedimiento.
2. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a las personas interesadas.
3. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.
Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
4. Tras la fijación de su posición por los órganos que entren en conflicto, el que estuviere conociendo de un asunto suspenderá su tramitación y elevará las actuaciones al órgano que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente, sea competente para resolver.
5. El conflicto se resolverá dentro del plazo máximo de quince días, contados desde aquél en el que se eleven las actuaciones al órgano competente para resolver.
6. En caso de silencio, se entenderá que la competencia corresponde al órgano que estuviere conociendo del asunto originariamente, aunque hubiera declinado su competencia. En este supuesto, las personas interesadas podrán reclamar que prosigan las actuaciones, sin perjuicio de la reserva de recursos y acciones para cuando procediere su ejercicio.
7. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de la misma Administración no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

Artículo 22.— *Competencia para la resolución de los conflictos de atribuciones.*

1. Los conflictos de atribuciones que se susciten entre los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma serán resueltos por la persona titular de la Presidencia.
2. Los conflictos de atribuciones que se planteen entre órganos de un Departamento que no estén relacionados jerárquicamente serán resueltos por la persona titular del mismo.

Sección 3.ªDEL RÉGIMEN JURÍDICO
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS**Artículo 23.**— *Órganos colegiados.*

1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y que actúen integrados en la Administración de la Comunidad Autónoma o alguno de sus organismos públicos.
2. La constitución de un órgano colegiado tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma o acuerdo de creación, o en el convenio suscrito al efecto con otras Administraciones Públicas, de los siguientes extremos:
 - a) Sus fines u objetivos.
 - b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
 - c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes miembros.
 - d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya.
 - e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

Artículo 24.— *Régimen jurídico de los órganos colegiados.*

1. Los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma se regirán por la legislación básica del Estado, por las disposiciones contenidas en esta sección, por sus normas o convenios de creación y por sus reglamentos de régimen interior.

2. La norma o acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el «Boletín Oficial de Aragón». Se publicará también en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. Adicionalmente, podrán publicarse en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.

3. Los órganos colegiados en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración de la Comunidad Autónoma, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.

Artículo 25.— *Presidencia de los órganos colegiados.*

1. En todo órgano colegiado existirá un Presidente o Presidenta a quien le corresponderá:

- a) Ostentar la representación del órgano.
- b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
- c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
- d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 24.3, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.
- e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
- f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
- g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, quien ostente la Presidencia será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia que corresponda y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

Artículo 26.— *Miembros de los órganos colegiados.*

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:

- a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en el mismo plazo.
- b) El deber de asistencia y leal desempeño de sus funciones.
- c) Participar en los debates de las sesiones.
- d) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.
- e) Formular ruegos y preguntas.
- f) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
- g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

2. Los miembros del órgano colegiado deberán abstenerse cuando concurra conflicto de interés o alguna de las causas de abstención previstas en esta ley.

3. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.

4. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

Artículo 27.— *Secretaría.*

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario o Secretaria que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

2. Corresponderá al Secretario o Secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

3. La designación y el cese, así como la sustitución temporal de la persona titular de la Secretaría en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano o, en su defecto, por acuerdo del mismo.

4. En caso de que la persona titular de la Secretaría no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.

Artículo 28.— *Funciones del Secretario o Secretaria.*

Corresponde a la persona titular de la Secretaría del órgano colegiado:

- a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.

- b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la Presidencia así como las citaciones a los miembros del mismo.
- c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
- d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
- e) Expedir certificaciones de las actuaciones, consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
- f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario o de Secretaria.

Artículo 29.— Convocatorias y sesiones.

1. Los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, audiovisuales y medios equivalentes con las mismas funciones en cada momento, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de la persona titular de la Presidencia o de la persona titular de la Secretaría o de quienes les suplan, en su caso, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, quienes ostenten la titularidad de la Presidencia, de la Secretaría y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa si así lo deciden todos sus miembros.

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, salvo que la norma de creación o funcionamiento del órgano establezca otra distinta. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse a la persona titular de la Secretaría de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con la Administración por esta vía.

Artículo 30.— Actas.

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

2. La persona titular de la Secretaría elaborará el acta con el visto bueno de quien ostente la Presidencia y la remitirá, a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

3. En el acta figurará, si así se solicita, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.

Asimismo, cualquier miembro del órgano tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto o, en el plazo que

señale quien ostente la Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.

5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir quien ostente la Secretaría certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de la mayoría precisa para su aprobación por cualquier medio de la persona titular de la Secretaría deje expresión y constancia.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

Artículo 31.— *Delegación de competencias.*

1. Los órganos colegiados podrán delegar en otros órganos el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas cuando así lo dispongan sus normas constitutivas.

2. El régimen jurídico de esta delegación deberá respetar los principios de carácter formal establecidos en la legislación básica estatal y en esta Ley. Los acuerdos adoptados por delegación deberán adoptarse con las mismas mayorías que se requieran para el órgano delegante.

Artículo 32.— *Normas de funcionamiento de determinados órganos colegiados.*

El régimen jurídico de los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma en los que participen representantes de varios órganos de la Admon de la CA junto con representantes de otras Administraciones Públicas o de intereses sociales será el establecido en sus propias normas de funcionamiento. En todo caso, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El Presidente del órgano dirimirá con su voto los empates cuando así lo establezcan las normas específicas del órgano.

b) La sustitución de la persona titular de la Presidencia en los casos de ausencia, enfermedad o vacante deberá estar regulada en las normas específicas del órgano. En ausencia de regulación, será válido el acuerdo que, al efecto, adopte el pleno del órgano colegiado.

c) Las entidades representativas de intereses sociales que participen en la composición de un órgano colegiado podrán sustituir a sus representantes titulares en todo momento mediante la acreditación ante la secretaría del órgano del nombre del sustituto. En todo caso, deberá respetarse la regulación que establezca su normativa específica.

d) El titular de la Presidencia podrá considerar válidamente constituido el órgano, con independencia del número de miembros presentes, cuando lo estén los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las organizaciones representativas de los intereses sociales a quienes se haya atribuido expresamente la condición de portavoces. Aunque varias organizaciones representen los mismos intereses sociales, cada una de ellas podrá designar su respectivo portavoz.

Sección 4.ª

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

Artículo 33.— *Abstención.*

1. Las autoridades y el personal al servicio de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quienes se encuentren en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenar que se abstengan de toda intervención en el procedimiento.

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de la Administración pública en los que concurren motivos de abstención no implicará, necesariamente y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

5. La no abstención en los casos en que concorra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.

Artículo 34.— Recusación.

1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por las personas interesadas en cualquier momento de la tramitación del procedimiento mediante escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
2. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.
3. Si el órgano superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará inmediatamente su sustitución.
4. Si la persona recusada niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

CAPÍTULO IIIPRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA
Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL**Artículo 35.— Principios y régimen jurídico de la potestad sancionadora.**

1. La potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
3. La competencia en materia de imposición de sanciones corresponde, en función de la cuantía, a los órganos a continuación relacionados, en aquellos casos en los que no exista previsión legal o reglamentaria expresa en la legislación específica aplicable:
 - a) Hasta doce mil euros a quienes ostenten la titularidad de la Dirección del Servicio Provincial u órganos asimilados que resulten competentes por razón de la materia.
 - b) Sanciones cuya cuantía supere los doce mil euros hasta treinta mil euros a la persona titular de la Dirección General u órganos asimilados que resulten competentes por razón de la materia.
 - c) En todo caso, queda reservada a quienes ostenten la titularidad de los Departamentos la imposición de sanciones cuya cuantía supere los treinta mil euros.
4. Las competencias atribuidas a las personas titulares de las Direcciones de los Servicios Provinciales de los Departamentos por norma con rango de ley o reglamentario en los casos en los que no se creen en la estructura orgánica, se ejercerán por la persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia y por el Secretario General Técnico cuando sean competencias de naturaleza horizontal por referirse a los servicios comunes, gestión presupuestaria, contratación y gestión de personal del Departamento.

Artículo 36.— Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, en los términos y con arreglo al régimen establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y con aplicación del procedimiento previsto al efecto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por las disposiciones de desarrollo que pueda dictar la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El procedimiento se podrá iniciar a instancia de parte o de oficio. La resolución competirá, en todo caso, a quien sea titular del Departamento correspondiente por razón de la materia salvo que una ley atribuya la competencia al Gobierno.

CAPÍTULO IV

FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO

Artículo 37.— Principios aplicables.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón adoptará las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento electrónico de acuerdo con los principios de transparencia, publicidad, eficiencia, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad tecnológica e interoperabilidad, conforme a lo establecido en la normativa básica estatal sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público.

Artículo 38.— Sede electrónica.

1. La sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón es la dirección electrónica accesible a través de redes de telecomunicaciones que posibilita la relación digital entre las personas, empresas y entidades usuarias de servicios gestionados por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y los órganos responsables y gestores de los procedimientos administrativos correspondientes.

2. La sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón será única y su ámbito de aplicación es el conjunto de departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y entidades de derecho público.

3. Excepcionalmente se podrán crear sedes electrónicas asociadas a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La creación de una nueva sede asociada o su supresión se realizará mediante orden conjunta de las personas titulares del departamento promotor de la sede y del departamento competente en materia de administración electrónica. En el caso de organismos públicos la creación de sedes asociadas se realizará por Orden conjunta de las personas titulares del departamento al que esté adscrito el organismo público y del departamento competente en materia de administración electrónica.

4. La creación de una sede asociada se deberá justificar en términos de una mejor eficiencia en las relaciones digitales con los usuarios, el volumen de trámites previstos realizar a través de esa sede y la necesidad técnica de no integración en la sede general basada en sistemas diferenciados de acceso a los servicios, identificación o firma.

5. A través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón se podrá acceder a todas las sedes asociadas de los departamentos y organismos públicos de Aragón. La sede electrónica se integrará en el Portal de Internet de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 39.— *Portal de Internet.*

1. El Portal de Internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón es www.aragon.es, punto de entrada electrónico de su titularidad que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sus contenidos y canales mínimos se desarrollarán reglamentariamente.

2. Excepcionalmente se podrán crear portales asociados al Portal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La creación de un nuevo portal asociado o su supresión se realizará mediante orden conjunta de las personas titulares del departamento promotor y del departamento competente en materia de sociedad de la información. En el caso de organismos públicos la creación de portales de internet se realizará por Orden conjunta de las personas titulares del departamento al que esté adscrito el organismo público y del departamento competente en materia de sociedad de la información.

3. La creación de un Portal se deberá justificar en términos de una mejor eficiencia en las relaciones digitales con los usuarios, el volumen de accesos previstos y la necesidad técnica de no integración de los contenidos en el Portal de Internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. El Portal de Internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón se configura como el Punto de Acceso General e incluirá la sede de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la relación de Portales de Internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 40.— *Sistemas de identificación y firma en la sede electrónica y sedes asociadas.*

1. La sede electrónica y sedes asociadas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón utilizarán como sistema de identificación y firma de los usuarios Cl@ve, Sistema de Identificación y Firma Electrónica utilizado por la Administración General del Estado, o sistema equivalente que se desarrolle por esta, garantizando de esta manera la identificación y firma mediante certificado electrónico reconocido conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. La sede electrónica y sedes asociadas podrán utilizar sistemas de identificación o firma adicionales basados en clave concertada, siempre y cuando se realice un registro previo de los usuarios que permita acreditar su identidad, conforme a lo dispuesto en la legislación básica, a solicitud del departamento competente en materia de administración electrónica y de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 41.— *Catálogo de Servicios.*

1. El Catálogo de Servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón constituye el inventario de información administrativa donde se relacionan todos los servicios que se prestan a los ciudadanos, empresas y entidades por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos. Su contenido se desarrollará reglamentariamente y su información estará asociada a los trámites que se pueden realizar en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo ser completa y comprensible por los ciudadanos.

2. La gestión del Catálogo de Servicios es competencia del departamento competente en materia de administración electrónica. La publicidad de los nuevos servicios disponibles, la modificación de los existentes o su baja se realizará únicamente en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde el departamento competente en materia de administración electrónica se podrá instar de oficio una revisión de la información del Catálogo de Servicios en caso de falta de coherencia de la información de los servicios suministrada por parte de los órganos responsables.

3. Todos los servicios disponibles en la sede y sedes asociadas deberán estar identificados en el Catálogo de Servicios. La información de los portales asociados y sedes asociadas debe ser coincidente con la información del Catálogo de Servicios. En caso de discrepancia, se considerará información válida frente a terceros la que conste en el Catálogo de Servicios.

4. La regulación de los procedimientos y servicios debe ser coherente con la información que se suministra de éstos a través del Catálogo de Servicios. Se establecerán reglamentariamente mecanismos que garanticen la co-

herencia entra la información que se publica en el Boletín Oficial de Aragón y su actualización en el Catálogo de Servicios.

Artículo 42.— *El procedimiento administrativo electrónico.*

1. En la normativa reguladora de los procedimientos administrativos que sean responsabilidad de los órganos de la Administración Pública se deberán establecer las formas de presentación de las solicitudes y documentación por parte de las personas interesadas, los medios de relación, si alguno de los actos administrativos se va a producir mediante una actuación administrativa automatizada y la forma y medios válidos para la interposición de los recursos administrativos correspondientes. Deberá establecerse si los interesados en el procedimiento tienen obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Únicamente cuando la gestión del procedimiento administrativo electrónico se realice a través de una herramienta informática que recogiera de forma individualizada los datos de las solicitudes de las personas interesadas y los incorpore en una base de datos se podrá limitar la presentación de dichas solicitudes a la sede electrónica de la Administración Pública aragonesa.

3. En la normativa reguladora se establecerá la documentación que es necesario aportar por las personas interesadas. Se establecerá el momento de presentación intentado minimizar la documentación necesaria para el inicio del procedimiento diferenciándola de la necesaria con carácter previo a la terminación del procedimiento. Asimismo, se identificará qué documentación no es necesario aportar si los datos que la componen ya obran en poder de la Administración estableciendo el medio con el que las personas interesadas podrán ejercer su derecho de oposición o mostrar su consentimiento a la consulta.

4. Para la tramitación del procedimiento administrativo electrónico, los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos utilizarán, de forma directa o a través de integración, las herramientas corporativas de administración electrónica, en las condiciones establecidas en esta Ley y reglamentariamente.

Artículo 43.— *Actuación administrativa automatizada.*

1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por la Administración Pública en el marco de procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público, de acuerdo con las especificaciones que se establezcan reglamentariamente.

2. El sistema de firma para la actuación administrativa automatizada en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón será el sello de órgano. El sello de órgano como método de firma se utilizará exclusivamente para los supuestos de actuación administrativa automatizada en las condiciones que se desarrollen reglamentariamente.

3. No se considerará actuación administrativa automatizada cuando sea necesario aplicar criterios subjetivos de decisión bien de forma individualizada o colectiva, ni la ejecución de procesos fragmentados dentro de un mismo acto o actuación administrativa.

4. El departamento con competencias en materia de administración electrónica definirá el marco al que deben ajustarse los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el desarrollo de actuaciones administrativas automatizadas. Reglamentariamente, identificará los criterios de modelización de algoritmos, de publicación de los árboles de decisión y los códigos fuente, de almacenaje, de identificación de los responsables, así como los criterios éticos de actuación en el tratamiento de la información.

Artículo 44.— *Dato único y compartido.*

1. Los titulares de los órganos administrativos son los responsables de la gestión de la información que sirve de base a la toma de decisiones o a la actuación administrativa sea automatizada o individualizada.

2. Los datos incluidos en las bases de datos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón serán considerados como válidos a efectos de la actuación administrativa automatizada y de la provisión de información pública. A estos efectos, los órganos responsables de los procedimientos administrativos serán responsables de la integridad, veracidad y exactitud de los datos que obren en sus bases de datos.

3. El departamento con competencias en administración electrónica establecerá los criterios necesarios para la consecución del objetivo de dato único y compartido en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que conlleva que la información se introduzca una sola vez en origen, se mantenga depurada y actualizada por los órganos responsables, y se pueda gestionar o consultar desde cualquier punto o sistema que así lo requiera en las condiciones que se establezcan reglamentariamente y, en todo caso, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal.

4. En todo caso, los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán poner a disposición sus datos para su verificación y consulta a través del mismo Servicio de Consulta y Verificación de Datos o herramienta corporativa equivalente gestionada por el departamento con competencias en materia de administración electrónica que garantiza la integración con la plataforma de intermediación estatal.

Artículo 45.— *Política de Protección de Datos Personales y Política de Seguridad de la Información.*

1. La Comunidad Autónoma de Aragón, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y del Esquema Nacional de Seguridad, establecerá una Política de Protección de Datos y una Política de Seguridad de

la Información que especifique los principios rectores, obligaciones, organización y responsabilidades que deberán contemplar los organismos y entidades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. La Política de Protección de Datos y la Política de Seguridad de la Información se aprobará por Decreto del Gobierno de Aragón y será de aplicación directa a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. El contenido de la Política de Seguridad de la Información podrá ser adaptada por los diferentes departamentos y organismos públicos de forma motivada y atendiendo, en todo caso, al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

3 La preservación de la seguridad en la utilización de medios electrónicos será considerada objetivo común de todas las personas al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo estas responsables del uso correcto de los activos de tecnologías de la información y comunicaciones puestos a su disposición

TÍTULO I

DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 46.— *Principios de colaboración, auxilio y mutua información.*

1. La actuación de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos se fundamentará en los principios de colaboración, auxilio y mutua información.

2. Los órganos administrativos están obligados a facilitarse recíprocamente la información precisa para el adecuado desarrollo de sus competencias. Los titulares de estos órganos serán responsables del cumplimiento de este deber.

3. Las relaciones entre ellos, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas y garantizarán la protección de los datos de carácter personal.

Artículo 47.— *El principio de coordinación en la actuación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.*

1. Los Departamentos y los organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma coordinarán sus actividades para una mejor consecución de los objetivos del Gobierno de Aragón.

2. Cada órgano deberá ponderar, en el ejercicio de sus competencias, no sólo sus fines propios, sino también los de la Administración de la Comunidad Autónoma en su conjunto y se facilitará preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

3. Las personas titulares de los Departamentos tendrán el deber de impulsar e instrumentar el cumplimiento del principio de coordinación en el ámbito de sus competencias.

4. La coordinación administrativa se podrá instrumentar a través de la elaboración de planes y programas departamentales o interdepartamentales, la creación de órganos de esta índole o la emisión de directrices y criterios técnicos de actuación.

5. En los planes y programas de coordinación se fijarán los objetivos comunes a los que habrán de ajustarse los centros directivos afectados, en el seno de uno o de varios Departamentos y respecto a uno o a varios sectores de la gestión administrativa.

CAPÍTULO II

PROGRAMACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

Artículo 48.— *Planificación y Programación de la actuación administrativa.*

1. La Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos se regirán en su actuación por los principios de planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Se garantizará la eficacia en el cumplimiento de los objetivos determinados, la economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2. El diseño de la estrategia y la elaboración de las directrices que han de seguirse para la prestación de servicios como Administración digital por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma corresponderá al departamento con competencias en administración electrónica. Los diferentes departamentos deberán colaborar en la simplificación administrativa según los criterios generales que defina el departamento competente en materia de administración electrónica.

3. Se establecerán planes y programas anuales y plurianuales en los que se definirán objetivos concretos de gestión, las actividades y los medios necesarios para llevarlos a cabo, así como el coste estimado y tiempo previsto para su consecución. Estos programas se basarán en los objetivos políticos y en los plazos fijados por el Gobierno de Aragón y determinarán los responsables de su ejecución.

4. La actuación inversora de la Administración de la Comunidad Autónoma será objeto de una programación interdepartamental específica, de carácter anual o, en su caso, plurianual con el fin de conseguir que dicha inversión sea coordinada y eficiente.

5. Los planes y programas a los que se refieren los apartados anteriores, el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en los mismos así como los resultados obtenidos serán evaluados periódicamente y publicados en el Portal de Transparencia, junto con los indicadores de medida y valoración, por los Departamentos y demás entidades de su sector público institucional y, en su caso, por los órganos con competencia específica para ello en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 49.— *Elaboración y aprobación de los planes.*

1. Los planes se aprobarán por Orden del titular del Departamento promotor de los mismos, excepto cuando se trate de planes que afecten a varios departamentos, en cuyo caso se aprobarán por Acuerdo del Gobierno de Aragón.

2. Cuando de su contenido se deriven consecuencias económicas, requerirán del informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos en el que se analizará y valorará la sostenibilidad financiera del mismo de acuerdo con lo previsto en la normativa de estabilidad presupuestaria.

Artículo 50.— *Racionalización de los procedimientos.*

1. Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos serán responsables de la racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. El departamento competente en materia de administración electrónica propondrá criterios para la racionalización de los procedimientos administrativos electrónicos que faciliten la prestación de servicios a la ciudadanía.

2. El departamento competente en materia de administración electrónica instará la revisión de los procedimientos administrativos con objeto de homogeneizar trámites dentro de los mismos y de modificar las peticiones de identificación a las y los ciudadanos así como las peticiones de documentación que no se consideren necesarias para la prestación de los servicios.

3. El departamento con competencias en materia de administración electrónica definirá las condiciones necesarias para que se puedan incorporar a la prestación de servicios tratamientos automatizados de datos que tengan por finalidad ofrecer de forma proactiva servicios adaptados a las necesidades de las personas, empresas o entidades interesadas de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa de protección de datos personales

Artículo 51.— *Medios electrónicos.*

La Administración de la Comunidad Autónoma garantizará que las personas interesadas puedan relacionarse con ésta a través de medios electrónicos, para lo que pondrá a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

CAPÍTULO III

DE LAS AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 52.— *El control de eficacia y eficiencia.*

1. Los órganos administrativos se someterán periódicamente a controles, auditorías o inspecciones para evaluar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos que les hayan sido asignados, así como su eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

2. Los controles, las auditorías o las inspecciones se realizarán por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma con competencia específica para ello.

3. Los criterios e indicadores para evaluar la eficacia se determinarán por la persona titular del Departamento competente en materia de organización administrativa. Los criterios e indicadores para evaluar la eficiencia en la asignación y utilización de recursos se dictarán conjuntamente por los Consejeros competentes en materia de organización administrativa y hacienda.

CAPÍTULO IV

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Artículo 53.— *Derecho a relacionarse por medios electrónicos.*

1. En la relación electrónica con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón las personas interesadas dispondrán del Punto de Acceso General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, disponible en www.aragon.es, donde accederán a la sede electrónica de la Administración y, en su caso, a las sedes asociadas.

2. Mediante Orden del titular del departamento con competencias en materia de administración electrónica se regulará el sistema para identificar los funcionarios habilitados en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón para la identificación, firma electrónica de los interesados en los diferentes trámites y procedimientos

Artículo 54.— *Derecho de acceso a la información pública.*

1. Las personas tienen derecho a acceder a la información pública, a los archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución y en la normativa sobre procedimiento administrativo, transparencia y derecho de acceso a la información pública.

2. En particular, se garantizará el conocimiento efectivo de los procedimientos administrativos, de los servicios y de las prestaciones en el ámbito de la Administración.

Artículo 55.— *Derecho a la protección de datos de carácter personal.*

1. En su relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, las personas tienen derecho a la protección de sus datos de carácter personal de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos y, en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones utilizados por la Administración.

2. El cumplimiento por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de las obligaciones de transparencia se llevará a cabo con el límite que exige la protección de datos de carácter personal, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y de transparencia.

CAPÍTULO V

FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 56.— *Régimen de ejercicio de la actividad administrativa.*

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá realizar su actividad de las siguientes formas:

- a) Mediante gestión directa o con medios propios.
- b) Mediante gestión indirecta con arreglo a alguna de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público.
- c) Mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación a las personas de servicios conforme a su normativa específica.

Artículo 57.— *Encargos de ejecución a medios propios.*

1. Conforme a la normativa de contratos del sector público, las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán encargar la ejecución de prestaciones propias de un contrato público a quienes ostenten la condición de medios propios de acuerdo a dicha legislación. Igualmente, esos medios propios podrán realizar encargos tanto a la Administración de la que dependan como a otros medios propios que dependan de la misma.

2. Los encargos de importe superior a tres millones de euros requerirán autorización previa del Gobierno de Aragón.

3. A efectos de lo dispuesto en la normativa de contratos del sector público los medios propios tendrán la condición de poder adjudicador cuando así resulte de la misma.

4. Los medios propios percibirán por la realización del encargo el importe de los costes directos e indirectos en que hubieren incurrido, mediante la aplicación del sistema de tarifas cuyo procedimiento se establecerá reglamentariamente.

5. Los encargos se formalizarán por quienes sean titulares de los Departamentos y de las Presidencias o Direcciones de los organismos públicos y, en los demás supuestos, por el órgano competente de la entidad de que se trate. En dichos encargos figurarán los compromisos y obligaciones asumidas así como las condiciones de realización.

6. El procedimiento para la realización de encargos de ejecución a medios propios se determinará reglamentariamente, siendo trámite esencial del mismo la publicación de la resolución por la que se acuerde el encargo en el Perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón.

7. El pago se efectuará conforme a lo que se acuerde en el encargo de ejecución atendiendo a la actuación efectivamente realizada. Podrá efectuarse un anticipo de hasta el diez por ciento de la primera anualidad correspondiente a cada encargo de ejecución.

No obstante, por razones de eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria, cuando la actuación se financie total o parcialmente con fondos finalistas, previa autorización del Gobierno de Aragón, el encargo de ejecución podrá prever el reconocimiento de la obligación de pago de forma anticipada de la totalidad del coste de la actuación o, en su caso, de la totalidad del importe del coste financiado con fondos finalistas, estableciendo en tal caso las garantías y medidas precisas de seguimiento, control y liquidación al término de la ejecución.

No se exigirán garantías a las entidades integrantes del sector público autonómico, ni cuando la normativa reguladora del gasto de que se trate así lo establezca.

Artículo 58.— *Concepto y régimen general de acción concertada.*

Los acuerdos de acción concertada son instrumentos organizativos de naturaleza no contractual, con las garantías de no discriminación, transparencia y eficiencia en la utilización de fondos públicos, que atienden a la consecución de objetivos sociales y de protección ambiental, a través de los cuales la Administración Pública de la Comunidad Autónoma podrá organizar la prestación a las personas de servicios de carácter social o sanitario cuya financiación, acceso y control sean de su competencia, al producirse una mejor prestación conforme a los citados objetivos, ajustándose al procedimiento y requisitos previstos en la normativa general y sectorial que resulte de aplicación.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CAPÍTULO I

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 59.— *Producción y contenido de los actos administrativos.*

1. Los actos administrativos se producirán por el órgano competente, de acuerdo con los requisitos y procedimiento establecido.
2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos.
3. Los actos administrativos no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aun cuando procedan de un órgano que tenga rango jerárquico superior a aquel que dictó la norma general.

Artículo 60.— *Actos que ponen fin a la vía administrativa.*

1. Ponen fin a la vía administrativa los actos y las resoluciones siguientes:
 - a) Los de la persona titular de la Presidencia, del Gobierno, de las Comisiones Delegadas del Gobierno, en su caso de la persona titular de la Vicepresidencia o Vicepresidencias, y de quienes ostenten la titularidad de los Departamentos.
 - b) Las de otros órganos, organismos y autoridades cuando una norma de rango legal o reglamentario así lo establezca.
 - c) Los actos resolutorios de un recurso de alzada, cualquiera que sea el órgano que los resuelva.
 - d) Las resoluciones de los procedimientos de reclamación o impugnación a los que se refiere el Capítulo IV de este Título.
 - e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
 - f) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial cualquiera que fuese el tipo de relación pública o privada de que derive.
 - g) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora previstos en la normativa que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Los actos y las resoluciones de quienes ostenten la titularidad de los Departamentos serán susceptibles de recurso de alzada ante el Gobierno cuando una ley así lo establezca expresamente.
3. Los actos de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos no pondrán fin a la vía administrativa, salvo que una ley establezca lo contrario.

CAPÍTULO II

DE LA REVISIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 61.— *Revisión de oficio.*

La revisión de oficio de las disposiciones administrativas y de los actos declarativos de derechos se realizará conforme a las siguientes normas:

a) Cuando se trate de disposiciones y actos nulos conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, serán competentes para la revisión de oficio, quien sea titular del Departamento del que emane la disposición o el acto o al que esté adscrito el organismo público que haya dictado el acto y el Gobierno de Aragón respecto de sus disposiciones y actos. Será necesario el previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Aragón.

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por las personas interesadas sin necesidad de recabar dictamen del Consejo Consultivo, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

b) La revisión de los actos favorables para el interesado que sean anulables conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, exigirá la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa tras su declaración de lesividad para el interés público mediante Orden de la persona titular del Departamento del que emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado, o, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, respecto de sus actos. Esta declaración no será susceptible de recurso.

Artículo 62.— *Revocación de actos administrativos.*

1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá revocar, en los plazos previstos en el párrafo siguiente, sus actos, expresos o presuntos, desfavorables o de gravamen, siempre que tal revocación no constituya dispensa

o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. Los actos que de acuerdo con la legislación básica estatal sean nulos de pleno derecho podrán revocarse en cualquier momento. Aquéllos que conforme a dicha legislación sean anulables no podrán revocarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo

3. Dicha revocación se realizará mediante resolución del órgano competente del que emane el acto o, en su caso, mediante Orden de la persona titular del Departamento.

Artículo 63.— *Rectificación de errores.*

Los órganos, autoridades y el personal al servicio de la Administración podrán, en cualquier momento, de oficio o a instancia de la persona interesada rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Cuando la rectificación afecte a las personas interesadas, deberá notificárseles expresamente.

CAPÍTULO III

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Artículo 64.— *Recursos de alzada y de reposición.*

1. Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, serán susceptibles de recurso de alzada, que se podrá interponer ante el órgano superior jerárquico del que los dictó, que será también el competente para su resolución. Igualmente se podrá interponer ante el órgano que dictó el acto impugnado, en cuyo caso, éste deberá remitirlo al competente para resolverlo en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

2. Contra las resoluciones y los actos de trámite previstos en el apartado primero, de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos dependientes de la Administración autonómica, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular del Departamento al que estén adscritos, que también será el competente para resolver.

3. Cabrá la interposición potestativa del recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. En ningún caso se podrá interponer recurso de reposición contra la desestimación de un recurso de alzada.

Artículo 65.— *Recurso extraordinario de revisión.*

1. Los actos firmes en vía administrativa podrán ser objeto del recurso extraordinario de revisión cuando se den las circunstancias que establece la legislación básica.

2. El recurso se interpondrá ante el órgano administrativo que dictó el acto recurrido, que también será el competente para resolverlo.

Artículo 66.— *Reclamaciones económico-administrativas.*

Las reclamaciones económico-administrativas se regularán por su legislación específica.

CAPÍTULO IV

DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 67.— *Criterios generales.*

1. De acuerdo con las previsiones de la legislación básica, el recurso de alzada podrá ser sustituido por reclamación o impugnación ante una Comisión o Tribunal no sometido a instrucciones jerárquicas. Esta sustitución deberá establecerse, en todo caso, mediante ley.

En las mismas condiciones, las leyes podrán determinar la sustitución del recurso de reposición por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para la persona interesada.

2. Las comisiones o tribunales a los que se refiere el apartado anterior, una vez conocido el contenido de la reclamación y el expediente administrativo, emitirán la resolución que en Derecho proceda.

3. El procedimiento administrativo de actuación de estas comisiones o tribunales deberá respetar los principios, las garantías y los plazos que la legislación básica reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

4. En todo caso, la reclamación deberá presentarse dentro del mismo plazo establecido para la interposición de los correspondientes recursos administrativos y a ella se acompañarán los documentos requeridos por el ordenamiento para dicha interposición.

5. El régimen jurídico y los efectos de la ausencia de respuesta a la reclamación presentada serán los que la legislación básica establece en relación con el correspondiente recurso administrativo.

Artículo 68.— *Notificaciones específicas.*

En las notificaciones de los actos administrativos emitidos en los procedimientos en los que los recursos administrativos hayan sido sustituidos por la reclamación o impugnación a la que se refiere este Capítulo, deberá hacerse mención expresa de esta sustitución.

Artículo 69.— *Composición de las comisiones o tribunales.*

1. Las comisiones o tribunales a las que se refiere este Capítulo estarán compuestas por un Presidente o Presidenta, un mínimo de dos Vocales y un Secretario o Secretaria, que actuará con voz y sin voto, salvo que sea también vocal del órgano.

2. La persona titular del Departamento del que emane el acto o la resolución objeto de la reclamación o impugnación designará al Presidente o Presidenta y a los Vocales, así como a sus suplentes, de acuerdo con lo que disponga la Ley que establezca la sustitución de los recursos administrativos. Dicha Ley deberá garantizar, en todo caso, la adecuada titulación y competencia de los miembros de la Comisión y de sus suplentes.

3. El mandato de quien ostente la Presidencia, de los dos Vocales y de sus suplentes será de dos años y sólo podrán ser removidos del cargo por su propia voluntad o por notorio incumplimiento de sus obligaciones. El órgano competente para la remoción será el titular del Departamento del que emane el acto o la resolución objeto de reclamación o impugnación.

4. El Secretario o Secretaria será un funcionario de carrera de nivel superior, designado por la persona titular del Departamento del que emane el acto o la resolución objeto de la reclamación o impugnación.

5. Los miembros de la comisión o tribunal estarán sometidos al régimen de abstención y recusación establecido en la legislación básica estatal.

TÍTULO III

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN

Artículo 70.— *Principios organizativos.*

La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se organizará de acuerdo con los principios de división funcional en Departamentos y gestión territorial mediante Delegaciones Territoriales de ámbito provincial, así como otros órganos o unidades administrativas de ámbito provincial, supracomarcal, comarcal o local que se creen de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

Artículo 71.— *Órganos superiores y órganos directivos.*

1. Los Vicepresidentes o Vicepresidentas, en su caso, y las Consejeras y Consejeros, como titulares de los Departamentos, son los órganos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. Las personas titulares de la Secretaría General de la Presidencia, de las Secretarías Generales Técnicas y de las Direcciones Generales se configuran como órganos directivos.

3. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo.

Artículo 72.— *Los Delegados y las Delegadas Territoriales del Gobierno de Aragón.*

1. Los Delegados y las Delegadas Territoriales del Gobierno de Aragón tendrán nivel orgánico de Director General.

2. Su regulación se regirá por lo previsto en esta Ley y por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

3. Los Delegados y las Delegadas Territoriales del Gobierno de Aragón tendrán la consideración de altos cargos.

Artículo 73.— *Los Servicios.*

Además de los órganos a los que se refieren los artículos anteriores, existirán Servicios en la organización central y podrán existir Servicios Provinciales en la organización periférica.

Artículo 74.— *Los elementos organizativos básicos.*

1. Las unidades administrativas y los puestos de trabajo son los elementos organizativos básicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. Las unidades administrativas estarán integradas por puestos de trabajo vinculados por las funciones que tengan atribuidas y por una jefatura común.

3. Las unidades administrativas se crearán, modificarán y suprimirán a través de las relaciones de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que dispongan las normas sobre modificación de estructuras que apruebe el Gobierno de Aragón a propuesta del titular del Departamento competente en materia de función pública.

4. Las personas titulares de las jefaturas de los órganos y unidades administrativas responderán de la adecuada realización de las funciones atribuidas a aquéllos. Además, quienes ostenten las Jefaturas de Servicio y las Direcciones de los Servicios Provinciales tendrán la responsabilidad inmediata de los recursos humanos y materiales asignados a dichos órganos y deberán promover e impulsar la aplicación de los principios de agilidad, racionalización y simplificación de los procedimientos aplicables a las tareas que tengan encomendadas.

Artículo 75.— *Contenido de las normas organizativas.*

Las normas que establezcan la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma fijarán la estructura que se considere imprescindible para el adecuado ejercicio de sus competencias y deberán distribuir éstas entre los diferentes órganos, de manera que las unidades y los puestos de trabajo se adapten con flexibilidad a los objetivos que, en cada momento, les sean asignados.

Artículo 76.— Competencias generales.

1. Las personas titulares de los Departamentos competentes en las materias de organización administrativa, hacienda y función pública podrán proponer o dictar, en su caso y dentro de su respectivo ámbito de responsabilidad, normas y directrices sobre organización administrativa, procedimiento, inspección de servicios y régimen jurídico y retributivo de la función pública, que serán de aplicación general a todos los Departamentos y al sector público autonómico, sin perjuicio del respeto al principio de reserva de ley y del cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente.

Asimismo, el Departamento competente en materia de inspección de servicios podrá proponer a los demás Departamentos la modificación de sus estructuras organizativas cuando así se establezca en los planes de modernización o racionalización de carácter general que hayan sido aprobados por el Gobierno de Aragón.

2. El Gobierno de Aragón aprobará directrices a las que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público institucional, y que se tendrán en cuenta al confeccionar el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del respeto al principio de reserva de ley y del cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente.

3. Las propuestas sobre modificación de estructuras de los diversos Departamentos deberán cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente y tendrán que ir acompañadas de un estudio comparativo de su coste económico. Estas propuestas serán remitidas a la Inspección General de Servicios para su informe preceptivo dentro de los diez días siguientes. Si el referido informe no se emitiese en dicho plazo se entenderá que es favorable.

4. En el caso de que de las propuestas de modificación de estructuras se derive un incremento de gasto, se deberá solicitar informe previo del Departamento competente en materia de hacienda.

CAPÍTULO IILOS DEPARTAMENTOS
Y SU ESTRUCTURA INTERNA**Artículo 77.— Los Departamentos.**

1. La Administración de la Comunidad Autónoma se organiza en Departamentos, cada uno de los cuales comprenderá uno o varios sectores de la actividad administrativa.

2. Corresponde al Presidente o Presidenta del Gobierno de Aragón la creación, modificación, agrupación y supresión de Departamentos, así como la determinación del sector o sectores de la actividad administrativa a los que se extenderá la competencia de cada uno de ellos.

3. La organización en Departamentos no obstará a la existencia de órganos adscritos directamente a la Presidencia y, en su caso, a las Vicepresidencias del Gobierno. También se les podrán adscribir organismos públicos.

Artículo 78.— Estructura orgánica de los Departamentos.

1. Los Departamentos se estructurarán en Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales y Servicios, dependientes de la persona titular del Departamento. Las Secretarías Generales Técnicas tendrán nivel orgánico de Dirección General.

2. La estructura orgánica de los Departamentos será aprobada mediante Decreto por el Gobierno de Aragón a iniciativa del Departamento interesado y propuesta del Departamento competente en materia de hacienda, en los términos establecidos en el artículo 76.

3. La Dirección General, como división orgánica fundamental de los Departamentos, tiene como función la dirección técnica, la gestión y la coordinación de una o de varias áreas funcionalmente homogéneas.

4. Las Direcciones Generales se organizarán en los Servicios necesarios para el cumplimiento eficaz de las funciones que les sean asignadas.

5. Los Servicios podrán estar integrados en Direcciones Generales o depender directamente de los Consejeros o, en su caso, de los Secretarios Generales Técnicos.

6. En el departamento competente en materia de hacienda se ubicará orgánicamente la Intervención General de la Comunidad Autónoma, con rango de Dirección General.

Artículo 79.— Las Secretarías y los Secretarios Generales Técnicos.

1. Las Secretarías y Secretarios Generales Técnicos tendrán las siguientes competencias:

- a) La representación del Departamento en ausencia o por delegación del Consejero.
- b) La asistencia a las reuniones del Gobierno, cuando sea requerido al efecto, para informar de asuntos específicos del área de responsabilidad que le haya sido atribuida.
- c) La asistencia a las Comisiones Delegadas del Gobierno en caso de imposibilidad de asistencia de la persona titular del Departamento o por delegación de ésta.
- d) Ejercer las competencias que la persona titular del Departamento les delegue.
- e) Prestar asesoramiento técnico a la persona titular del Departamento en relación con la planificación de la actividad del Departamento.

f) Impulsar el control de eficacia del Departamento y de sus organismos públicos mediante la realización de las actividades necesarias para la comprobación del cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de actuación y la adecuada utilización de los recursos asignados.

g) Planificar las actuaciones necesarias para la racionalización y simplificación de los procedimientos y de los métodos de trabajo del Departamento, de acuerdo con las directrices y los criterios técnicos establecidos por el departamento competente en materia de administración electrónica.

h) Proponer los criterios técnicos y las directrices sobre la organización del Departamento.

i) Coordinar las actuaciones del Departamento en relación con la transferencia de funciones y servicios del Estado.

j) Ejercer la jefatura de personal del Departamento.

k) Supervisar la adquisición de suministros, bienes y servicios, así como los expedientes de contratación de cualquier tipo.

l) Preparar, en coordinación con las personas que ostenten la titularidad de las Direcciones Generales, el anteproyecto de presupuesto del Departamento.

m) Gestionar el presupuesto del Departamento.

n) Coordinar, bajo la dirección de la persona titular del Departamento, la actuación de las Direcciones Generales del Departamento.

o) Gestionar todos los servicios comunes del Departamento, así como aquellos que se le encomienden expresamente.

p) Impulsar y coordinar el plan o programa normativo del Departamento.

q) Velar por el cumplimiento de las normas de transparencia en el Departamento, tanto en lo que respecta a la publicidad activa como al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

r) Ejercer las demás competencias que les sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria.

2. Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas serán nombradas mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta de la persona titular del Departamento.

3. Las decisiones administrativas de las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas adoptarán la forma de Resolución.

4. El Secretario o Secretaria General de la Presidencia tendrá las mismas competencias que se atribuyen a quienes ostenten la titularidad de las Secretarías Generales Técnicas y aquellas que le sean atribuidas por el Presidente o Presidenta del Gobierno.

Artículo 80.— *Los Directores y las Directoras Generales.*

1. Los Directores y Directoras Generales son las personas titulares de los órganos encargados de la dirección, la gestión y la coordinación de una o de varias áreas del Departamento. En el ejercicio de estas competencias, tendrán las siguientes facultades:

a) Dirigir, gestionar y coordinar los Servicios integrados en su Dirección General y velar por su buen funcionamiento.

b) Gestionar los recursos humanos, financieros y materiales a su cargo.

c) Proponer al Consejero o Consejera los proyectos de su Dirección General para lograr los objetivos institucionales, así como dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento.

d) Elevar al Consejero las propuestas de resolución que éste deba adoptar en materias que afecten a su Dirección General.

e) Ejercer las demás facultades que le atribuyan las leyes y las disposiciones reglamentarias.

2. Las personas titulares de las Direcciones Generales serán nombrados mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta de la persona titular del Departamento.

3. Las decisiones administrativas de las personas titulares de las Direcciones Generales adoptarán la forma de Resolución.

Artículo 81.— *Los Jefes y las Jefas de Servicio.*

1. Los Jefes y Jefas de Servicio serán nombrados por el Gobierno de Aragón, a propuesta de la persona titular del Departamento, entre funcionarios de carrera de nivel superior.

2. El sistema de provisión de las Jefaturas de Servicio será establecido por la legislación sobre Función Pública de la Comunidad Autónoma.

3. Las decisiones administrativas de los Jefes y Jefas de Servicio adoptarán la forma de Resolución.

CAPÍTULO III ÓRGANOS TERRITORIALES

Artículo 82.— *Las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón.*

1. De conformidad con lo previsto en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, quienes ostenten la titularidad de las Delegaciones Territoriales, como representantes del Gobierno en la respectiva provincia, ejercerán las funciones de dirección, impulso, coordinación y supervisión de los servicios y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma en su ámbito territorial.

2. Corresponderá a las personas titulares de las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón:

a) Dirigir y supervisar, de acuerdo con las directrices que reciban, la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia y elevar, en su caso, al Gobierno de Aragón y a los Departamentos cuantos informes y propuestas consideren procedentes.

b) Coordinar la actividad de los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia y de sus organismos públicos.

c) Velar por la aplicación en la provincia de las disposiciones de carácter general de la Comunidad Autónoma de Aragón.

d) Proponer las medidas que consideren necesarias para simplificar la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia y para racionalizar la utilización y distribución de los recursos humanos de los servicios y organismos públicos y de los recursos materiales de que aquéllos dispongan, en particular de los edificios administrativos.

e) Ejercer la potestad sancionadora que les atribuya el ordenamiento jurídico.

f) Velar por el cumplimiento en la provincia de los principios de colaboración, cooperación, coordinación, lealtad institucional y confianza legítima que deben presidir las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma con las restantes Administraciones Públicas.

g) Cualesquiera otras competencias que les sean atribuidas por el ordenamiento jurídico.

3. Las Delegaciones Territoriales del Gobierno se integrarán orgánicamente en el Departamento competente en materia de relaciones institucionales, y sus titulares serán nombrados mediante Decreto por el Gobierno, a propuesta de la persona titular del Departamento mencionado.

4. La estructura orgánica del departamento competente recogerá la dotación de suficientes medios personales y materiales a las Delegaciones Territoriales para el cumplimiento de su función.

Artículo 83.— *Organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma.*

1. La organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma se establecerá mediante Decreto del Gobierno de Aragón.

2. Esta organización se adaptará a los objetivos y a las necesidades de cada Departamento u organismo público.

3. El Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de relaciones institucionales, podrá crear oficinas delegadas de carácter interdepartamental, que comprenderán una o varias delimitaciones comarcales, según las características geográficas, demográficas o sociales de las mismas.

Artículo 84.— *Los Servicios Provinciales.*

1. Los órganos administrativos provinciales de mayor rango de cada Departamento recibirán el nombre de Servicios Provinciales

2. Al frente de cada uno de ellos habrá un Director o Directora del Servicio Provincial, cuyas decisiones administrativas adoptarán la forma de Resolución. Su nombramiento se realizará por Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta de quien sea titular del Departamento al que esté adscrito, entre personal funcionario de carrera de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. Los Servicios Provinciales serán creados y modificados mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Departamento interesado.

TÍTULO IV

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL AUTONÓMICO

CAPÍTULO I

DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

Artículo 85.— *Composición y clasificación del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.*

1. Integran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón los siguientes entes:

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los cuales se clasifican en:

1.º Organismos autónomos.

2.º Entidades de derecho público.

b) Las sociedades mercantiles autonómicas.

c) Los consorcios autonómicos.

d) Las fundaciones del sector público.

e) Las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o entidad integrante del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico; salvo las estrictamente necesarias para el desarrollo de su actividad reguladas en la legislación sectorial.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales.

3. Las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón se regirán por lo dispuesto en la normativa específica que le sea de aplicación y por lo dispuesto en esta ley en lo que no esté previsto en su normativa específica.

Artículo 86.— *Principios generales de actuación.*

1. Las entidades que integran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como a los principios de integridad y transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral propio de la entidad, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.

2. El Gobierno de Aragón deberá establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

Artículo 87.— *Régimen jurídico general.*

Las entidades que integran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma se regirán por lo dispuesto en esta Ley, por las disposiciones básicas de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector, en particular, por lo dispuesto en los capítulos I y VI del Título II y en los artículos 129 y 134, así como por otra normativa que les resulte de aplicación, según la tipología y naturaleza de cada ente.

Artículo 88.— *Participación en otros entes.*

1. La participación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades que integran su sector público institucional, en cualquier ente, institución o asociación que no forme parte del sector público institucional autonómico exigirá Acuerdo previo del Gobierno de Aragón.

2. Con carácter previo a la adopción del acuerdo, será necesaria la emisión de informes del departamento competente en materia de hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta de participación.

Artículo 89.— *Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón.*

1. El Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón se configura como un registro administrativo que contiene la información relativa a los siguientes entes:

a) Todos los integrantes del sector público autonómico.

b) Cualesquiera otros entes no integrados en el sector público autonómico en los que participen los órganos y entidades del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y porcentaje o forma de participación.

2. La gestión de dicho Registro dependerá de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que será la encargada de la captación y tratamiento de la información enviada por los diferentes entes.

3. Las personas titulares de los Departamentos o, en su caso, las personas titulares de los órganos superiores o directivos de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón serán responsables de remitir toda la información de los entes que hayan de inscribirse en el Registro a la Intervención General a efectos de que ésta pueda mantener actualizado este Registro. Esta información se remitirá en un plazo no superior a veinte días hábiles a contar desde la creación, extinción o modificación de la participación en cualquiera de las entidades.

Artículo 90.— *Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.*

1. Las personas titulares de los Departamentos o, en su caso, las personas titulares de los órganos superiores o directivos de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón comunicarán a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos en la legislación básica aplicable.

2. La documentación justificativa de los actos relativos a la creación, transformación, fusión o extinción de estos entes deberá remitirse a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en un plazo no superior a veinte días hábiles a contar desde la realización del acto inscribible.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de su Intervención General, la revisión y depuración del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local respecto de los entes que forman parte del sector público institucional autonómico, conforme a los criterios establecidos en la legislación básica de régimen jurídico y en esta Ley.

CAPÍTULO II

EFICACIA Y SUPERVISIÓN CONTINUA

Artículo 91.— *Control de eficacia y supervisión continua.*

1. Las entidades integrantes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 86.

Para ello, contarán, en el momento de su creación o del inicio de la participación en ellas de cualquiera de los sujetos integrantes del sector público autonómico, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desarrollará la actividad de la entidad, que se completará con planes anuales elaborados junto con su presupuesto que contendrán los objetivos y las líneas fundamentales de actuación.

2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento o entidad de gestión en el caso de las sociedades mercantiles autonómicas y en el resto de entidades del sector público institucional autonómico este control será ejercido por el Departamento de adscripción. El control de eficacia tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales. Para ello, cada año, en el primer trimestre, el Departamento o entidad de gestión o el Departamento de adscripción elaborará un informe sobre sus entidades dependientes en el que se verificará, con base a la información económico-financiera y de gestión relativa al ejercicio inmediatamente anterior, al menos, lo siguiente:

- a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación o participación.
- b) El cumplimiento de los objetivos del plan anual de la entidad.

3. El informe previsto en el apartado anterior será enviado a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que realizará las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua que se determinen reglamentariamente.

4. Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Departamento o entidad de gestión o el Departamento de adscripción como por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se elevarán para su conocimiento al Gobierno de Aragón antes del 30 de junio de cada ejercicio presupuestario.

CAPÍTULO III

DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTONÓMICOS

Sección 1.ª

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 92.— *Definición y actividades propias.*

Son organismos públicos autonómicos dependientes o vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

Artículo 93.— *Clasificación y adscripción.*

1. Los organismos públicos se clasifican en:

- a) Organismos autónomos.
- b) Entidades de derecho público.

2. Los organismos públicos estarán adscritos a la Presidencia, en su caso a las Vicepresidencias del Gobierno o a un Departamento.

Artículo 94.— *Personalidad jurídica y potestades.*

1. Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley.

2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijan el régimen jurídico básico de dicho servicio.

Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en esta ley y en las disposiciones básicas de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 95.— *Creación de organismos públicos autonómicos.*

1. La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley.

2. La Ley de creación establecerá:

- a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como su adscripción.
- b) Las funciones y competencias del organismo y su distribución entre los órganos de dirección.
- c) La determinación de los órganos de gobierno y de dirección, ya sean unipersonales o colegiados, y de la forma de designación de sus miembros, con indicación, en su caso, de aquéllos cuyos actos y resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
- d) El régimen patrimonial, presupuestario, económico-financiero, contable y de control, de acuerdo con lo establecido en la normativa en materia de patrimonio y hacienda de la Comunidad Autónoma.
- e) El régimen de su personal.

f) La dotación económica inicial y los recursos económicos y financieros de los que podrá disponer para su financiación.

g) Las potestades administrativas que pueda ejercitar el organismo.

h) La posibilidad de que el organismo pueda crear sociedades mercantiles o participar en las ya creadas, cuando sea imprescindible para la consecución de los fines que le hayan sido asignados.

3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Gobierno de Aragón deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, junto con los informes del departamento competente en materia de hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta.

Artículo 96.— *Contenido y efectos de los planes.*

1. El plan inicial de actuación contendrá, al menos:

a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente.

b) La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado. En el caso de que las funciones que se le pretendan encomendar sean ejercidas en ese momento por la Administración de la Comunidad Autónoma, la mejora que pueda implicar la creación del mismo en cuanto a la consecución de dichos objetivos.

c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.

d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo.

f) Las potestades administrativas que se les atribuyen.

2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación. Éste se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento al que esté adscrito el organismo y deberá guardar coherencia con el programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria. El plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la programación estratégica del organismo.

3. El plan inicial de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se harán públicos en la página web del organismo público al que corresponda.

Artículo 97.— *Contenido de los estatutos.*

1. Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:

a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar.

b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo, se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que pongan fin a la vía administrativa.

c) El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos.

d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.

e) La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados.

2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Decreto del Gobierno de Aragón a propuesta conjunta de la persona titular del departamento competente en materia de hacienda y del titular del departamento al que el organismo quede adscrito.

3. Los estatutos deberán ser publicados en el *Boletín Oficial de Aragón*.

Artículo 98.— *Régimen jurídico.*

1. Los organismos públicos se regirán por lo dispuesto en esta ley, en su norma de creación, sus estatutos, la legislación básica en materia de régimen jurídico del sector público y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sea de aplicación.

2. Los organismos públicos tendrán la plena consideración de Administración Pública.

3. Su régimen económico y presupuestario estará sometido a la legislación sobre Hacienda y Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

4. Cuando ejerzan potestades administrativas, sus actos y resoluciones se someterán al Derecho Administrativo y, salvo que su norma de creación establezca otra cosa, no agotarán la vía administrativa, siendo susceptibles de

recurso de alzada ante el titular del Departamento al que estén adscritos. En el caso de que pongan fin a la vía administrativa, los actos podrán ser objeto del recurso potestativo de reposición.

5. Cuando los organismos públicos actúen sometidos al derecho administrativo, la revisión de oficio de los actos nulos, la resolución de los recursos extraordinarios de revisión, la declaración de lesividad de los anulables y la revocación de los desfavorables y de los de gravamen se realizarán por Orden de la persona titular del Departamento al que estén adscritos.

6. La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponderá, en todo caso, a la persona titular del Departamento al que el organismo público esté adscrito.

7. Las obligaciones que contraigan los organismos públicos no podrán ser exigidas por vía de apremio, en los términos establecidos en la normativa de patrimonio.

8. Los bienes que puedan serles adscritos conservarán, en todo caso, su calificación jurídica originaria y no podrán ser incorporados a su patrimonio ni enajenados o permutados directamente por el organismo público, salvo que su objeto específico estuviera relacionado con el tráfico de bienes.

Artículo 99.— *Estructura organizativa en los organismos públicos autonómicos.*

1. Los organismos públicos se estructuran en órganos de gobierno y de dirección. Los máximos órganos de gobierno son el Presidente o Presidenta y el Consejo Rector.

2. En cada organismo público existirá una Directora o un Director Gerente que será nombrado por el Gobierno de Aragón mediante Decreto, a propuesta del titular del departamento al que figure adscrito, conforme a criterios de competencia profesional y experiencia. Corresponderán al Director o Directora Gerente las funciones directivas que se determinen y, en todo caso, bajo la supervisión de la presidencia, la dirección, gestión y coordinación del organismo y la dirección de su personal.

3. La Directora o el Director Gerente tendrá rango de Director o Directora General de la Administración de la Comunidad Autónoma y estará sometido al mismo régimen de incompatibilidades que estos.

Artículo 100.— *Fusión de organismos públicos.*

1. Los organismos públicos podrán fusionarse bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente.

2. La fusión se llevará a cabo mediante Decreto y deberá cumplir con lo previsto en el artículo 95 sobre requisitos de creación de organismos públicos.

3. Al Decreto de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión.

Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidados y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según corresponda.

La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión.

El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo del departamento competente en materia de hacienda, deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión.

Artículo 101.— *Extinción.*

1. Los organismos públicos se extinguirán mediante ley salvo en los casos de fusión y los previstos en el apartado siguiente.

2. Los organismos públicos podrán extinguirse mediante Decreto del Gobierno de Aragón aprobado a propuesta de quien ostente la titularidad del Departamento competente en materia de hacienda, y a iniciativa de la persona titular del Departamento al que el organismo público esté adscrito, en los siguientes casos:

a) Por el transcurso del tiempo de existencia del organismo público que se hubiera establecido en los estatutos.

b) Cuando se estimen cumplidos todos los fines que motivaron su creación.

c) Cuando los fines y los objetivos del organismo público sean asumidos por los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3. La norma por la que se suprima un organismo público establecerá el destino de los bienes de los que fuera titular, así como la forma de cumplimiento de cuantas obligaciones puedan quedar pendientes en el momento de su extinción.

4. Será necesario informe preceptivo del Departamento competente en materia de hacienda con carácter previo a la extinción de un organismo público.

Artículo 102.— *Representación y defensa en juicio.*

La representación y la defensa en juicio de los organismos públicos corresponderán a los letrados integrados en los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.

Sección 2.ª

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Artículo 103.— *Definición.*

1. Los organismos autónomos son organismos públicos, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.

2. Los organismos autónomos dependen de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

Artículo 104.— *Régimen jurídico.*

Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de creación, sus estatutos y en las normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho privado.

Artículo 105.— *Régimen de personal.*

1. Los organismos autónomos no tendrán personal propio.

2. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la normativa reguladora de los empleados públicos y por la normativa laboral.

3. El nombramiento de las personas titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La persona titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.

4. El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el titular del departamento competente en materia de función pública y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley de creación o en sus estatutos.

Artículo 106.— *Régimen de contratación.*

1. La contratación de los organismos autónomos se regirá por la legislación sobre contratación del sector público.

2. En particular, la Ley de creación del organismo autónomo determinará sus órganos de contratación, pudiendo fijar los titulares de los Departamentos a los que se hallen adscritos la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.

Artículo 107.— *Régimen patrimonial.*

1. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la normativa de patrimonio de Aragón.

2. Los bienes pertenecientes al patrimonio del organismo autónomo se incorporarán al Inventario General del Patrimonio de Aragón.

3. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes:

- a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
- b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
- c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas.
- e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.
- f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.

Artículo 108.— *Régimen presupuestario.*

1. Los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario establecido por la normativa de hacienda de la Comunidad Autónoma.

2. Cada organismo autónomo elaborará anualmente el anteproyecto de su presupuesto de conformidad con la legislación en materia presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

3. El anteproyecto de presupuesto será aprobado por la persona titular del Departamento al que esté adscrito el organismo autónomo, que lo remitirá, junto con el de su Departamento, a la persona titular del Departamento competente en materia de hacienda para su aprobación por el Gobierno de Aragón y su integración en el proyecto de ley de Presupuestos.

Artículo 109.— *Régimen de contabilidad y control económico-financiero.*

Los organismos autónomos aplicarán el régimen de contabilidad y de control económico-financiero establecido por la normativa de hacienda de la Comunidad Autónoma.

Sección 3.ª

LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

Artículo 110.— *Definición.*

Son organismos públicos con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión que, junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.

Artículo 111.— *Régimen jurídico.*

1. Las entidades de derecho público se rigen por los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su ley de creación, sus estatutos, y en las normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho privado.

2. Cuando las entidades de derecho público se financien mayoritariamente con ingresos de mercado se regirán por el derecho privado excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley en materia de régimen jurídico, personal y de contratos del sector público.

También se aplicará el derecho público cuando así se prevea en su ley de creación, en sus estatutos, y en las normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

Artículo 112.— *Ejercicio de potestades administrativas.*

1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades de derecho público sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos les asigne expresamente esta facultad.

2. En todo caso, se reservarán a funcionarios públicos los puestos que supongan la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas.

Artículo 113.— *Régimen de personal.*

1. El personal al servicio de las entidades de derecho público podrá ser funcionario o laboral de la Administración Autónoma y será seleccionado en la forma establecida para el personal al servicio de la administración.

2. Su régimen jurídico, incluido el de selección y provisión de puestos de trabajo, será el de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal adecuado procedente de la Administración autónoma, en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar o bien porque se trate de entidades que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, el departamento competente en materia de función pública y el departamento competente en materia de presupuestos, previa justificación por el órgano de dirección o gobierno de la entidad y previo informe favorable del departamento de adscripción, podrá autorizar la contratación de personal laboral propio por parte de la entidad para el ejercicio de dichas funciones. Todo ello sin perjuicio de lo que se disponga en las leyes anuales de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En este caso, la selección del personal laboral propio se llevará a cabo, por los procedimientos que se determine, mediante convocatoria pública y proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

4. El Gobierno de Aragón, a propuesta de los órganos de dirección de estas entidades y previo informe del departamento de adscripción, procederá a la aprobación o modificación de las relaciones de puestos de trabajo en las que se determinarán los puestos de personal funcionario y laboral y aquellos que puedan ser ocupados por personal laboral propio.

5. El nombramiento del personal directivo se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, garantizándose en el procedimiento para su contratación los principios de publicidad y concurrencia.

Artículo 114.— *Régimen de contratación.*

1. La contratación de las entidades de derecho público se regirá por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público.

2. La Ley de creación de la entidad de derecho público determinará sus órganos de contratación, pudiendo fijar los titulares de los Departamentos a los que se hallen adscritos, la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.

3. Cuando las entidades de derecho público se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, se les aplicará el régimen de contratación previsto para las entidades públicas empresariales en la legislación básica de contratos del sector público.

Artículo 115.— *Régimen patrimonial.*

1. Las entidades de derecho público tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la normativa de patrimonio de Aragón.

2. Las entidades de derecho público podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:

- a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
- b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.
- c) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas.
- e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.
- f) Cualquier otro recurso o ingreso público o privado que pudiera corresponderle.

Artículo 116.— *Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero*

Las entidades de derecho público aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en legislación de hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

CAPÍTULO IV

DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

Artículo 117.— *Definición.*

1. Se consideran sociedades mercantiles autonómicas las sociedades mercantiles en las que la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos u otras sociedades mercantiles participadas, conjunta o separadamente, puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen.

2. Se consideran sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público las sociedades mercantiles en las que todas las acciones, participaciones sociales o títulos pertenezcan conjunta o separadamente a la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos u otras sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público.

Artículo 118.— *Participación minoritaria en otras sociedades.*

1. El Gobierno de Aragón podrá acordar la participación minoritaria en el capital social de otras sociedades, aunque éstas no tengan la consideración de sociedades mercantiles autonómicas, siempre y cuando dicha participación sirva para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Comunidad Autónoma, que deberán quedar acreditados documentalmente ante el departamento competente en materia de patrimonio.

2. Con carácter previo a la adopción del acuerdo, será necesaria la emisión de informes del departamento competente en materia de hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta.

3. Una vez acordada la participación por el Gobierno de Aragón, la suscripción y adquisición, por medio de la entidad de gestión, de acciones y participaciones societarias en la correspondiente compañía mercantil, se registrará por lo dispuesto en la legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la legislación mercantil.

Artículo 119.— *Principios rectores*

La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades del sector público autonómico, en cuanto sean titulares del capital social de las sociedades mercantiles autonómicas, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello, tendrá lugar sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista o socio sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil autonómica, conforme prevé la legislación en materia de patrimonio.

Artículo 120.— *Régimen jurídico.*

Las sociedades mercantiles autonómicas se registrarán por lo previsto en esta Ley, en la normativa de hacienda, de patrimonio, presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación que les sea de aplicación, y por el ordenamiento jurídico privado. En ningún caso, podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.

Artículo 121.— *Creación y extinción.*

1. La creación de una sociedad mercantil autonómica o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Gobierno de Aragón a propuesta conjunta del Departamento o entidad de gestión y del Departamento que proponga su constitución, conforme a lo previsto en esta Ley y la normativa de patrimonio de Aragón.

2. Con carácter previo a la adopción del acuerdo, será necesaria la emisión de informes del departamento competente en materia de hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta.

3. El acuerdo deberá ir acompañado de una propuesta de estatutos con el contenido que exija la legislación mercantil y un plan de actuación con el contenido descrito en el apartado siguiente.

4. El plan de actuación, incluirá, al menos:

a) Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes.

b) Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado.

c) Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos.

5. Los acuerdos de creación y de extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

6. Será precisa la previa autorización del Gobierno de Aragón a los miembros de los órganos de gobierno o de administración de la sociedad mercantil designados por él para votar lo que proceda en los supuestos de modificación del objeto social, aumento y reducción del capital social, así como en la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de la sociedad.

7. La creación de las sociedades mercantiles autonómicas y los actos de adquisición y pérdida de la posición mayoritaria en las mismas se acordarán por el Gobierno de Aragón, comunicándose a la Comisión competente en materia de Hacienda de las Cortes de Aragón.

Artículo 122.— *Régimen de personal.*

1. El personal de las sociedades mercantiles autonómicas, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público autonómico, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establece en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

3. El nombramiento del personal directivo se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, garantizándose en el procedimiento para su contratación los principios de publicidad y concurrencia.

4. La contratación de personal requerirá informe favorable de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, dependiendo de su adscripción, sin perjuicio de lo que se disponga en las leyes anuales de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 123.— *Régimen patrimonial.*

1. El patrimonio de las sociedades mercantiles autonómicas se rige por el derecho privado y por las normas contenidas en esta Ley y en la normativa de patrimonio de Aragón.

2. Las sociedades mercantiles autonómicas podrán tener patrimonio propio y patrimonio que les sea adscrito por la Comunidad Autónoma.

3. En la gestión de su patrimonio propio, poseerán todas las facultades que se deriven de la aplicación del Derecho privado.

4. El patrimonio que se adscriba a una sociedad mercantil autonómica sólo podrá ser utilizado para los fines que justificaran su adscripción.

Artículo 124.— *Régimen presupuestario.*

1. El presupuesto de las sociedades mercantiles autonómicas tendrá carácter estimativo y respetará las prescripciones que respecto al mismo se establecen en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.

2. En el caso de que, para la consecución de los fines que tengan asignados, se produjera una aportación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de medios económicos diferente de la derivada de las operaciones de suscripción de capital social por parte de la misma, podrán suscribirse convenios o contratos-programa sobre la utilización de estos medios económicos para el aseguramiento y la mejora de la prestación o provisión de los bienes y servicios que figuren en los fines de estas sociedades.

3. Los encargos de ejecución se formalizarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57 de esta ley.

Artículo 125.— *Régimen de contabilidad y de control económico-financiero.*

1. Las sociedades mercantiles autonómicas estarán sometidas al régimen de contabilidad pública y al control económico-financiero, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre hacienda y patrimonio de la Comunidad Autónoma.

2. El departamento competente en materia de hacienda podrá realizar auditorías con objeto de comprobar el funcionamiento y la eficacia de estas sociedades en relación con el cumplimiento de los objetivos que tengan asignados.

3. Periódicamente, se dará cuenta a las Cortes de Aragón de los resultados económicos y del cumplimiento de los fines de estas sociedades.

Artículo 126.— *Régimen de contratación.*

1. La contratación de las sociedades mercantiles autonómicas se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.

2. Para la celebración de contratos, de cualquier naturaleza jurídica incluidos los patrimoniales, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, las sociedades necesitarán la autorización previa del Gobierno de Aragón. Este importe podrá ser modificado en las sucesivas leyes de presupuestos.

3. Anualmente, en la ley de presupuestos se podrá fijar la cuantía a partir de la cual será necesaria la autorización para celebrar contratos de las personas titulares de los departamentos de tutela a los que las sociedades se hallen adscritas. A falta de esta previsión presupuestaria, la cantidad a partir de la cual será necesaria dicha autorización será la que establezca la persona titular del departamento de tutela, que no podrá ser inferior a un tercio de la cantidad que deba ser autorizada por el Gobierno de Aragón.

4. Dichas autorizaciones previas no se aplican a los contratos relativos a la financiación y gestión financiera.

CAPÍTULO V

DE LOS CONSORCIOS AUTONÓMICOS

Artículo 127.— *Definición y actividades propias.*

1. Los consorcios autonómicos son entes de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creados por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias, y que están adscritos a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 129.

2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.

3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participe la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.

Artículo 128.— *Régimen jurídico.*

1. Los consorcios autonómicos se registrarán por lo establecido en esta Ley, en la legislación básica del Estado y en sus estatutos.

2. En lo no previsto en la legislación básica del Estado ni en sus estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en la normativa civil sobre la sociedad civil.

Artículo 129.— *Régimen de adscripción.*

1. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, se entenderá que un consorcio está adscrito a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón cuando:

- a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.
- d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.
- e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno.
- f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
- g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
- h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

2. Los estatutos de cada consorcio autonómico determinarán el departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón al que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro.

Artículo 130.— *Régimen de personal.*

El personal al servicio de los consorcios autonómicos podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, al ser la administración de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el departamento competente en materia de función pública previo informe favorable del departamento al que este adscrito y previa justificación de la excepcionalidad por el órgano de dirección o administración del consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones. Todo ello sin perjuicio de lo que se disponga en las leyes anuales de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 131.— *Régimen presupuestario, de contabilidad, y control económico-financiero.*

1. Los consorcios autonómicos estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.

3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. Los consorcios autonómicos deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5. Los consorcios autonómicos deberán obtener autorización del departamento competente en materia de hacienda para la apertura de cuentas en entidades financieras.

6. En el supuesto de que un Consorcio quede adscrito a la Administración de la Comunidad Autónoma por concurrir la circunstancia prevista en apartado 1.h) del artículo 129, la incorporación de sus presupuestos en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma se efectuará a efectos informativos.

Artículo 132.— *Régimen patrimonial y de contratación.*

1. El patrimonio de los consorcios autonómicos se regirá por sus estatutos y, con carácter supletorio, por la normativa de patrimonio de Aragón.

2. La contratación de los consorcios autonómicos se regirá por las previsiones contenidas al respecto en la legislación sobre contratación del sector público.

Artículo 133.— *Creación.*

1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes, previo acuerdo del Gobierno de Aragón.

2. Para la creación, modificación y extinción de los consorcios en los que participe la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, así como para la adquisición y pérdida de la posición mayoritaria, se requerirá informes del departamento competente en materia de hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta, con carácter previo a su autorización por el Gobierno de Aragón.

CAPÍTULO VI**DE LAS FUNDACIONES
DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO****Artículo 134.**— *Definición y actividades propias.*

1. Son fundaciones del sector público autonómico aquellas que reúnan alguno de los requisitos siguientes:

a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria a la dotación fundacional, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional autonómico, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.

b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público autonómico con carácter permanente.

c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público autonómico.

2. Son actividades propias de las fundaciones del sector público autonómico las realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación.

Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa. Las fundaciones no podrán ejercer, en ningún caso, potestades públicas.

3. En el patrimonio de las fundaciones del sector público autonómico podrá existir, para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, aportación del sector privado de forma no mayoritaria.

Artículo 135.— *Participación en fundaciones que no forman parte del sector público autonómico.*

1. El Gobierno de Aragón podrá acordar su participación en otras fundaciones, aunque éstas no tengan la consideración de fundaciones del sector público autonómico, siempre y cuando dicha participación sirva para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Comunidad Autónoma, que deberán quedar acreditados documentalmente ante el departamento competente en materia de patrimonio.

2. Será preceptivo informe favorable del departamento competente en materia de hacienda.

Artículo 136.— *Régimen de adscripción de las fundaciones.*

1. En los estatutos de cada fundación del sector público autonómico deberá constar su adscripción a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de conformidad con lo previsto en el artículo 134 y en la legislación básica del Estado.

2. El cambio de adscripción a otra Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se produjo el cambio de adscripción.

Artículo 137.— *Régimen jurídico.*

Las fundaciones del sector público autonómico se rigen por lo previsto en esta Ley, la legislación básica del Estado sobre el sector público, la legislación estatal en materia de fundaciones, la legislación de la Comunidad Autónoma que resulte aplicable en materia de fundaciones y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 138.— *Régimen de contratación.*

La contratación de las fundaciones del sector público autonómico se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.

Artículo 139.— *Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal.*

1. Las fundaciones del sector público autonómico vendrán obligadas a formar Presupuesto de explotación y de capital en el caso de que reciban subvenciones de esta naturaleza y formularán y presentarán sus cuentas anuales de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente en materia de fundaciones.

2. Las fundaciones del sector público autonómico aplicarán el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad y de control establecido por la normativa autonómica en materia de hacienda y sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Cámara de Cuentas, estarán sometidas al control financiero de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos previstos en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. El personal de las fundaciones del sector público autonómico, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público autonómico, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria así como lo que se establezca en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La contratación de personal requerirá informe favorable del departamento al que figure adscrita la fundación, sin perjuicio de lo que se disponga en las leyes anuales de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

5. El nombramiento del personal directivo se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad que garanticen la publicidad y concurrencia.

Artículo 140.— *Régimen patrimonial.*

El patrimonio de las fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma se regirá por el derecho privado, por las normas contenidas en esta Ley, en la normativa de patrimonio de Aragón y en su normativa específica.

Artículo 141.— *Creación y extinción de fundaciones del sector público autonómico.*

1. La creación y extinción de fundaciones del sector público autonómico, así como la adquisición y pérdida de la posición mayoritaria, se aprobará por acuerdo del Gobierno de Aragón, previos informes del departamento competente en materia de hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta.

2. Los estatutos de las fundaciones del sector público autonómico se aprobarán por acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del Departamento de adscripción, que estará determinado en sus estatutos, previo informe favorable del departamento que ejerza el protectorado. No obstante, por acuerdo del Gobierno de Aragón podrá modificarse el departamento al que se adscriba inicialmente la fundación.

3. Los estatutos de la fundación concretarán la forma de participación de la Administración de la Comunidad Autónoma en la composición del patronato.

Artículo 142.— *Protectorado.*

El protectorado de las fundaciones del sector público autonómico será ejercido, en nombre del Gobierno de Aragón, por el departamento competente en materia de fundaciones, que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Artículo 143.— *Designación de miembros del patronato.*

En las fundaciones del sector público autonómico así como en aquellas otras fundaciones en las que se participe, los miembros del patronato propuestos por la Comunidad Autónoma de Aragón serán designados a propuesta del Gobierno de Aragón.

Artículo 144.— *Fusión, disolución, liquidación y extinción.*

Reglamentariamente se podrá regular el procedimiento de fusión, disolución, liquidación y extinción de las fundaciones del sector público autonómico.

TÍTULO V

RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO IPRINCIPIOS QUE RIGEN
LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS**Artículo 145.**— *Principios.*

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se relaciona con las demás Administraciones públicas de acuerdo a los principios de lealtad institucional, competencia, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia, responsabilidad, igualdad en el ejercicio por los ciudadanos de sus derechos, solidaridad interterritorial, así como de todos aquellos principios recogidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón y legislación básica aplicable.

2. Las relaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades que integran la Administración Local se regirán además por lo dispuesto en su legislación específica.

Artículo 146.— *Deberes de colaboración y cooperación.*

La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón actuará, en el ejercicio de sus competencias, con sujeción a los deberes de colaboración y cooperación definidos en la legislación básica de régimen jurídico del sector público.

CAPÍTULO II

DE LOS CONVENIOS

Artículo 147.— *Definición de convenio.*

1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos adscritos, así como las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón, entre sí, o bien con otros sujetos de derecho público y privado, en el ámbito propio de su actuación y para un fin común.

2. No tienen la consideración de convenios los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares, cuyo contenido sea de carácter programático o declarativo no vinculante, que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Con carácter previo a su celebración, corresponde al Gobierno de Aragón autorizar los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares.

3. Las disposiciones previstas en este capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.

4. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en normativa relativa a la contratación del sector público que resulte de aplicación.

5. Cuando el convenio instrumente el otorgamiento de una subvención, o las relaciones con entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones, deberá cumplir lo dispuesto en la normativa existente en materia de subvenciones públicas.

Artículo 148.— *Tipos de convenios.*

1. Este capítulo será de aplicación a los convenios que celebren la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos adscritos, así como las universidades públicas que integran el Sistema Universitario de Aragón, entre sí o con:

- a) El Estado, y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
- b) Las Comunidades Autónomas, y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local, y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
- d) Las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón, así como con los órganos estatutarios dotados de autonomía funcional cuando sus leyes reguladoras lo permitan.
- e) Las universidades públicas.
- f) Cualesquiera otros sujetos de derecho público.
- g) Los sujetos de derecho privado.
- h) Los entes regionales europeos, entes públicos de otros Estados u organismos internacionales con intereses económicos, sociales, ambientales, educativos, científicos y culturales comunes.

2. Los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con otra u otras Comunidades Autónomas, se regirán por lo dispuesto en esta ley y tendrán por objeto cualquier materia incluida en el ámbito

de sus competencias. De la celebración de estos convenios deberá informarse a las Cortes de Aragón y a las Cortes Generales en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su firma.

3. Los convenios que celebren la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con entidades locales deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de régimen local, así como con la regulación establecida en este capítulo.

4. Este capítulo no será de aplicación a los convenios urbanísticos que se regirán por su normativa específica.

Artículo 149.— *Contenido de los convenios.*

1. Los convenios que celebren la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos adscritos, así como las universidades públicas que integran el Sistema Universitario de Aragón deberán incluir, al menos, el contenido siguiente:

- a) Sujetos que suscriben el convenio y capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.
- b) Competencia en la que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos adscritos y universidades públicas que integran el Sistema Universitario de Aragón fundamentan su actuación.
- c) Objeto del convenio y razones de interés público que lo motiven.
- d) Actuaciones a realizar y compromisos asumidos por cada una de las partes, indicándose, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
- e) Las obligaciones o compromisos económicos que puedan derivarse para las partes indicando la distribución temporal del gasto por anualidades, si así las hubiera, así como su adecuada imputación presupuestaria.
- f) Efectos del incumplimiento de las obligaciones y compromisos de las partes y, en su caso, criterios para determinar la posible indemnización que de ello se derive.
- g) Mecanismos de seguimiento, interpretación, vigilancia y control del cumplimiento y correcta ejecución del convenio.
- h) Régimen de modificación del contenido del convenio.
- i) El plazo de vigencia del convenio, teniendo en cuenta que éste deberá ser determinado y no superior a cuatro años, salvo que una norma disponga un plazo mayor. En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, siempre que esa posibilidad esté prevista en el propio convenio.
- j) Jurisdicción competente.
- k) Localidad, fecha y firma del convenio.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el convenio podrá establecer causas de resolución del mismo además de las reguladas en la legislación básica estatal, así como prever indemnizaciones por daños y perjuicios, en caso de que el convenio se resuelva por incumplimiento de las obligaciones o compromisos de cualquiera de las partes.

Artículo 150.— *Autorización y firma.*

1. Con carácter previo a su celebración corresponde al Gobierno de Aragón autorizar los convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos dependientes o adscritos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no precisarán autorización del Gobierno, aquellos convenios que celebre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos, con otras Administraciones y sujetos de derecho público o privado cuyo fin único sea el otorgamiento a los beneficiarios de subvenciones públicas. Dichas actuaciones, se regirán por la normativa aplicable en materia de subvenciones.

2. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos adscritos, podrán suscribir convenios, con carácter general, en nombre y representación del Gobierno de Aragón, el Presidente, los titulares de los Departamentos y los Gerentes o Directores de dichos organismos públicos. Dicha representación se designará mediante acuerdo del Gobierno de Aragón que facultará a aquél que sea designado a la firma del convenio.

3. La autorización del Gobierno de Aragón para la celebración del convenio con carácter previo a su firma, se exigirá asimismo para su modificación y resolución por mutuo acuerdo de las partes. La modificación de los convenios se llevará a cabo mediante adendas al mismo.

4. La prórroga del convenio, siempre que esté prevista, podrá suscribirse por el titular del órgano firmante del convenio, dando posterior comunicación al Gobierno de Aragón.

5. Los convenios que adopten la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos, con sujetos de derecho público y privado, no implicarán la cesión de la titularidad de sus competencias.

Artículo 151.— *Procedimiento de tramitación de los convenios.*

1. El proyecto de convenio deberá ir acompañado de una memoria firmada por el titular del centro directivo promotor, en la que se hará constar los antecedentes, el objeto, la necesidad y oportunidad de la actuación, los compromisos que se adquieran, su financiación y el impacto económico del convenio si lo hubiera, así como, el carácter no contractual de la actividad en cuestión y el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma.

2. Los convenios que suscriban la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o sus organismos públicos, que comprometan gastos de carácter plurianual o de ejercicios futuros, requerirán informe del departamento competente en materia de hacienda que acredite la existencia de crédito suficiente y adecuado en los respectivos presupuestos y la tramitación correspondiente por su naturaleza de gastos de carácter plurianual.

3. Los acuerdos o convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con cualquiera de las universidades que integran el Sistema Universitario de Aragón deberán ser informados previamente por el Departamento competente en materia de universidades.

4. Los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos y las universidades públicas que integran el Sistema Universitario de Aragón, se perfeccionan y son eficaces con la prestación del consentimiento de las partes mediante la firma de dicho convenio.

La suscripción, extinción, prórroga o modificación de los convenios se inscribirá, a efectos de su publicidad, en el Registro Electrónico de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes a partir de la firma.

En el caso de que el convenio se suscriba con la Administración General del Estado, o con alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, se registrará para su eficacia por lo previsto en la legislación básica estatal.

5. Tras la inscripción del convenio o, en su caso, su modificación, prórroga o extinción en el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos de Cooperación, se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón»

6. Los convenios a través de los cuales se haya instrumentado el otorgamiento de una subvención, deberán igualmente ser inscritos en el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos de Cooperación y publicados en el «Boletín Oficial de Aragón».

7. Los convenios que impliquen compromisos económicos superiores a trescientos mil euros para la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos públicos adscritos y universidades públicas que integran el Sistema Universitario de Aragón, incluidos aquellos a través de los cuales se instrumente la concesión de subvenciones públicas, se deberán remitir electrónicamente por el titular del centro directivo promotor a la Cámara de Cuentas de Aragón dentro de los tres meses siguientes a su suscripción. Asimismo, se comunicarán a la Cámara de Cuentas de Aragón las modificaciones de contenido económico, prórrogas o variaciones de plazo, así como la extinción de los convenios indicados.

Artículo 152.— *Extinción y efectos de la resolución de los convenios.*

Los convenios se extinguirán por las causas y su resolución producirá los efectos que se prevén en la legislación básica estatal, en el propio convenio o en las leyes.

CAPÍTULO III

RELACIONES Y ÓRGANOS DE COOPERACIÓN

Artículo 153.— *Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado.*

1. La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado es el instrumento principal y permanente de relación entre la Comunidad Autónoma y el Estado para instrumentar la colaboración mutua en el ejercicio de las respectivas competencias, coordinar e impulsar las relaciones bilaterales y realizar el seguimiento de la participación de Aragón en las competencias estatales en los supuestos previstos en el Estatuto de autonomía, de acuerdo con las funciones que le atribuye el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

2. La Comisión Bilateral se regirá por el reglamento de organización y funcionamiento interno que se apruebe por acuerdo conjunto.

3. La Comisión Bilateral se reunirá, al menos, una vez al año en sesión plenaria. La presidencia será alternativa por períodos temporales de un año natural correspondiendo los pares al Estado y los impares a Aragón.

Artículo 154.— *Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros.*

1. La Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros es el órgano bilateral de relación entre las administraciones del Estado y de Aragón en las materias sobre financiación autonómica específicas aragonesas, en el marco de las funciones que le atribuye el artículo 109 del Estatuto de Autonomía.

2. La Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros se regirá por el reglamento de organización y funcionamiento interno que se apruebe por acuerdo conjunto.

3. La Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros se reunirá, al menos, una vez al año en sesión plenaria. La presidencia será alternativa por períodos temporales de un año natural correspondiendo los pares al Estado y los impares a Aragón. La secretaría permanente se ejercerá de forma conjunta.

Artículo 155.— *Comisión Mixta de Transferencias.*

La Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado se reunirán en la Comisión Mixta de Transferencias cuando se pretenda la transferencia de funciones y servicios. Esta Comisión Mixta estará integrada de forma paritaria y aprobará sus propias normas de funcionamiento de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Artículo 156.— *Otros órganos de cooperación.*

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá constituir con otras Administraciones Públicas consorcios, organizaciones personificadas de gestión para la consecución de finalidades de interés común, o empresas públicas, de acuerdo con la normativa reguladora de estas organizaciones.

2. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá participar en otros órganos de cooperación de otras Administraciones Públicas.

Artículo 157.— *Designación de representantes autonómicos.*

1. La Comunidad Autónoma de Aragón estará representada en los órganos de cooperación previstos en la legislación básica estatal sobre relaciones interadministrativas, conforme se determina en los apartados siguientes.

2. En las Conferencias Sectoriales Aragón estará representada por el miembro del Gobierno que sea competente por razón de la materia.

En las Comisiones Sectoriales, órganos de apoyo de las Conferencias Sectoriales en las que forme parte la Comunidad Autónoma, estará representada por la persona titular de la Secretaría General Técnica o de la Dirección General designada a estos efectos por la persona titular del Departamento competente por razón de la materia.

En los grupos de trabajo que puedan ser creados en las Conferencias Sectoriales participarán los Jefes de Servicio designados por quien sea titular de la Dirección General o del Departamento que corresponda por razón de la materia.

3. En las Comisiones territoriales de coordinación en las que participe Aragón, su representación corresponderá al órgano equivalente al que dispongan las administraciones participantes, siendo designados por el superior jerárquico competente por razón de la materia.

CAPÍTULO IV**TRANSFERENCIA Y REUTILIZACIÓN
DE TECNOLOGÍA ENTRE ADMINISTRACIONES****Artículo 158.**— *Transferencia y reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.*

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de Aragonesa de Servicios Telemáticos, mantendrá un directorio actualizado de las aplicaciones, desarrolladas o que hayan sido objeto de contratación por sus órganos y de cuyos derechos de propiedad intelectual sea titular, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma.

2. Las aplicaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón estarán a disposición de cualquier administración que lo solicite y serán declaradas, con carácter general, como de fuentes abiertas.

3. En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón optará por su uso preferentemente a la adquisición o desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia.

Disposición adicional primera.— *Del Servicio Jurídico del Gobierno de Aragón.*

Al Servicio Jurídico del Gobierno de Aragón le corresponde la representación y defensa en juicio, así como la dirección y coordinación de la asistencia jurídica, tanto consultiva como contenciosa, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de su sector público institucional, en los términos previstos en su normativa específica.

Disposición adicional segunda.— *Boletín Oficial de Aragón.*

1. El «Boletín Oficial de Aragón» es el diario oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. La publicación del «Boletín Oficial de Aragón» se realizará por medios electrónicos y tendrá carácter oficial y auténtico.

3. El «Boletín Oficial de Aragón» se integra orgánicamente en el departamento con competencias en materia de publicación de disposiciones y actos administrativos.

4. Su organización y contenido se regulará reglamentariamente.

Disposición adicional tercera.— *Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos de Cooperación.*

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón mantendrá actualizado un registro electrónico de convenios y órganos de cooperación en los que participe ésta o sus organismos públicos adscritos, en el que figurará, la suscripción, modificación, prórroga o extinción de los convenios celebrados además de la creación, modificación, prórroga o extinción de los órganos de cooperación en los que participa la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. Los convenios ya en vigor celebrados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos adscritos y las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón, así como los órganos de cooperación autonómicos, deberán inscribirse en el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos de Cooperación en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición adicional cuarta.— *Adaptación de entidades y organismos públicos existentes.*

1. Todos los organismos públicos y entidades que integran el sector público autonómico existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al contenido de la misma en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica.

2. La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de los organismos y entidades en materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, contabilidad, control económico-financiero y de operaciones como agente de financiación, incluyendo, respecto a estas últimas, el sometimiento, en su caso, al ordenamiento jurídico privado. Las especialidades se preservarán siempre que no hubieran generado deficiencias importantes en el control de ingresos y gastos causantes de una situación de desequilibrio financiero en el momento de su adaptación.

Disposición adicional quinta.— *Referencias y concordancias.*

1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias al texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se entenderán realizadas a esta Ley.

2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo se entenderán sustituidos por la numeración que corresponda a dicho artículo en esta Ley.

Disposición adicional sexta.— *Especialidades de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.*

1. Los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por su legislación específica y, únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica, por lo dispuesto en la presente Ley.

2. En particular, se regirán por su normativa específica:

- a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos, así como su revisión en vía administrativa.
- b) El acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria.
- c) La Administración electrónica en materia tributaria.

3. La supletoriedad de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá sin perjuicio de que los procedimientos tributarios regulados en su legislación específica, cuando no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o cuando regulen trámites adicionales o distintos, se rijan, respecto a éstos, por lo dispuesto en dicha normativa específica.

Disposición adicional séptima.— *Cláusula de progreso y adaptación a la evolución tecnológica en materia de administración electrónica.*

En función del progreso tecnológico que se vaya produciendo, mediante orden conjunta de los departamentos competentes en materia de administración electrónica y de hacienda, se podrán desarrollar e incorporar nuevos medios electrónicos de notificación, firma y pago, en el marco de la legislación básica vigente.

Disposición adicional octava.— *Adaptación a la tramitación electrónica del procedimiento en materia de expropiación forzosa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.*

En las expropiaciones forzosas realizadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, la publicación de la relación concreta e individualizada en la que se describan los bienes o derechos que se considere de necesaria expropiación, además de en el *Boletín Oficial de Aragón*, tendrá lugar mediante inserción de una reseña en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, en su versión en papel y/o digital, con remisión expresa a la sede electrónica o portal web del Gobierno de Aragón.

Disposición adicional novena.— *Sustitución del recurso de alzada en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción.*

1. El recurso de alzada contra los actos de los órganos que tengan atribuida la competencia en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción queda sustituido por la impugnación ante la Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés de Inserción, cuya composición y régimen jurídico se regula en la presente disposición.

2. La Comisión se compondrá de una Presidencia, una Vicepresidencia y tres vocales. Cada uno de los vocales contará con una persona suplente.

3. La Presidencia de la Comisión recaerá en una persona titular de una Dirección General o una Secretaría General de Organismo Autónomo del departamento competente en materia de servicios sociales. La Vicepresidencia recaerá en una persona funcionaria que desempeñe una jefatura de servicio en el mismo Departamento. La Vicepresidencia suplirá a la Presidencia en los casos de ausencia, vacante o enfermedad y ejercerá las funciones que ésta le delegue.

4. Los tres vocales y sus correspondientes suplentes serán nombrados por el Consejero o Consejera competente en materia de servicios sociales. Estos nombramientos deberán recaer en:

- a) Dos interventoras o interventores delegados a propuesta de la Intervención General, uno como titular y otro como suplente.
- b) Dos funcionarios o funcionarias con titulación universitaria al servicio del departamento competente en materia de servicios sociales, uno como titular y otro como suplente.
- c) Dos personas expertas en materia de servicios sociales, una como titular y otra como suplente.

5. El ejercicio de las funciones de secretaria de la Comisión, con voz y voto, corresponderá al vocal designado de entre el personal funcionario con titulación universitaria al servicio del departamento competente en materia de servicios sociales.

Disposición adicional décima.— *Remisiones normativas.*

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a empresas de la Comunidad Autónoma se entenderán efectuadas a sociedades mercantiles autonómicas.

Disposición transitoria primera.— *Encargos a empresas públicas.*

Los encargos a empresas públicas realizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley mantendrán su eficacia y seguirán produciendo sus efectos propios hasta su completa realización.

Disposición transitoria segunda.— *Entidades y organismos públicos existentes.*

1. Todos los organismos y entidades integrantes del sector público autonómico en el momento de la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por su normativa específica, incluida la normativa presupuestaria que les resultaba de aplicación, hasta su adaptación a lo dispuesto en esta Ley de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta.

2. Lo dispuesto en los artículos 113 y 130 respecto al régimen de personal de las entidades de derecho público y consorcios será de aplicación a las entidades de nueva creación y al personal que se incorpore desde el momento de entrada en vigor de la Ley.

3. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de Aragón, a propuesta de los órganos de dirección o administración de estas entidades, procederá a la aprobación o modificación de las relaciones de puestos de trabajo en las que se determinarán los puestos de personal funcionario y laboral y aquellos que puedan ser ocupados por personal laboral propio.

4. El personal laboral propio de las entidades de derecho público y de los consorcios existentes a la entrada en vigor de esta Ley que se encontrara desempeñando puestos de trabajo que en las relaciones de puestos de trabajo se clasifiquen como propias de personal funcionario o laboral de la Administración autonómica, podrá seguir desempeñándolos, manteniendo el mismo régimen jurídico que dio lugar a su contratación hasta que se produzca la extinción de su vínculo laboral por alguna de las causas legalmente previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

Este personal sólo podrá acceder a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración autonómica a través de la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público.

Disposición transitoria tercera.— *Inscripción en el Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón.*

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las personas titulares de los Departamentos o, en su caso, las personas titulares de los órganos superiores o directivos de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón remitirán, a la Intervención General, toda la información de los entes existentes a los efectos de su inscripción en este Registro.

Disposición derogatoria única.— *Derogación normativa.*

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley y, en especial:

a) Los artículos 6, 7 y 8 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón.

b) El Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

c) La Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

d) La disposición final tercera de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.

e) El Decreto 117/1997, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés de Inserción.

Disposición final primera.— *Modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.*

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 que queda redactado de la siguiente manera:

«1) Representar a la Comunidad Autónoma de Aragón en las relaciones con otras instituciones del Estado y del ámbito internacional, así como firmar los convenios y acuerdos de cooperación en los que así se determine.»

Dos. Se modifica el apartado 16 del artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:

«16) Nombrar al Secretario o Secretaria General de la Presidencia y a aquellos otros altos cargos de la Comunidad Autónoma que determine el ordenamiento jurídico.»

Tres. Se modifica el apartado 24 del artículo 12 que tendrá la siguiente redacción:

«24) Autorizar la celebración de convenios.»

Cuatro. El artículo 23 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 23. Comisión de Secretarías y Secretarios Generales Técnicos.

1. La Comisión de Secretarías y Secretarios Generales Técnicos estará integrada por la o el Secretario General de la Presidencia, las y los Secretarios Generales Técnicos y miembros del Gobierno que designe el Gobierno. La Comisión aprueba sus normas de funcionamiento.

2. La presidencia de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos se determina por el Gobierno.

3. Las reuniones de la Comisión tienen carácter preparatorio de las sesiones del Gobierno. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.»

Cinco. Se añaden tres nuevos apartados 6, 7 y 8 al artículo 25 que tendrán la siguiente redacción:

«6. Todos los cargos de confianza cesarán automáticamente cuando cese la autoridad que los nombró.

7. Cada uno de los miembros del Gobierno podrá disponer también de una Secretaría particular.

8. El personal de apoyo no eventual adscrito a los gabinetes y a las secretarías particulares será designado libremente por las personas titulares de la Presidencia, de las Vicepresidencias o de los Departamentos, entre personal funcionario o laboral de las Administraciones Públicas, con arreglo a lo que dispongan las relaciones

de puestos de trabajo y de acuerdo con las consignaciones presupuestarias, atendiendo, en cualquier caso, a criterios contrastados de eficacia y austeridad.»

Seis. Se modifica la letra a) del apartado 2 de la disposición adicional quinta que queda redactado en los siguientes términos:

«a) El Secretario o Secretaria General de la Presidencia, las Secretarías y Secretarios Generales Técnicos, Directores y Directoras Generales y asimilados a ellos.»

Disposición final segunda.— *Modificación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 diciembre, del Gobierno de Aragón.*

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 134 que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Compete al Gobierno de Aragón, mediante acuerdo adoptado a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio, autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos y a las sociedades mercantiles autonómicas los actos de adquisición o enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales, y cualesquiera actos y negocios jurídicos que supongan la adquisición por una sociedad de la condición de sociedad mercantil autonómica o la pérdida de la misma.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 141 que queda redactado de la siguiente forma:

«1. La constitución o disolución de sociedades mercantiles autonómicas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos u otras sociedades mercantiles autonómicas habrá de ser autorizada por acuerdo del Gobierno de Aragón, con aplicación de las normas correspondientes del capítulo anterior de esta ley.»

Disposición final tercera.— *Modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón.*

Uno. Se modifica la letra c) del artículo 34 con la siguiente redacción:

«c) Los estados de recursos y dotación con las correspondientes estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para el ejercicio, tanto de explotación como de capital de los entes que integran el sector público institucional autonómico, así como los estados financieros que se determinen reglamentariamente.

En el supuesto de que un consorcio quede adscrito a la Administración de la Comunidad Autónoma por aplicación del criterio del territorio o de la población, de conformidad con lo señalado en la normativa reguladora del sector público, la incorporación de sus presupuestos en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma se efectuará a efectos informativos.»

Dos. Se añade una letra f) al apartado 2 del artículo 41 con la siguiente redacción:

«f) Encargos de ejecución».

Tres. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 51 con la siguiente redacción:

«a) Expedientes de contratación, encargos de ejecución y conciertos de valor estimado superior a tres millones de euros.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 89 que queda redactado de la siguiente forma:

«La recaudación de derechos podrá efectuarse mediante transferencia bancaria, cheque, efectivo, tarjeta de crédito y débito, domiciliación bancaria o cualesquiera otros medios de pago, sean o no bancarios que se autoricen por el órgano competente en materia de hacienda. En las respectivas autorizaciones de apertura de cuentas se establecerán los medios de cobro a utilizar en cada caso.»

Disposición final cuarta.— *Modificación de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón.*

El apartado 10 del artículo 15 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón queda redactado de la siguiente manera:

«10. Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de cuantía igual o superior a cincuenta mil euros.»

Disposición final quinta.— *Desarrollo de la ley.*

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

Disposición final sexta.— *Desarrollo de la administración electrónica.*

Se faculta al Gobierno de Aragón para que dicte las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la aplicación efectiva en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos vinculados o dependientes, de las previsiones recogidas sobre administración electrónica en esta Ley, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición final séptima.— *Entrada en vigor.*

Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el *Boletín Oficial de Aragón*.

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.1 del Reglamento de la Cámara, la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha procedido a la calificación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo común.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva para regular el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (artículo 71. 7^º). Asimismo, el artículo 53 del Estatuto atribuye al Gobierno de Aragón el ejercicio de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, el artículo 42.2 la iniciativa legislativa, y los artículos 43 y 44 la posibilidad de dictar normas con rango de ley.

A la vista de estos títulos competenciales se aprobó la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón que incluye en su Título VIII la capacidad normativa del Gobierno de Aragón, donde se regula el procedimiento administrativo para el ejercicio de la iniciativa legislativa del Gobierno, la aprobación de normas con rango de ley y la potestad reglamentaria.

II

La calidad normativa ha ido ganando importancia en los últimos años, influenciada por una sociedad cada vez más regulada, con normas que inciden en el ámbito público y privado de los ciudadanos desde los distintos niveles de administraciones públicas. La calidad técnica supone la materialización positiva de un principio propio de todo Estado de Derecho, como es la seguridad jurídica. Su importancia se refleja en los distintos estudios que ponen de manifiesto la estrecha relación entra las normas de calidad y el crecimiento económico. Partiendo de estas premisas, la Comisión europea marcó un punto de inflexión con la Comunicación al Consejo y al Parlamento europeo de 2005 «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea».

La calidad normativa debe predicarse tanto desde el punto de vista material de la claridad, como desde el punto de vista formal. La norma debe tener una redacción clara y sencilla que llegue a todos los ciudadanos, estructurada adecuadamente para conseguir su mayor y mejor comprensión. Pero al mismo tiempo, el marco regulatorio para su elaboración debe garantizar que la norma sea la adecuada, con estudios previos que permitan profundizar en el problema social a resolver buscando la mejor solución, haciendo partícipes a los agentes afectados por la materia.

El aspecto interno y estructural de las normas se recoge en las Directrices de Técnica Normativa aprobadas por el Gobierno de Aragón mediante Acuerdo de 28 de mayo de 2013, e incluye sugerencias y recomendaciones para contribuir al perfeccionamiento continuo de la calidad de las disposiciones.

En cuanto al marco regulatorio, hay unas garantías en torno a las normas que permitan dar cumplimiento a principios inspiradores de todo ordenamiento jurídico de un estado de derecho, la seguridad jurídica, la eficacia, la participación. El mecanismo para positivizar estos principios se traduce en un adecuado procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general que se aprueban y que afectan al crecimiento económico y al empleo, lo que redundará en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, la elaboración de normas requiere una adecuada regulación que contribuya a la mejora del marco regulador y que se incluye en la citada Ley 2/2009, de 11 de mayo que es objeto de modificación en esta norma.

III

Los principios de buena regulación en la elaboración de las normas, tales como la necesidad, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia y eficiencia, junto con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se han plasmado por el legislador estatal en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. Sin embargo, no son principios nuevos, dado que ya estaban incluidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

El Título VI «De la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones» fue dictado al amparo del artículo 149.1.18º de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común, así como del artículo 149.1.14º relativo a la Hacienda general y del artículo 149.1.13º que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; lo que suponía su naturaleza de preceptos básicos del procedimiento que debían ser desarrollados por las Comunidades Autónomas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha visto especialmente afectada en la regulación del Título VI «De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones» por la STC 55/2018, de 24 de mayo. No podemos olvidar que esta sentencia tiene su antecedente inmediato en la STC 91/2017, de 6 de julio, en la que se resolvió la impugnación realizada por el Gobierno de Canarias sobre los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, artículos que sirvieron de precedente de algunas de las cuestiones incluidas posteriormente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En la STC 91/2017, de 6 de julio, se argumenta que en la regulación de toda iniciativa normativa el procedimiento legislativo debe quedar excluido de su ámbito de aplicación mientras que los procedimientos que tengan por objeto la elaboración de las disposiciones reglamentarias sí que pueden ser objeto de interferencias por parte de la legislación básica, con base en el título competencial relativo a las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

En consonancia con lo anterior, en la STC 55/2018, de 24 de mayo, sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la impugnación de los artículos 129 (salvo el apartado 4, párrafos segundo y tercero que se analizan en un fundamento jurídico separado), 130 y 132; el Tribunal Constitucional estima el recurso y declara que dichos preceptos no son aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas, pero sí cuando se ejerce la potestad reglamentaria.

Dentro de las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la elaboración de un proyecto normativo hay que tener en cuenta que el artículo 133 introduce un nuevo trámite con carácter previo a la elaboración de un proyecto de ley o de reglamento, denominado consulta pública previa, que contempla la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. De este artículo, el Tribunal Constitucional en la sentencia mencionada sólo mantiene el carácter básico, y únicamente respecto a iniciativas reglamentarias, del primer inciso de apartado 1, así como el primer párrafo del apartado 4.

Por lo que se refiere a los trámites de audiencia e información pública la única regulación aplicable es el artículo 49 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo; en tanto en cuanto lo dispuesto en el artículo 133 Ley 39/2015, de 1 de octubre respecto a estos trámites no tiene carácter básico conforme a lo establecido en la STC 55/2018, de 24 de mayo, antes referida que de forma expresa fundamenta que «las demás previsiones del artículo 133 — a salvo del apartado 1, primer inciso y 4, primer párrafo —, descienden a cuestiones procedimentales de detalle desbordando el ámbito de lo básico; vulneran por ello las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas en relación con la elaboración de sus propias disposiciones normativas».

IV

La aprobación y entrada en vigor de la legislación básica estatal exige su desarrollo normativo y la adaptación de las normas reguladoras de la capacidad normativa del Gobierno, que se formalizan en esta ley.

En el procedimiento de elaboración de la ley se ha emitido informe de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales; se ha dado audiencia a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y se ha emitido el preceptivo informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos.

Con la presente regulación se cumple el principio de seguridad jurídica respetándose la distribución de competencias derivada de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Aragón. Queda también justificada la necesidad de esta norma siendo su aprobación el instrumento que permite cumplir con los objetivos propuestos. En su tramitación se cumple igualmente con el principio de transparencia mediante la puesta a disposición a todos los interesados de los documentos integrantes del proceso de elaboración. Se respeta asimismo el principio de proporcionalidad, al tratarse de la modificación de una ley vigente e incluir la regulación estrictamente imprescindible para cumplir con los objetivos propuestos. Al racionalizar el procedimiento de elaboración normativa incluyendo la planificación previa y la evaluación posterior, su aprobación y aplicación posterior sin duda van a contribuir a la mejor gestión de los recursos públicos.

V

El objetivo de la reforma es la modificación del Título VIII de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. Este Título se divide en cuatro capítulos, el primero relativo a la iniciativa legislativa y la potestad para dictar normas con rango de ley, el segundo capítulo sobre la potestad reglamentaria, el tercer capítulo que enumera los principios de buena regulación y por último el capítulo IV que recoge el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos.

El Capítulo I determina la titularidad del Gobierno de Aragón de la iniciativa legislativa y potestad de dictar normas con rango de ley, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y la forma de su ejercicio. La iniciativa legislativa se ejercerá mediante la aprobación de proyectos de ley y posterior remisión a las Cortes de Aragón para su aprobación como ley. Asimismo se recoge la posibilidad de que el Gobierno apruebe normas con

rango de ley bien previa delegación de las Cortes de Aragón, o bien en casos de extraordinaria y urgente necesidad, recogiendo los límites estatutarios y constitucionales de estas normas.

La potestad reglamentaria se contempla en el Capítulo II, atribuyendo su titularidad al Gobierno de Aragón, sin perjuicio de que los miembros del Gobierno puedan ejercerla si así les habilita para ello una ley o disposición reglamentaria aprobada por el Gobierno, o se traten asuntos de orden interno de su competencia. Se aclara que las resoluciones, circulares e instrucciones emitidas por los órganos de la Administración no tendrán la consideración de disposiciones reglamentarias.

Se recogen los principios que informan específicamente la potestad reglamentaria, limitando el ámbito material de los reglamentos, así como el principio de jerarquía en función del órgano del que emanen las disposiciones reglamentarias, decretos, acuerdos u órdenes.

El Capítulo III remite a la legislación básica los principios de buena regulación que deben inspirar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, incorporando la evaluación de las normas vigentes en función de dichos principios, persiguiendo una mejora de la calidad normativa.

Se obliga a la aprobación de un Plan Anual Normativo por el Gobierno en el que se recogerán todas las iniciativas legislativas y reglamentarias que durante el año siguiente vayan a ser elevadas para su aprobación por el Gobierno de Aragón. Se introduce así la planificación normativa como un trámite preceptivo de la elaboración de las normas, esencial en la mejora normativa de nuestro ordenamiento.

Las mayores novedades se incluyen en el Capítulo IV que unifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales, e incorpora una tramitación de urgencia para las iniciativas normativas y disposiciones reglamentarias.

Asimismo se incluye la consulta pública previa en el ejercicio de la potestad reglamentaria para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones potencialmente afectados por la futura norma.

A continuación se regula el procedimiento administrativo de elaboración propiamente dicho, en el que se detalla el contenido de cada uno de los documentos que forman el expediente administrativo, así como clarifica las fases del mismo.

La iniciativa legislativa deberá ir acompañada de una memoria justificativa, cuyo contenido queda delimitando, así como de una memoria económica cuando la norma implique un incremento de gasto o una reducción de los ingresos. Se ha previsto igualmente la incorporación de los informes de evaluación de impacto de género, y de impacto por razón de discapacidad, así como cualquier otro informe que resulte preceptivo conforme a la legislación sectorial. A continuación se recabará el informe de la Secretaría General Técnica del Departamento impulsor de carácter eminentemente jurídico y diferenciado del contenido de la memoria justificativa, que se venía confundiendo en numerosas ocasiones.

En el caso de los proyectos de ley se establece el trámite de la toma de conocimiento por parte del Gobierno de Aragón, para que este decida sobre los ulteriores trámites, así como los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.

Se contempla asimismo un proceso de deliberación participativa que deberá realizarse con carácter general, en el caso de los anteproyectos de ley que afecten a los derechos civiles, políticos y sociales.

Cuando la disposición reglamentaria afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se exige la realización de los trámites de audiencia e información pública. Se regula el plazo mínimo para la realización de estos trámites y se establecen los supuestos en los que podrán omitirse.

A continuación, se exigirán los informes preceptivos y aquellos otros que se estimen oportunos, emitiéndose en último lugar el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos y cuando sea necesario el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.

Una vez cumplidos todos los trámites se elevará a su aprobación por el Gobierno, y remisión a las Cortes de Aragón. A tal efecto, se determina la necesidad de acompañar la propuesta normativa de una memoria final que actualizará el contenido de la memoria justificativa y de la memoria económica, si hubiera habido alguna variación en la misma.

Se introduce como novedad, para una mayor eficacia de la labor administrativa la posibilidad de volver a remitir el mismo proyecto a las Cortes, si así lo considera oportuno el Gobierno de Aragón, previo informe de Servicios Jurídicos y de la Secretaría General Técnica correspondiente, de aquellos proyectos de ley que hubieran caducado en las Cortes por finalización de la legislatura.

Otra de las mayores novedades en el procedimiento administrativo es la posibilidad de que las iniciativas legislativas o reglamentarias sigan una tramitación de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos, simplificando la memoria, no siendo preceptiva la consulta pública previa y no interrumpiendo el impulso del procedimiento la no emisión en plazo de los informes preceptivos. Todo ello sin perjuicio del procedimiento simplificado para los Decretos Leyes cuya extraordinaria y urgente necesidad deberá estar debidamente justificada.

En definitiva, se adecua el procedimiento administrativo de elaboración de disposiciones normativas a las exigencias de la legislación básica con el objetivo de contribuir a una mayor claridad del mismo, todo ello en garantía de una mayor seguridad jurídica y participación de los ciudadanos en un procedimiento tan importante como lo es la elaboración de normas que inciden en la vida de los ciudadanos.

Artículo único.— *Modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.*

Se modifica el título VIII que queda redactado de la siguiente manera:

«TÍTULO VIII

Capacidad normativa del Gobierno de Aragón

CAPÍTULO I

Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley

Artículo 37. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar normas con rango de ley.

1. El Gobierno de Aragón, de acuerdo con la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración y aprobación de proyectos de ley.
2. El Gobierno de Aragón podrá aprobar decretos legislativos y decretos leyes en los términos establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Artículo 38. Forma.

1. La iniciativa legislativa del Gobierno se ejercerá mediante la aprobación de proyectos de ley para su ulterior remisión a las Cortes de Aragón.
2. Asimismo, el Gobierno podrá aprobar, previa delegación de las Cortes de Aragón decretos legislativos, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. La delegación de las Cortes deberá ser expresa, para una materia concreta y un plazo cierto para ejercerla. En ningún caso cabrá delegación legislativa para la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, la regulación esencial de los derechos reconocidos por el Estatuto, el desarrollo básico de sus instituciones o el régimen electoral.
3. Los decretos leyes se elaborarán y aprobarán por el Gobierno en los supuestos de necesidad urgente y extraordinaria, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. No serán objeto de regulación por decreto Ley el desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses y aragonesas y de las instituciones reguladas en el Estatuto de Autonomía, el régimen electoral, los tributos y el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Artículo 39. Proyecto de Ley de Presupuestos.

1. El procedimiento de elaboración de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón será el establecido en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
2. La tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de las Cortes de Aragón. En todo caso, las enmiendas que supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación.

CAPÍTULO II

Potestad reglamentaria

Artículo 40. Del ejercicio de la potestad reglamentaria.

1. El Gobierno de Aragón es el titular de la potestad reglamentaria. No obstante, los miembros del Gobierno podrán ejercer la potestad reglamentaria cuando así les habilite para ello una ley o disposición reglamentaria aprobada por el Gobierno.
2. El Gobierno, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, está facultado para regular todas las materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con excepción de las reservadas a la ley, así como para dictar normas en desarrollo y aplicación de las leyes.
3. Las disposiciones reglamentarias no podrán tipificar infracciones penales ni administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, sin perjuicio de su función de desarrollo de la ley o norma con rango de ley.
4. El Presidente o la Presidenta del Gobierno de Aragón podrá dictar las disposiciones reglamentarias sobre la estructura organizativa de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como respecto de las funciones ejecutivas que se hubiese podido reservar y cualesquiera otras disposiciones reglamentarias en aquellos supuestos que le habilite para ello la ley u otra disposición reglamentaria aprobada por el Gobierno.
5. Las Comisiones Delegadas del Gobierno podrán dictar disposiciones de carácter general cuando les habilite para ello el Gobierno en su decreto de creación, dentro del ámbito propio de su competencia.
6. Las personas titulares de las Vicepresidencias y de los Departamentos podrán aprobar las correspondientes disposiciones reglamentarias en asuntos de orden interno en las materias de su competencia. Igualmente, podrán ejercer la potestad reglamentaria cuando así les habilite para ello una ley o disposición reglamentaria aprobada por el Gobierno.
7. Las resoluciones, circulares o instrucciones emitidas por los órganos de la Administración no tendrán la consideración en ningún caso de disposiciones dictadas en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
8. La potestad reglamentaria no es susceptible de delegación.

Artículo 41. Forma de las disposiciones del Gobierno y de sus miembros.

1. Las disposiciones de carácter general emanadas del Gobierno de Aragón o del Presidente o Presidenta adoptarán la forma de Decreto, según disponen los artículos 1.4 y 19 de esta Ley.
2. Las disposiciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno adoptarán la forma de Orden.
3. Las disposiciones de carácter general emanadas de las personas titulares de las Vicepresidencias y de los Departamentos tendrán la forma de Orden.

Artículo 42. Principio de jerarquía de los reglamentos.

1. Los reglamentos no podrán vulnerar lo establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes, las normas con rango de ley u otros reglamentos jerárquicamente superiores.

2. Los reglamentos se ordenan jerárquicamente según los órganos de los que emanen, de la siguiente forma:
 - a) Disposiciones aprobadas por el Presidente o la Presidenta del Gobierno o por el Gobierno.
 - b) Disposiciones aprobadas por las Comisiones Delegadas del Gobierno.
 - c) Disposiciones aprobadas por las personas titulares de las Vicepresidencias y los Departamentos

CAPÍTULO III

Principios de buena regulación y planificación normativa

Artículo 43. *Principios de buena regulación.*

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, el Gobierno de Aragón y sus miembros, actuarán de acuerdo con los principios de buena regulación recogidos en la legislación básica del Estado.

2. Son principios de buena regulación los siguientes: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

3. En la exposición de motivos de los anteproyectos de ley o en la parte expositiva de los proyectos de reglamento, así como en las correspondientes memorias justificativas, se deberá justificar su adecuación a dichos principios.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las cláusulas derogatorias deberán indicar, de manera clara y expresa, las normas completas o los preceptos concretos que pierden su vigencia con la nueva disposición, evitando las cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente.

Artículo 44. *Plan Anual Normativo.*

1. El Gobierno aprobará anualmente mediante Acuerdo un Plan Normativo que recogerá todas las iniciativas legislativas y reglamentarias que, durante el año siguiente, vayan a ser elevadas para su aprobación.

2. El Plan será aprobado durante el último trimestre del año anterior y se publicará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

3. Cuando se eleve para su aprobación una propuesta normativa que no figure en el Plan Anual Normativo del ejercicio en curso será necesario justificar este hecho en la memoria justificativa.

4. Anualmente, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente, el Gobierno de Aragón aprobará un informe en el que se recogerá el grado de cumplimiento del Plan Normativo del año anterior.

Artículo 45. *Evaluación normativa y adaptación a los principios de buena regulación.*

1. Los Departamentos proponentes de las iniciativas en coordinación con el Departamento competente en materia de calidad normativa decidirán cuáles de las normas incluidas en el Plan Anual Normativo que se eleve para su aprobación serán objeto de evaluación posterior. Dicha evaluación tendrá por objeto comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos y su adecuación a los principios de buena regulación, todo ello de acuerdo con lo previsto en la legislación básica del Estado.

2. El resultado de la evaluación de las normas seleccionadas se plasmará en un informe que se publicará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

3. La normativa vigente, atendiendo a los resultados de la evaluación, podrá ser objeto de revisión y adaptación para garantizar el cumplimiento de los principios de buena regulación.

CAPÍTULO IV

Procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos

Artículo 46. *Iniciativa.*

La iniciativa para la elaboración de las disposiciones normativas corresponde a los miembros del Gobierno en función de la materia objeto de regulación, que designará el órgano directivo al que corresponderá el impulso del procedimiento.

Artículo 47. *Consulta pública previa en el ejercicio de la potestad reglamentaria.*

1. Una vez aprobada la orden de inicio, y con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, se abrirá un período de consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma sobre:

- a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- c) Los objetivos de la norma.
- d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2. La consulta pública durará un mínimo de quince días naturales y un máximo de treinta días naturales, y se hará efectiva a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.

3. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se trate de normas organizativas o presupuestarias.
- b) Cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen.
- c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.
- d) En el caso de la tramitación urgente de la norma.

4. La concurrencia de alguna o varias de las razones previstas en el apartado anterior deberá motivarse en la memoria justificativa.

Artículo 48. Elaboración de la disposición normativa.

1. El órgano directivo competente procederá a elaborar un borrador de la disposición normativa acompañado de una memoria justificativa que contendrá:

- a) una justificación del cumplimiento de todos los principios de buena regulación,
- b) un análisis de la adecuación de los procedimientos administrativos que en ella se incluyan a las exigencias derivadas de su tramitación electrónica,
- c) las aportaciones obtenidas en la consulta pública, en caso de haberse realizado,
- d) el impacto social de las medidas que se establezcan que incluirá el análisis de la nueva regulación desde el punto de vista de sus efectos sobre la unidad de mercado, y
- e) cualquier otra consideración que se estime de especial relevancia.

2. Los proyectos de norma o disposición deberán ir acompañados de la siguiente documentación:

a) Un informe de evaluación de impacto de género, que deberá contemplar en todos los casos los indicadores de género pertinentes y los mecanismos destinados a analizar si la actividad proyectada en la norma podría tener repercusiones positivas o adversas, así como las medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten, para reducir o eliminar las desigualdades detectadas, promoviendo de este modo la igualdad. El informe de evaluación de impacto de género incorporará una evaluación sobre el impacto por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género.

b) En el caso de disposiciones normativas que puedan afectar a personas con discapacidad, un informe sobre impacto por razón de discapacidad, que analice los posibles efectos negativos y positivos sobre las mismas y establezca medidas que desarrollen el derecho de igualdad de trato.

c) Una memoria económica con la estimación del coste económico a que dará lugar la implantación de las medidas contenidas en la disposición normativa en tramitación y, en caso de que implique un incremento del gasto o disminución de los ingresos, presentes o futuros, deberá detallar la cuantificación y valoración de sus repercusiones

d) Cualesquiera otros informes que pudieran resultar preceptivos conforme a la legislación sectorial.

3. Una vez elaborada la documentación citada en los apartados anteriores, se emitirá informe de la Secretaría General Técnica del Departamento al que pertenezca el órgano directivo impulsor de la disposición, en el que se realizará un análisis jurídico procedimental, de competencias y de correcta técnica normativa, así como cualquier otra circunstancia que se considere relevante.

Artículo 49. Puesta en conocimiento al Gobierno.

Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley, la personal titular del Departamento competente por razón de la materia elevará al conocimiento del Gobierno de Aragón la iniciativa, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, procesos participativos, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen podrá prescindirse de este trámite.

Artículo 50. Procesos de deliberación participativa.

Los anteproyectos de ley que afecten a derechos civiles, políticos y sociales incluirán, con carácter general, un proceso de deliberación participativa de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre participación ciudadana. En el caso de que resulte impropio o imposible llevar a cabo este proceso se motivará adecuadamente en la memoria justificativa.

Artículo 51. Información pública y audiencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

1. Cuando la disposición reglamentaria afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. Este trámite se completará con el de información pública en virtud de resolución del órgano directivo impulsor del procedimiento que se publicará en el *Boletín Oficial de Aragón*.

2. La audiencia e información pública tendrán un plazo mínimo de quince días hábiles desde la notificación o publicación en el *Boletín Oficial de Aragón*, según proceda.

3. El centro directivo competente emitirá un informe de análisis de las alegaciones formuladas en la información pública y audiencia, con las razones para su aceptación o rechazo, que será objeto de publicación en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

4. Los trámites de audiencia e información pública podrán omitirse en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas.
- b) Cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen.

La concurrencia de alguna o varias de estas razones deberá motivarse en la memoria justificativa.

Artículo 52. Informes y memoria explicativa de igualdad.

1. El centro directivo someterá el texto de toda disposición normativa, legal o reglamentaria, a todo informe y dictamen que sea preceptivo, así como a aquellos informes que se consideren oportunos.

2. En el caso de que la disposición normativa, legal o reglamentaria, implique un incremento del gasto o disminución de los ingresos presentes o futuros deberá solicitarse un informe preceptivo del Departamento competente en materia de hacienda.

3. El centro directivo remitirá el texto a las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos afectados para que formulen las sugerencias oportunas simultáneamente con los trámites de audiencia e información pública cuando procedan y, en su caso, a cualesquiera otros órganos de consulta y asesoramiento.

4. El órgano directivo, deberá elaborar una memoria explicativa de igualdad, que explique detalladamente los trámites realizados en relación a la evaluación del impacto de género y los resultados de la misma.

5. A continuación, la disposición normativa será sometida a informe preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos, salvo que se trate de disposiciones reglamentarias de organización competencia de la persona titular de la Presidencia.

6. Recibidos todos los informes previos necesarios, se recabará dictamen del Consejo Consultivo de Aragón cuando así esté previsto en la normativa aplicable.

Artículo 53. *Aprobación.*

1. Una vez cumplidos los trámites anteriores se elaborará una memoria final que actualizará el contenido de la memoria justificativa y de la memoria económica, si hubiera habido alguna variación en la misma, y se acompañará al anteproyecto de ley o proyecto de disposición general para su posterior aprobación. La persona titular del Departamento competente por razón de la materia, lo elevará al Gobierno, cuando proceda, para su aprobación.

2. En el caso de los proyectos de ley, se remitirán a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria acompañados de la memoria final prevista en el apartado anterior y, en su caso, de la correspondiente memoria económica, así como de los oportunos informes preceptivos.

3. El Gobierno podrá retirar el proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación, siempre que no hubiera recaído acuerdo final de las Cortes. El proyecto de ley se retirará, salvo Acuerdo expreso del Gobierno de Aragón que se pronuncie sobre su mantenimiento, cuando de las modificaciones introducidas en su tramitación parlamentaria, se derive un aumento de los gastos o disminución de los ingresos previstos.

4. Si la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley caduca por finalización de la legislatura, el Gobierno previo informe de la persona titular de la Secretaría General Técnica del Departamento competente por razón de la materia y de la Dirección General de Servicios Jurídicos, en el plazo de seis meses desde su constitución, puede volver a aprobar el mismo texto que haya presentado y remitirlo de nuevo a las Cortes, sin necesidad de más trámites.

Artículo 54. *Tramitación de urgencia.*

1. Las iniciativas normativas legales o reglamentarias se tramitarán por el procedimiento de urgencia cuando así lo acuerde justificadamente el Gobierno en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurren circunstancias extraordinarias de interés público.

b) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea, del Estado o de la Comunidad Autónoma.

2. La tramitación urgente seguirá los trámites del procedimiento ordinario contemplado en este capítulo con las siguientes especialidades:

a) No será sometido a la consulta pública previa a la elaboración.

b) La memoria justificativa podrá limitarse a la justificación de la necesidad y oportunidad de la disposición, así como de la urgencia de su tramitación.

c) No será necesario dar conocimiento al Gobierno con carácter previo a su aprobación, en el caso de los anteproyectos de ley.

d) La reducción a la mitad de los plazos previstos; los de audiencia e información pública quedarán reducidos a siete días hábiles.

e) La falta de emisión de informes preceptivos en plazo no impedirá la continuación del procedimiento.

f) Las iniciativas normativas serán objeto de tramitación preferente en los centros directivos correspondientes.

Artículo 55. *Decretos Leyes.*

1. Los Decretos leyes contendrán una exposición de motivos donde deberán justificarse las razones de necesidad urgente y extraordinaria de la norma.

2. El Gobierno de Aragón podrá aprobarlo limitándose los trámites exigibles al informe preceptivo que debe emitir la Dirección General de Servicios Jurídicos.

Artículo 56. *Decretos Legislativos.*

1. El procedimiento de elaboración de los decretos legislativos será el previsto para los proyectos de ley con la excepción de la toma de conocimiento inicial.

2. No procederán los trámites de consulta pública previa, audiencia e información pública ni los procesos participativos en los procedimientos para la aprobación de decretos legislativos.

Artículo 57. Información de relevancia jurídica.

Las normas que estén en procedimiento de elaboración se publicarán en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Artículo 58. Publicidad de las normas.

1. Las leyes, normas con rango de ley y disposiciones reglamentarias deberán publicarse en el *Boletín Oficial de Aragón* para que produzcan efectos jurídicos y entrarán en vigor a los veinte días desde su completa publicación, salvo que en ellos se establezca un plazo distinto.

2. Las leyes y normas con rango de ley deberán, además, ser publicadas en el *Boletín Oficial del Estado*.

Artículo 59. Control judicial de los reglamentos.

Los reglamentos regulados en el presente título podrán impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio del control que pueda corresponder al Tribunal Constitucional».

Disposición transitoria única.— Régimen transitorio del procedimiento de elaboración de normas.

Los procedimientos de elaboración de normas que estuvieran iniciados a la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la legislación anterior. A estos efectos se entenderá que los procedimientos han sido iniciados si se hubiere aprobado la correspondiente orden de inicio de los mismos.

Disposición derogatoria única.— Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera.— Modificación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

El apartado 5 del artículo 54 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón queda redactado de la siguiente manera:

«5. La elaboración de planes o programas de carácter plurianual y los programas operativos en el marco de la utilización de los fondos europeos, incluirán con carácter general, un proceso de deliberación participativa. En caso de que resulte improcedente o imposible llevar a cabo este proceso, se motivará adecuadamente».

Disposición final segunda.— Delegación legislativa.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y artículos concordantes de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, se autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe un texto refundido de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón y de las normas legales que la modifican.

Disposición final tercera.— Desarrollo de la ley.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

Disposición final cuarta.— Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Boletín Oficial de Aragón*.

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO

3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY

3.1.1. APROBADAS

3.1.1.2. EN COMISIÓN

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el *Boletín Oficial de las Cortes de Aragón* de las Proposiciones no de Ley que se insertan a continuación, aprobadas por las distintas Comisiones.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

Aprobación por la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Proposición no de Ley núm. 80/19-X, sobre la mejora de la seguridad vial.

La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, con motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 80/19-X, sobre la mejora de la seguridad vial, ha acordado lo siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España para:

1.º Analizar y buscar soluciones en materia de seguridad vial a la mayor brevedad posible para reducir el elevado número de Kilómetros con riesgo elevado en la red nacional a su paso por Aragón.

2.º Tomar todas las medidas necesarias en materia de seguridad vial de manera inmediata y urgente sobre los trece tramos de concentración de accidentes destacados en el informe a su paso por Aragón.»

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

La Presidenta de la Comisión
BEATRIZ SÁNCHEZ GARCÉS

Aprobación por la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Proposición no de Ley núm. 25/20, sobre el arreglo de la carretera A-2511 entre Ferreruela y Segura de los Baños.

La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, con motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 25/20, sobre el arreglo de la carretera A-2511 entre Ferreruela y Segura de los Baños, ha acordado lo siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a la mejora y acondicionamiento, a la mayor brevedad posible, de la carretera A-2511 entre las localidades de Ferreruela de Huerva y Segura de los Baños.»

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

La Presidenta de la Comisión
BEATRIZ SÁNCHEZ GARCÉS

3.1.2. EN TRAMITACIÓN

3.1.2.1. EN PLENO

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones no de Ley que figuran a continuación, presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por los Grupos Parlamentarios proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 273.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a estas Proposiciones no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que se debatan.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Proposición no de Ley núm. 64/20, sobre la mejora de la calidad de las prestaciones y de la atención de las personas amputadas.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (Grupo Mixto), de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Propo-

sición no de Ley, relativa a la mejora de la calidad de las prestaciones y de la atención de las personas amputadas, para su tramitación en el Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las personas amputadas en nuestra Comunidad se encuentran discriminadas dependiendo de si dicha amputación se debe a un accidente que tenga cobertura de un seguro, o si dicha amputación se debe a accidentes domésticos o por enfermedad común.

Las primeras cuentan con una rehabilitación integral, acceso a las prótesis que requieran y una indemnización que les permite adecuar y ajustar su entorno a sus necesidades.

Las segundas que dependen de nuestro sistema sanitario necesitan que dicho sistema mejore en diferentes aspectos para responder a sus necesidades.

Por un lado, las personas que son atendidas en el servicio público de salud reciben una atención de calidad durante la fase aguda y la preparación de la prótesis, pero empiezan a encontrar dificultades en la rehabilitación hospitalaria y sobre todo en la rehabilitación con la prótesis, sin que exista un equipo multidisciplinar que respalde y enfoque la atención para definir, en función de la persona y de sus condiciones vitales, intereses e inquietudes, cuál es la prótesis que mejor se ajusta a sus necesidades.

Dicho equipo potenciaría la rehabilitación y seguimiento de la persona amputada mejorando su calidad de vida. En este momento la prescripción de la prótesis la realiza un facultativo que se rige fundamentalmente por el criterio de la edad para asignar la prótesis adecuada y únicamente dentro del catálogo.

Por otro lado, la parte del catálogo relativa a las prótesis de extremidades no ha sido actualizada aún a nivel nacional. Esperamos que dicha actualización llegue pronto y, además, incluya precios y materiales de última tecnología. Prótesis con microprocesadores, pies acumuladores de energía y materiales ligeros tipo fibra de carbono y titanio. Ya que el catálogo actual tiene precios obsoletos y no incluye prótesis avanzadas o materiales ligeros.

Otras especialidades médicas pueden recurrir a lo más actual para prescribir a sus pacientes. Esto no ocurre con la medicina rehabilitadora, que también debería poder tener acceso al abanico de posibilidades que se elija en función de las necesidades de las personas y que su vida no esté condicionada por el nivel económico.

En este sentido, compartimos la vocación de la modificación de la orden de 31 de octubre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, para posibilitar el abono directo ya que en este momento el pago se adelanta por parte de las personas y se retrasa mucho su pago por la Administración, además de que muchas veces no se abonan en su totalidad, hasta meses después. Esto supone que se llegan a solapar recetas y gastos, pues los productos se deterioran, los niños y niñas crecen...

También se debería abordar la existencia de plazos que limita y no se ajusta a la realidad. Se pueden pasar años en los que no sea necesario un cambio y luego sean necesarios cambios por circunstancias vitales que no se ajustan a los plazos.

Así como garantizar que dicho pago se ajuste a un buen trabajo, por lo que debiera haber un certificado del ajuste para lo que se necesita una supervisión y las garantías necesarias para ello. No se deben pagar productos una y otra vez porque no están bien realizados, hablamos fundamentalmente de los encajes, ya que ninguna prótesis sirve de nada sin un buen encaje, además de que cada encaje puede costar unos 5000 euros, por lo que es necesario que sea el adecuado.

Además, la oferta a este nivel en Aragón es muy escasa, lo que hace que muchos amputados acudan a centros de otras comunidades autónomas, ya que esta labor es muy artesanal y requiere de formación especializada y actualizada.

Por último, en noviembre de 2019 estaban pendientes de la valoración del grado de discapacidad 7.302 personas. En enero de 2020 estaban atendiendo las solicitudes de agosto de 2018, a pesar de que, según el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, en su Disposición adicional primera, sobre el reconocimiento del grado de discapacidad, se recoge que el organismo competente emitirá el certificado en el plazo máximo de 15 días naturales siguientes al de la presentación de la solicitud.

La realidad es otra, por lo que las personas amputadas deben esperar mucho tiempo para el acceso a bonificaciones que necesitan en un inicio como las adaptaciones del hogar o de los vehículos. Además hay otras situaciones como la prolongación del permiso maternal cuando el bebé nace con discapacidad que no requiere del certificado de grado de discapacidad para que se dé.

Todos los grandes amputados tienen al menos un reconocimiento del 33% y no es hasta que se avanza en el proceso rehabilitador cuando se puede definir el grado definitivo que podría mejorar si hay condiciones cubiertas.

Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Creación de una unidad de ortoprótesis de referencia, especializada para la rehabilitación y seguimiento de las personas amputadas.
2. Garantizar por parte del Sistema Público de Salud la supervisión de los encajes y la certificación del ajuste para que se autorice el pago y se dé por finalizada la prótesis.
3. Estudiar la implantación de un estudio propio en la Universidad pública de Zaragoza sobre ortoprótesis que responda a las necesidades de actualización de personal rehabilitador y de las ortopedias.

4. Incorporar en el Catálogo de ortoprótesis el concepto de mejora por el cual se debe permitir al paciente acceder a otro producto mejor del prescrito, pagando la diferencia y no la totalidad del producto.

5. Eliminar los plazos de renovación de productos y que los cambios se produzcan a demanda con justificación médica.

6. Mantener en la Orden que regulan las ayudas económicas sobre la prestación ortoprotésica el derecho a elegir ortopedia dentro del territorio nacional.

7. Habilitar un reconocimiento provisional del 33% de grado de discapacidad para los grandes amputados a partir de un informe médico tras la amputación.

Zaragoza, a 28 de febrero de 2020.

El Portavoz
ÁLVARO SANZ REMÓN

Proposición no de Ley núm. 67/20, sobre los recursos sanitarios destinados a los trastornos de la conducta alimentaria en Aragón.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Don David Arranz Ballesteros, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los recursos sanitarios destinados a los trastornos de la conducta alimentaria en Aragón, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) han adquirido una gran relevancia sociosanitaria en las últimas décadas por su complejidad, gravedad y dificultad para poder establecer un diagnóstico en todas sus dimensiones. Se trata de una patología de etiología multifactorial donde intervienen factores biológicos, familiares, factores genéticos y socioculturales que principalmente afectan a niños/as, adolescentes y jóvenes. Sin el tratamiento adecuado adquieren un curso crónico e incapacitante.

En las últimas décadas se han multiplicado por cinco los casos de trastornos de la conducta alimentaria, según algunos estudios realizados la prevalencia entre adolescentes con anorexia nerviosa aumentan en un 0,5-1%. Este trastorno afecta en mayor número a mujeres que a hombres (9,5/0,5).

Las pacientes con anorexia nerviosa están en alto riesgo para su propia salud y seguridad y tienen el más alto índice de mortalidad de entre todos los trastornos mentales. Su estado físico y su conducta suicida contribuyen a este alto riesgo.

En la actualidad los recursos hospitalarios destinados a estos trastornos en pacientes mayores de 18 años se encuentran ubicados en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Estos recursos son:

- Ingreso hospitalario: 2 camas para ingreso de pacientes adultos para todo el territorio Salud.
- Hospital de Día: en una superficie de 15m² que permite 6 plazas.
- Consultas externas.
- La dotación de personal es de 2 psiquiatras, 1 psicóloga, 2 enfermeras, 1 auxiliar.

Con estos recursos humanos y materiales y teniendo un total de 320 casos abiertos en consultas externas solo permite una consulta cada 4-5 semanas. Esta frecuencia es claramente inferior a lo recomendado para este tipo de pacientes, que es de 1 revisión semanal.

Con solo 2 camas para ingresar a pacientes adultos de todo Aragón, y para responder a la demanda, estos pacientes son ingresados en Psiquiatría de Agudos, lo que supone una limitación para ingresos de pacientes agudos por otras patologías, siendo además una Unidad donde no hay medios de contención ni formación especializada de personal sanitario.

Otra posibilidad que está utilizando el Salud es la derivación a otras CC.AA, con un tiempo medio de estancia de un año. Los centros en los que actualmente existen pacientes de nuestra CC.AA son el Instituto de Trastornos Alimentarios de Madrid y Barcelona. Con independencia de la calidad de estos centros y la no concertación o creación de este tipo de recursos públicos o privados en Aragón, representan una incomodidad para los familiares y para la creación de una atención homogénea y altamente coordinada. Esta circunstancia impide formar a personal especializado que pueda, en un plazo de tiempo razonable, hacer frente a una demanda que crece de 10 pacientes adultos nuevos al mes, es decir más de 100 al año.

La Unidad de TCA del Hospital Ntra. Sra. de Gracia es fundamentalmente una Unidad de abordaje de Salud Mental, sin haberse establecido ningún modelo de colaboración reglado con Servicios de Endocrinología, Nutrición, Terapeuta Ocupacional, Trabajo Social, lo que limita el abordaje multidisciplinar hacia este tipo de patologías y con ello mejorar los resultados y pronósticos de los pacientes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Que, con base a lo expresado, las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a:

1) Incrementar el número de camas para la hospitalización completa de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, evitando el envío de estas a Unidades de Agudos, recomendándose un mínimo de 6 camas y una capacidad de Hospital de Día mínimo para 12 personas, evitando de este modo la derivación a centros privados en otras comunidades autónomas con el consiguiente perjuicio a pacientes y familiares.

2) Se complemente el actual servicio prestado a las pacientes con el abordaje multidisciplinar de otras especialidades: Endocrinología, Nutrición, Terapeuta Ocupacional y Trabajo Social.

3) Que se dote presupuestariamente y de forma suficiente este servicio de manera urgente.

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

El Portavoz del G.P. Vox en Aragón
DAVID ARRANZ BALLESTEROS

Proposición no de Ley núm. 68/20, sobre familias numerosas.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

M.º del Mar Vaquero Perianez, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre familias numerosas, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón, en su Capítulo VI regula las familias de especial consideración, incluyendo entre ellas a las Familias Numerosas, y debiendo por tanto, atendiendo al tenor literal de la Ley, tener una atención específica en los programas y actuaciones diseñados por el Gobierno de Aragón, por requerir la adopción de medidas singularizadas derivadas de su situación sociofamiliar.

La institución familiar se ha caracterizado, especialmente en nuestro territorio, por haber tenido capacidad de respuesta para afrontar cualquier desafío que se haya presentado ante ella o sus miembros. Las familias deben ser consideradas como un agente activo, con capacidad de contribuir en la construcción y mejora de la sociedad.

Cambios sociales relativamente recientes, tales como el alargamiento de la vida, la generalización de la incorporación de ambos miembros de las parejas al mundo laboral, la necesidad de conciliar la vida personal, familiar y laboral, la atención a dependientes, etc., han afectado a la forma de organización familiar y han hecho surgir nuevas demandas que deben, obligatoriamente, venir acompañadas de nuevas respuestas y servicios desde el sector público y privado. Reconocer el compromiso que mantienen nuestras familias y su ingente contribución al buen funcionamiento de la sociedad aragonesa debe ser el punto de partida de toda regulación normativa.

Entre esas demandas conviene hoy destacar que es fundamental contribuir a hacer más fácil y práctico aspectos que afectan directamente a estas familias, de hecho hay situaciones de carácter administrativo y burocrático que pueden ser mejoradas desde las administraciones públicas.

En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, en referencia a las familias numerosas, a realizar cuantas modificaciones normativas sean pertinentes para que las familias numerosas con hijos mayores de 21 años no tengan que acreditar anualmente que continúan con sus estudios para mantener el título acreditativo de familia numerosa, bastando para ello una declaración responsable.

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

La Portavoz Adjunta
M.º DEL MAR VAQUERO PERIANEZ

Proposición no de Ley núm. 69/20, sobre empleo femenino y conciliación laboral y familiar.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

M.º Ángeles Orós Lorente, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre empleo femenino y conciliación laboral y familiar, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad real y efectiva solo se puede lograr mediante la implementación de políticas globales con dotación económica suficiente, que ayuden a erradicar actitudes y comportamientos sexistas o discriminatorios, en cualquier ámbito de gestión pública autonómica. Para ello es necesario que sociedad y administraciones profundicen en el camino hacia la igualdad efectiva.

Sumarse a las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades es una obligación moral para los representantes de los ciudadanos y para cualquier gobierno.

Actos como la manifestación del día 8 de marzo ha demostrado ser un instrumento para visibilizar el compromiso de la sociedad para seguir implantando una igualdad de oportunidades real y efectiva, pero además hay que avanzar garantizando oportunidades educativas, laborales, profesionales y de conciliación para todos.

El empleo ha demostrado ser la principal herramienta para combatir la desigualdad. Otro gran ámbito de trabajo en materia de igualdad es la conciliación de la vida laboral y familiar.

Todos ellos son instrumentos de progreso de la sociedad a que todas las administraciones se han de sumar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a llevar a cabo políticas para fomentar el empleo femenino y la conciliación de la vida familiar y laboral poniendo en marcha políticas globales y medidas concretas y efectivas, con dotación económica, que permitan aumentar el emprendimiento femenino y la contratación de mujeres en todos los sectores económicos mediante la introducción de bonificaciones y mejoras en las subvenciones para las empresas que contraten a mujeres que potencien la racionalización de horarios y del teletrabajo o bolsas de horas para asuntos propios, así como incentivos fiscales en el tramo autonómico a dichas empresas.

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

La Portavoz Adjunta
M.º ÁNGELES ORÓS LORENTE

3.1.2.2. EN COMISIÓN

La Proposición no de Ley núm. 19/20, sobre un convenio con la Universidad de Zaragoza para el apoyo al alumnado ACNEAE por Altas Capacidades, pasa a tramitarse ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2020, ha admitido el escrito presentado por el Portavoz del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) en el que solicita que la Proposición no de Ley núm. 19/20, relativa a un convenio con la Universidad de Zaragoza para el apoyo al alumnado ACNEAE por Altas Capacidades, publicada en el BOCA núm. 37, de 22 de enero de 2020, que figuraba para su tramitación en Pleno, pase a tramitarse en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 de Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones no de Ley que figuran a continuación, presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios, y ha acordado su tramitación ante la correspondiente Comisión, en virtud de la voluntad manifestada por los Grupos Parlamentarios proponentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 273.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a estas Proposiciones no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que se debatan.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

*El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN*

Proposición no de Ley núm. 62/20, sobre el reconocimiento y competencias de los colegios profesionales de Aragón, para su tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Don David Arranz Ballesteros, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y competencias de los colegios profesionales de Aragón, solicitando su tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón se configura como una agrupación de los Colegios Profesionales de Aragón, conformada a la fecha por un total de 44 Colegios Profesionales, y aglutinando alrededor de 44.000 profesionales.

En tal agrupación se encuentran representados todos los sectores profesionales: sanitario —en toda su amplitud—; jurídico; técnico —tanto arquitectura como ingeniería—; científico; economía y empresa; educativo; deportivo; trabajadores sociales; inmobiliario, etc.

Las personas que componen y dirigen estos colegios profesionales son personas formadas en sus respectivas competencias laborales y profesionales, con experiencia práctica y con conocimientos a todos los niveles, como proporciona el trabajo diario en cada sector y el trato con diferentes públicos o consumidores y usuarios, y verse en distintas situaciones en el propio desarrollo de sus profesiones, en contacto directo con la sociedad.

Los Colegios Profesionales velan por el ejercicio responsable de cada profesión; el cumplimiento de las obligaciones legales, tanto en materia laboral, como fiscal, del aseguramiento de responsabilidades civiles, de la obtención de autorizaciones o titulaciones, la colegiación, cuando ésta sea obligatoria, etc.

Sus esfuerzos se centran en potenciar medidas de refuerzo de las garantías, técnicas y científicas, que proporcionen a los usuarios de los servicios profesionales la máxima seguridad y confianza; también ofrecer una formación continua de los profesionales; contribuir a la digitalización de las relaciones profesionales, tanto interprofesionales como con usuarios o la propia Administración; defender al colectivo de situaciones de intrusismo y competencia desleal, en aquellos casos en que se incumplan sus obligaciones legales, no asuman sus cargas económicas o de aseguramiento de su actividad, no se sometan al control deontológico y de ordenación de las profesiones y, en definitiva, generen situaciones de auténtico desamparo y fraude en los consumidores y usuarios de sus servicios.

La naturaleza pública de los colegios profesionales de Aragón se encuentra reconocida en la propia exposición de motivos de la Ley 2/1998, de 12 de marzo, Ley de Colegios Profesionales, y en su articulado.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, señala entre las funciones de los Colegios —art. 5 b), c) y d)—, además de la representación de sus colectivos, la de colaboración con la Administración mediante la realización de estudios, elaboración de informes, estadísticas y, específicamente, la participación en órganos consultivos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Que, con base a lo expresado, las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a que impulsen el debido reconocimiento y otorguen las siguientes competencias prácticas a los colegios profesionales de Aragón:

1.— Presencia y participación de los colegios profesionales en los órganos consultivos de la Administración — como lo están, por ejemplo, los sindicatos—, entre los que se encuentran: el Consejo Económico Social de Aragón, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Consejo de Universidades, el Consejo de Transparencia de Aragón o el foro de Contratación Pública de Aragón.

2.— El control efectivo de las actividades profesionales de su sector, que requieran su colegiación obligatoria, para poder ejercer, como garantías de control deontológico y buen servicio a consumidores y usuarios.

3.— Que sean tenidos en cuenta y se consideren como méritos a hacer valer en oposiciones, pliegos o mejoras de categorías profesionales los cursos que imparten los propios colegios profesionales.

Zaragoza, 25 de febrero de 2020.

El Portavoz del G.P. Vox en Aragón
DAVID ARRANZ BALLESTEROS

Proposición no de Ley núm. 63/20, sobre listas de espera para la valoración de la discapacidad, para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

M.º Ángeles Orós Lorente, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre listas de espera para la valoración de la discapacidad, solicitando su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para que las personas con discapacidad puedan acceder a las prestaciones y servicios específicos de carácter sanitario, educativo, social, laboral o fiscal necesitan obtener por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma un certificado que valore dicha discapacidad. Es un trámite previo e indispensable sin el cual estas personas no pueden ser beneficiarias de dichas medidas.

A una petición de información del Grupo Parlamentario Popular, en la que pedíamos información actualizada del número de personas en listas de espera para ser valoradas, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales nos contestó que hay 10.400 personas en lista de espera, y que, en el caso de la provincia de Zaragoza, tardan, de media, 9 meses en hacer dichas valoraciones.

En una pregunta oral en el pasado Pleno celebrado el 28 de febrero, la señora Consejera nos arrojó nuevos datos, diciendo, en sede parlamentaria, que, del 19 de diciembre de 2019 al 28 de febrero de 2020, las listas de espera habían pasado de 10.400 personas a 8.000, es decir, que en apenas dos meses se habían reducido en 2.400 personas y, por tanto, se habían resuelto sus valoraciones.

Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1.º Reducir las listas de espera para la valoración del grado de discapacidad hasta dejarlas a cero en un plazo máximo de 6 meses.

2.º Dotar al servicio de valoración de la discapacidad de los recursos materiales y humanos suficientes para poder ofrecer un mejor servicio de valoración de la discapacidad.

Zaragoza, 28 de febrero de 2020.

La Portavoz Adjunta
M.º ÁNGELES ORÓS LORENTE

Proposición no de Ley núm. 65/20, sobre la elaboración de un estudio sobre la inteligencia límite, para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

M.º del Mar Vaquero Perianez, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un estudio sobre la inteligencia límite, solicitando su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El término capacidad intelectual límite describe un intervalo de cociente intelectual superior al exigido en el diagnóstico de discapacidad intelectual, un CI comprendido entre 71 y 84, no siendo, por tanto, personas con discapacidad, por no estar entre los baremos establecidos, pero encontrándose, en la actualidad, en tierra de nadie.

Las personas con inteligencia límite presentan, a menudo, dificultades en el ámbito sanitario, educativo, social y laboral, por sus déficits en las habilidades adaptativas, que hace que sean necesarios apoyos intermitentes a lo largo de su vida para su plena integración.

En Aragón no existen cifras oficiales del número de personas que tienen capacidad intelectual límite, ni un diagnóstico de sus situaciones, ni qué necesidades específicas tienen.

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a elaborar y presentar, en esta Cámara, en el plazo de 9 meses, un estudio en el que se recoja el número de personas con inteligencia límite, los perfiles, sus necesidades, los recursos disponibles, así como las propuestas de mejora para este colectivo.

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

La Portavoz Adjunta
M.º DEL MAR VAQUERO PERIANEZ

Proposición no de Ley núm. 66/20, sobre el fomento de la apicultura en Aragón, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Daniel Pérez Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la apicultura en Aragón, solicitando su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aragón, con una flora y un clima privilegiados, la apicultura es una actividad de gran tradición. Actualmente, según consta en la web del Gobierno de Aragón, hay censadas 1.219 explotaciones apícolas, con un total de 104.082 colmenas. La mayoría de la explotaciones (68%) tienen un carácter lúdico, constituyendo una actividad que suele transmitirse de padres a hijos, se trata de explotaciones pequeñas que engloban solo el 30% del censo, y representan el 10% de la producción total de miel. El resto son explotadas comercialmente, bien de forma complementaria a otras actividades (30% de explotaciones, 60% de colmenas) o de forma exclusiva (2% de explotaciones, 20% de colmenas, 30% de producción).

La mayoría de los apicultores dedican sus colmenas a obtener miel, teniendo el resto de las producciones (cera, polen, veneno, jalea real o propóleos) un carácter residual. Más de la mitad (55%) se comercializa al por mayor, y solo el 20% se envasa directamente por los apicultores, el resto se vende a granel en el propio domicilio.

En octubre de 2016 se aprobó una Proposición no de Ley núm. 374/16, sobre el fomento de la apicultura en Aragón, con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios, en la que se proponían una serie de medidas que a día de hoy siguen sin llevarse a cabo.

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Que inste al Gobierno de España para que, a través del Ministerio correspondiente, ponga en marcha medidas urgentes para la defensa de la apicultura española, dada su importancia en la preservación de la biodiversidad ante las amenazas y situación del sector, y solicite a la Unión Europea la modificación del etiquetado que establece la Directiva 2001/110/CE, de la Miel en España, ahora modificada por la Directiva 2014/63/UE, para que se incluya la información del origen y el lugar de procedencia de la miel comercializada.

2. Que continúe implementando ayudas al sector apícola aragonés cofinanciadas con fondos europeos que favorezcan el sostenimiento de las colmenas en base a su importante función polinizadora y de aprovechamiento de los recursos naturales llevando a cabo las siguientes medidas:

a) Establecimiento de una prima de polinización a los apicultores aragoneses a partir del año 2020, tal como ya se hace en otras comunidades autónomas, estableciendo los recursos económicos necesarios.

b) Creación de un programa específico de ayudas para la profesionalización del sector apícola aragonés con criterios de viabilidad, sostenibilidad y asentamiento en el territorio.

c) Favorecer la apicultura aragonesa de trashumancia.

d) Fomentar el cooperativismo entre pequeños productores de miel.

e) Apostar por la formación con cursos de capacitación para nuevos apicultores.

f) Apoyar la creación de un *clúster* de la miel aragonesa.

g) Definir una ordenación y planificación de asentamientos de colmenas, con participación directa de ayuntamiento y asociaciones de apicultores, con base en la legislación vigente.

3. Realizar un estudio, en colaboración con las asociaciones de apicultores, sobre la posible creación de un sello propio para la Miel de Aragón o denominaciones específicas en zonas geográficas con características propias y especiales, de forma que:

a) Facilite el etiquetado y certificado de los diversos tipos de miel característicos de Aragón según su composición floral.

b) Se ponga al alcance de todo apicultor sin intermediarios para posibilitar la certificación de la producción del propio apicultor.

4. Continuar reforzando la investigación en el servicio de análisis físico/químicos de los Laboratorios y Asistencia Técnica del CITA y del Laboratorio Agroambiental adscrito al Servicio de Seguridad Agroalimentaria de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario para que:

a) Se creen y controlen unos parámetros y unos estándares de calidad que sean garantía para el consumidor y estímulo para el productor.

b) Se refuerce la investigación de las principales patologías y amenazas biológicas de las abejas, así como sobre las consecuencias del cambio climático y del uso de productos fitosanitarios sobre la salud de las colmenas.

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

El Portavoz
DANIEL PÉREZ CALVO

Enmienda presentada a la Proposición no de Ley núm. 25/20, sobre el arreglo de la carretera A-2511 entre Ferrerueta y Segura de los Baños.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Al amparo de lo establecido en el artículo 273.4 del Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha admitido a trámite la enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Equo, Chunta Aragonesista y Aragonés a la Proposición no de Ley núm. 25/20, sobre el arreglo de la carretera A-2511 entre Ferrerueta y Segura de los Baños, publicada en el BOCA núm. 37, de 22 de enero de 202, cuyo texto se inserta a continuación.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO MOVILIDAD Y VIVIENDA:

Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 273 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formulan la siguiente enmienda de modificación a la Proposición no de Ley 25/20-X, formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP), en relación al arreglo de la carretera A-2511, entre Ferrerueta y Segura de los Baños, para su debate y votación en la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a celebrar el próximo 4 de marzo de 2020.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Sustituir el texto de la parte dispositiva por el siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a la mejora y acondicionamiento, a la mayor brevedad posible, de la carretera A-2511 entre las localidades de Ferrerueta de Huerva y Segura de los Baños.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conveniente

Zaragoza, a 3 de marzo de 2020.

El Portavoz del G.P. Socialista
FERNANDO SABÉS TURMO
La Portavoz del G.P. Podemos Equo Aragón
MARTA PRADES ALQUÉZAR
El Portavoz del G.P. Chunta Aragonesista
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO
La Portavoz del G.P. Aragonés
ESTHER PEIRAT MESEGUER

3.1.3. RECHAZADAS

3.1.3.2. EN COMISIÓN

Rechazo por la Comisión de Sanidad de la Proposición no de Ley núm. 12/20, sobre la ampliación de la UCI Neonatal del Hospital Materno Infantil de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2020, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 12/20, sobre la ampliación de la UCI Neonatal del Hospital Materno Infantil de Zaragoza, presentada por el G.P. Popular y publicada en el BOCA núm. 37, de 22 de enero de 2020.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 6 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Rechazo por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Proposición no de Ley núm. 27/20, sobre un Plan Estratégico de Gobierno Abierto e Innovación Social.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 27/20, sobre un Plan Estratégico de Gobierno Abierto e Innovación Social, presentada por el G.P. Popular y publicada en el BOCA núm. 37 de 22 de enero de 2020.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 3 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Rechazo por la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Proposición no de Ley núm. 41/20, sobre las estaciones de esquí.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 41/20, sobre las estaciones de esquí, presentada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) y publicada en el BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

3.2. INTERPELACIONES

3.2.1. EN TRAMITACIÓN

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite las Interpelaciones que figuran a continuación, presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 254.3 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Interpelación núm. 26/20, relativa a la política general en materia de energía.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Sebastián Contín Trillo-Figueroa, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial la siguiente Interpelación relativa a la política general en materia de energía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de Aragón incluyó recientemente en su petición a REE para la planificación estatal del sistema eléctrico (2021-2026) el proyecto de interconexión eléctrica por el Pirineo central con Francia.

INTERPELACIÓN

¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia de energía, con especial referencia respecto a la interconexión eléctrica por el Pirineo central con Francia?

Zaragoza, 26 de febrero de 2020.

El Diputado
SEBASTIÁN CONTÍN TRILLO-FIGUEROA
V.º B.º
La Portavoz Adjunta
M.º ÁNGELES ORÓS LORENTE

Interpelación núm. 27/20, relativa a la vivienda de alquiler.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Don Carlos Ortas Martín, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Interpelación al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, relativa a la vivienda de alquiler, para su tramitación ante el Pleno de esta Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La delicada situación que se produjo a causa de la crisis económica hizo que una parte importante de la sociedad española, debido a la consecuente disminución de ingresos, derivó en la dificultad para que algunas personas pudieran acceder al alquiler de una vivienda digna dado su elevado coste en el mercado libre; asimismo, y en los casos más extremos, esta insuficiencia de ingresos provocó un aumento de los procedimientos de desahucio. Todas estas situaciones exigen una urgente respuesta de los poderes públicos.

En el decreto que se aprobó la Red de Bolsas de Vivienda para Alquiler Social en Aragón se estableció como requisito percibir unos ingresos anuales por la unidad de convivencia o la persona individual no superiores a la cantidad de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Por orden del Consejero competente en materia de vivienda podría modificarse el nivel máximo de IPREM exigido en atención al contexto social y económico existente.

Según informaciones remitidas por la propia Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda a finales de octubre, diversas poblaciones de Aragón contaban con familias con derecho recogido a una vivienda de alquiler social, pero en sus poblaciones no existe suficiente cantidad de viviendas para atender a la demanda.

En algunas de las poblaciones aragonesas con mayor población ni tan siquiera hay viviendas disponibles para alquiler social ni para atender emergencias habitacionales, cuyos destinatarios deberían ser los primeros destinatarios en asignaciones según el decreto que las regula.

La creciente baja de viviendas aportadas por particulares se une a la menguante bolsa de alquiler autonómica: en 2017 no se renovaron diez contratos, en 2018 aumentó a trece y en 2019, con la cifra que se dispone según informaciones a octubre del pasado ejercicio, aumentó a dieciocho.

La cifra de viviendas había decrecido en estos pasados ejercicios algo más de 10%, contando la Red de Viviendas para alquiler social con 339 viviendas a finales de octubre de 2019.

En informaciones recogidas por la prensa aragonesa, en 2015, el Ejecutivo reconocía haber tenido que congelar la bolsa, dejando ya las viviendas disponibles para emergencias habitacionales, como desahucios.

Esas mismas fuentes indicaban que en el Gobierno de Aragón había 2.948 solicitudes de vivienda sin valorar, cuya tramitación no avanzaba para no tener que reconocer más derechos a estas viviendas, levantando así falsas expectativas.

La falta de vivienda en régimen de «alquiler social es más que evidente».

Por todo lo expuesto, este Diputado presenta la siguiente

INTERPELACIÓN

¿Cuál es la política general sobre vivienda del Gobierno de Aragón, con especial referencia a la falta de viviendas en la Red de Bolsas para Alquiler Social?

Zaragoza, 28 de febrero de 2020.

El Diputado
CARLOS ORTAS MARTÍN
V.º B.º
El Portavoz
DANIEL PÉREZ CALVO

Interpelación núm. 28/20, relativa al porcino en Aragón.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Santiago Morón Sanjuán, Diputado del Grupo Parlamentario de Vox en Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Interpelación formulada al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre el porcino en Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

el decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control.

En el mismo se establece que el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.22.º, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva para dictar normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del paisaje, que incluye la planificación de la prevención y eliminación de las distintas fuentes de contaminación, así como el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático, y en su artículo 71.17.º le atribuye la competencia relativa a agricultura y ganadería. Por otra parte, el artículo 75.3.º del citado Estatuto recoge entre las competencias compartidas de la Comunidad Autónoma la de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica que establezca el Estado en materia de protección del medio ambiente, y el artículo 71.7.º de la misma ley atribuye competencias a la Comunidad Autónoma en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía, en su artículo 18, determina que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la salud, de acuerdo con los estándares y los niveles de protección que determinan las leyes, y a la protección ante las distintas formas de contaminación, de acuerdo con los estándares y los niveles que se determinen por ley, derechos que tratan de hacerse efectivos con la aprobación de este decreto.

Las explotaciones ganaderas y en concreto el sector porcino aragonés representan un sector clave para nuestro desarrollo rural. La sostenibilidad del sector ganadero, y en especial del porcino, en su triple dimensión económica, ambiental y social debe ser un objetivo prioritario para garantizar el futuro agroalimentario y rural de Aragón. Resultando indispensable que los diferentes agentes económicos, sociales y políticos colaboren en la consecución del mismo.

Uno de los aspectos más importantes respecto a este sector, por las afecciones que puede tener sobre la salud y el medio ambiente, hace referencia a la gestión de los estiércoles y determinados residuos generados en las explotaciones ganaderas.

El Anexo II del Decreto 53/2019 regula los impactos ambientales derivados del efecto acumulativo de la aplicación de nitrógeno de origen ganadero como fertilizante. En este sentido, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define los impactos ambientales como compatibles, moderados, severos y críticos.

A partir de los análisis se obtienen, para cada nueva implantación o ampliación de una existente, el nivel de saturación de fertilizantes de origen ganadero que supone la explotación en su entorno inmediato junto con la cabaña ganadera existente (efecto acumulativo).

Se establece asimismo que, si el efecto acumulativo supone una sobresaturación del 50%, se considerará que tiene un impacto crítico. El hecho de detectarse impactos críticos en la evaluación de una implantación implicaría que no se

consideraría viable la explotación, si se pretende la aplicación de los estiércoles de la explotación como fertilizantes, por lo que para poder considerarse ambientalmente viable la explotación, sin perjuicio de otras consideraciones ambientales, el destino final de los mismos no podría ser la aplicación como fertilizante y debería ser otro tipo de solución técnica, bien realizado en la propia explotación, bien mediante gestor autorizado.

INTERPELACIÓN

¿Cuál es la política general de su Departamento en relación con el sector porcino en Aragón y, en concreto, con la ampliación de explotaciones intensivas en este sector?

Zaragoza, 3 de marzo de 2020.

El Diputado
SANTIAGO MORÓN SANJUÁN

Interpelación urgente núm. 29/20, sobre la política general en relación con las inversiones en las comarcas mineras y, en particular, con la gestión de las ayudas destinadas a los planes de reindustrialización alternativos al carbón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Al amparo de lo establecido en el artículo 255.2 del Reglamento de la Cámara, he procedido a admitir a trámite la Interpelación urgente que figura a continuación, presentada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs). Esta Interpelación se incluirá en el orden del día de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de marzo de 2020.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 254.3 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 6 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Daniel Pérez Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en el artículo 255 del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta para su inclusión en el orden del día del próximo Pleno, días 12 y 13 de marzo, la siguiente Interpelación urgente sobre la política general en relación con las inversiones en las comarcas mineras y, en particular, con la gestión de las ayudas destinadas a los planes de reindustrialización alternativos al carbón, formulada al Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Planes de la Minería han representado en su conjunto una de las mayores acciones de gestión pública y estrategia económica llevadas a cabo en nuestro país.

Los esfuerzos dirigidos tanto a apoyar la productividad de las explotaciones carboníferas como para fomentar alternativas en los territorios afectados por la reducción de la actividad pasarán a la historia como uno de los mayores esfuerzos públicos para reestructurar un sector económico y paliar, de forma simultánea, sus negativos efectos socioeconómicos.

Dichos fondos han tenido una incidencia muy concreta en unos territorios, las Comarcas Mineras, que, a pesar de los esfuerzos realizados, han sufrido un fortísimo impacto demográfico, económico y social.

En un informe de la Cámara de Cuentas dado a conocer en septiembre pasado se llegaba a la conclusión de que el Plan Miner ha contribuido a la mejora de las infraestructuras municipales y de forma parcial al desarrollo local y al empleo de las comarcas más golpeadas por el fin del carbón, pero no se ha logrado el desarrollo económico suficiente ni ha sido eficaz para el mantenimiento de la población ni para revertir la tendencia migratoria.

Recientemente se ha conocido a través de los medios de comunicación que el Tribunal de Cuentas ha detectado «deficiencias e irregularidades» en la justificación de parte de los 1.786 millones de euros concedidos en subvenciones durante la aplicación de los denominados «Planes del Carbón» entre los años 2006 y 2017 y que tenían como el fomento del desarrollo alternativo y la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón en España.

El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión de las ayudas a cuencas mineras y llega a conclusiones como que la selección de las infraestructuras a subvencionar no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar.

Asimismo, la fiscalización ha observado una falta de coordinación entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) y las entidades colaboradoras, lo que afectó al seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados, a las comprobaciones sobre la aplicación de los fondos y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios. El Ministerio para la Transición Ecológica confirmó este miércoles 4 de marzo a los sindicatos en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de la Minería que el grueso de los 25 proyectos de infraestructuras de Teruel y Zaragoza del Miner de 2018 se retrasarán un año.

Solo se «salvarán» de este retraso medio centenar de proyectos a nivel nacional, entre los que habría «unos pocos» de Aragón, según aparece en los medios citando fuentes del Ministerio.

El ente auditor considera además que los planes entre 2006 y 2017 tenían un marco normativo “ambiguo, escasamente riguroso y con deficiencias».

Del análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales del Principado de Asturias, León y Teruel, donde llegaron los fondos públicos, se llega al resultado que el número de sociedades que se constituyeron por habitante es menor en las comarcas mineras que en las no mineras

Estamos en una comunidad que sufre graves problemas de despoblación especialmente en algunas zonas y cuyas comarcas mineras están viviendo una transición que no puede ser justa sin alternativas serias. Al retraso en la firma del convenio para una transición justa, que se desarrolla con el objetivo de paliar los efectos del cierre de la Central Térmica de Andorra se suma ahora la paralización y retraso de algunos proyectos a raíz del informe del Tribunal de Cuentas y la posterior comunicación el pasado 4 de marzo en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de la Minería.

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) es el organismo colaborador del Instituto de la Reestructuración de las Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) para la gestión de esta línea de ayudas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Decreto 18/20, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, adscribe el IAF a ese Departamento.

Por lo expuesto este Portavoz presenta la siguiente

INTERPELACIÓN

¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en relación con las inversiones en las comarcas mineras y, en particular, con la gestión de las ayudas destinadas a los planes de reindustrialización alternativos al carbón?

Zaragoza, 6 de marzo de 2020.

El Portavoz
DANIEL PÉREZ CALVO

3.3. MOCIONES

3.3.1. APROBADAS

3.1.1.2. EN COMISIÓN

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la Moción núm. 6/20, dimanante de la Interpelación núm. 2/20, relativa a la política general en materia frutícola en Aragón, que se inserta a continuación, aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Zaragoza, 3 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Aprobación por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Moción núm. 6/20, dimanante de la Interpelación núm. 2/20, relativa a la política general en materia frutícola en Aragón.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2020, con motivo del debate de la Moción núm. 6/20, dimanante de la Interpelación núm. 2/20, relativa a la política general en materia frutícola en Aragón, ha acordado lo siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Apoyar las justas reivindicaciones del sector agrario, y en concreto del sector frutícola, demandando precios justos ante la grave situación que atraviesan y que ponen en peligro la continuidad de muchos agricultores.
2. Seguir trabajando e impulsando ante las instituciones competentes una reforma justa y eficaz de la PAC como herramienta para hacer frente a la situación que atraviesa el sector frutícola en Aragón, que garantice la continuidad del sector y el afianzamiento del futuro del medio rural».

Zaragoza, 3 de marzo de 2020.

El Presidente de la Comisión
FERNANDO SABÉS TURMO

3.3.2. EN TRAMITACIÓN

3.3.2.2. EN COMISIÓN

Moción núm. 9/20, dimanante de la Interpelación núm. 20/20, relativa al coste de los servicios de los centros de mayores, para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite la Moción núm. 9/20, dimanante de la Interpelación núm. 20/20, relativa al coste de los servicios de los centros de mayores, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y, según la voluntad manifestada por el Portavoz del Grupo Proponente en la reunión de la Junta de Portavoces de fecha 4 de marzo de 2020, se tramitará ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 273.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta moción hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación núm. 20/20, relativa al coste de los servicios de los centros de mayores, formulada por la Diputada M.ª Ángeles Orós Lorente, presenta para su debate y votación en el Pleno la siguiente

MOCIÓN

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a proceder a la modificación de la Orden CDS/533/2016, de 25 de mayo, con el objetivo de dar retroactividad a la norma, de tal manera que a las personas que ingresaron en los centros para mayores de titularidad pública de nuestra Comunidad Autónoma, desde el 20 de noviembre de 2013 hasta del 16 de junio de 2016, se les revise su participación en la financiación del coste del servicio, para que tengan las mismas condiciones que aquellos que ingresaron a partir de junio de 2016, subsanando el agravio comparativo que por la fecha de acceso al servicio público están sufriendo con respecto a las personas mayores que ingresaron en dichos centros a partir de la publicación de dicha orden.

Zaragoza, 28 de febrero de 2020.

La Portavoz Adjunta
M.ª ÁNGELES ORÓS LORENTE

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite las Mociónes que figuran a continuación, presentadas por los Grupos Parlamentarios para su tramitación ante las distintas Comisiones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 273.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a estas mociones hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Moción núm. 10/20, dimanante de la Interpelación núm. 18/20, relativa a la política general del Gobierno en relación al sector primario y las diferentes problemáticas que le afectan en la actualidad, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación núm. 18/20, relativa a la política general del Gobierno en relación al sector primario y las diferentes problemáticas que le afectan en la actualidad, formulada por el Diputado Ramón Celma Escuin, presenta para su debate y votación en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la siguiente

MOCIÓN

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que:

1. Reverta el recorte económico ejecutado en el último decreto de «solicitud conjunta» de ayudas de la PAC para el año 2020 a las zonas con limitaciones naturales diferentes de montaña.
2. Aumente las ayudas económicas para la contratación de seguros agrarios.
3. Traslade al Gobierno de España la necesidad de compensar en la estimación objetiva del IRPF de agricultores y ganaderos los daños producidos por la tormenta Gloria.

Zaragoza, 3 de marzo de 2020.

El Portavoz
LUIS M.º BEAMONTE MESA

Moción núm. 11/20, dimanante de la Interpelación núm. 21/20, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de protección civil, con especial referencia a la gestión de emergencias en las que intervengan sustancias peligrosas, para su tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Álvaro Sanz Remón, portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (Grupo Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón, y dimanante de la Interpelación núm. 21/20, relativa a política general del Gobierno de Aragón en materia de protección civil, con especial referencia a la gestión de emergencias en las que intervengan sustancias peligrosas, formulada a la Consejera de Presidencia y Relaciones institucionales por el Diputado Sr. Sanz Remón, presenta para su debate y votación en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes la siguiente

MOCIÓN

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Revisar y actualizar los protocolos y medidas de todos los Planes de Emergencia Exterior en zonas afectadas por industrias que trabajan con sustancias peligrosas.

2. Cumplir con las medidas que se establecen en los Planes de Emergencia Exterior en situaciones de normalidad, para las poblaciones afectadas, especialmente:

- Garantizando una dotación adecuada de materiales.
- Organizando simulacros de emergencia periódica con la participación de los diversos grupos de acción implicados en una hipotética emergencia planteada (mínimo uno cada 3 años).
- Programando ejercicios de adiestramiento de los cuerpos implicados.
- Llevando a cabo programas de enseñanza básica de protección personal de la población.
- Poniendo en marcha campañas de divulgación e información entre la población, con charlas, demostraciones, folletos y acciones de familiarización de los sonidos de las alertas.

3. Elaborar la Ley de Emergencias y Protección civil de Aragón considerando el riesgo generado por los establecimientos que manejan sustancias químicas peligrosas, estableciendo protocolos de revisión de los Planes de Emergencia Exterior que afectan a las zonas de influencia de estas industrias y garantizando la dotación de medios para la información y formación de la población afectada.

En Zaragoza, a 3 marzo de 2020.

El portavoz
ÁLVARO SANZ REMÓN

Enmienda presentada a la Moción núm. 6/20, dimanante de la Interpelación núm. 2/20, relativa a la política general en materia frutícola en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Al amparo de lo establecido en el artículo 273.4 del Reglamento de la Cámara, la Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha admitido a trámite la enmienda presentada por los GG. PP. Socialista, Podemos Equo, Chunta Aragonesista y Aragonés a la Moción núm. 6/20, dimanante de la Interpelación núm. 2/20, relativa a la política general en materia frutícola en Aragón, publicada en el BOCA núm. 41, de 25 de febrero de 2020, y cuyo texto se inserta a continuación.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 3 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE:

Los Diputados de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 273 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formulan la siguiente enmienda a la Moción núm. 6/20, dimanante de la Interpelación núm. 2/20, relativa a la política general en materia frutícola en Aragón.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Sustituir el texto de la Moción por el siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a seguir trabajando e impulsando ante las instituciones competentes una reforma justa y eficaz de la PAC, como herramienta para hacer frente a la situación que atraviesa el sector frutícola en Aragón, que garantice la continuidad del sector y el afianzamiento del futuro del medio rural».

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuado.

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

La Diputada del G.P. Socialista
SILVIA GIMENO GASCÓN
El Diputado del G.P. Podemos Aragón
IGNACIO ESCARTÍN LASIERRA
El Diputado del G.P. Chunta Aragonesista
JOAQUÍN ANTONIO PALACÍN ELTORO
La Diputada del G.P. Aragonés
ESTHER PEIRAT MESEGUER

3.4. PREGUNTAS

3.4.1. PARA RESPUESTA ORAL

3.4.1.1. EN PLENO

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite las Preguntas que figuran a continuación formuladas por las señoras y señores Diputados para su respuesta oral en Pleno.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261.5 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

*El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN*

Pregunta núm. 155/20, relativa a la opacidad de la agenda de actividad institucional del consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Sebastián Contín Trillo-Figueroa, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la opacidad de su agenda de actividad institucional.

ANTECEDENTES

Desde que comenzó la legislatura, el Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial no ha facilitado a los aragoneses su agenda de actividad institucional, a pesar de estar obligado por la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Por lo expuesto, este Diputado presenta la siguiente

PREGUNTA

¿Cuándo va a cumplir el Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón?

Zaragoza, 26 de febrero de 2020.

*El Diputado
SEBASTIÁN CONTÍN TRILLO-FIGUEROA*

Pregunta núm. 156/20, relativa al protocolo que está adoptando el Departamento de Sanidad respecto al coronavirus.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Dña. Susana Gaspar Martínez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa al protocolo que está adoptando el Departamento de Sanidad respecto al coronavirus.

ANTECEDENTES

El brote de coronavirus ha llegado a España. A día de hoy hay ya 7 casos confirmados en nuestro país, en diferentes comunidades autónomas, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

En el día de ayer se convocó un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a fin de revisar los protocolos a poner en marcha ante el brote del coronavirus. Dentro de las decisiones adoptadas se incluyen medidas como hacer pruebas a pacientes ingresados por patologías graves respiratorias, como neumonía, que no tenga etiología conocida, ampliar las zonas de riesgo o reforzar la atención telefónica.

En Aragón, hoy se nos ha informado de refuerzo del proceso de triaje o diagnóstico a través del teléfono del 061.

Ante esta situación y en previsión de que el brote de coronavirus pueda llegar a nuestra comunidad autónoma. Por lo expuesto, esta Diputada realiza la siguiente

PREGUNTA

¿Qué medidas está adoptando el Departamento de Sanidad de Aragón para hacer frente al brote de coronavirus en nuestra comunidad autónoma?

Zaragoza, 26 de febrero de 2020.

La Diputada
SUSANA GASPAS MARTÍNEZ

Pregunta núm. 157/20, relativa a la situación de la atención sanitaria en el medio rural.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la situación de la atención sanitaria en el medio rural.

ANTECEDENTES

La situación de la atención sanitaria en el medio rural presenta, actualmente, numerosas deficiencias, por lo que esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

¿Considera, como máxima responsable del Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, que la atención sanitaria en el medio rural es mejor que la que se recibe en el medio urbano?

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 158/20, relativa a la accesibilidad a los tratamientos de radioterapia por los pacientes aragoneses.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la accesibilidad a los tratamientos de radioterapia por los pacientes aragoneses.

ANTECEDENTES

Los habitantes de las provincias de Huesca y Teruel siguen sin tener acceso a tratamiento de radioterapia en sus demarcaciones, por lo que esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

¿Considera, como máxima responsable del Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, que la accesibilidad a los tratamientos de radioterapia de los aragoneses que residen en las provincias de Huesca y de Teruel debe estar vinculada al número de enfermos de cáncer en cada provincia aragonesa?

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 159/20, relativa a la vacuna meningococo tetravalente.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Dña. Susana Gaspar Martínez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa a la vacuna meningococo tetravalente.

ANTECEDENTES

Desde el año 2018 existe un calendario de vacunación infantil común para todas las comunidades autónomas. Este calendario fue modificado en el año 2019 con la inclusión de la vacuna de los meningococos ACWY, conocida como tetravalente, para niños a partir de los 12 años, estableciendo que se iba a recaptar progresivamente a los adolescentes hasta los 18 años de edad.

Se acordó en el Consejo Interterritorial de Salud Pública que esta medida se iría implementando progresivamente a lo largo del año 2020 en todo el territorio.

Por lo expuesto, esta Diputada realiza la siguiente

PREGUNTA

¿En qué fase de implementación se encuentra la introducción de la vacuna contra meningococos ACWY en Aragón, así como el proceso de recaptación de los adolescentes hasta los 18 años de edad?

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Diputada
SUSANA GASPAR MARTÍNEZ

Pregunta núm. 160/20, relativa al pago por la resolución del contrato de la autopista autonómica ARA-A1.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Carmen M.ª Susín Gabarre, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Hacienda y Administración Pública, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa al pago por la resolución del contrato de la autopista autonómica ARA-A1.

ANTECEDENTES

El Gobierno de Aragón debe asumir el pago de la resolución del contrato de la autopista autonómica ARA-A1, por lo que esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

¿A qué acuerdos ha llegado el Gobierno de Aragón para pagar la resolución del contrato de la autopista autonómica ARA-A1 y con cargo a qué partida o partidas presupuestarias se va a pagar dicha indemnización?

Zaragoza, 28 de febrero de 2020.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 165/20, relativa al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª Beatriz García González, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

ANTECEDENTES

El Plan anual normativo del Gobierno de Aragón correspondiente al año 2020 prevé entre otras iniciativas reglamentarias el Decreto de Modificación del Decreto 110/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En la Constitución española se contempla el Turno de Oficio en el artículo 24 como el derecho a la «defensa y a la asistencia de letrado» mientras que la Asistencia Jurídica Gratuita aparece en el artículo 119 amparando el acceso a los tribunales, siendo el Estado quien asumirá los costes de «quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar».

En los últimos días se ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que el Ministerio de Justicia está ultimando una reforma legal que deslinda justicia gratuita, a la que tienen derecho los ciudadanos sin recursos y la relativa al servicio que prestan los abogados del turno de oficio.

Ante esta situación, esta Diputada realiza la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene previsto esta Consejería en la próxima reforma reglamentaria del Reglamento de Asistencia Jurídica deslindar la justicia gratuita del turno de oficio que prestan los abogados adscritos a dicho turno?

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

La Diputada
BEATRIZ GARCÍA GONZÁLEZ

Pregunta núm. 166/20, relativa a la situación del centro de salud de Sabiñánigo.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Ana Marín Pérez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la situación del centro de salud de Sabiñánigo.

ANTECEDENTES

El grupo municipal del Partido Popular de la localidad Sabiñánigo denunció desperfectos en la infraestructura del centro de salud de ese municipio oscense, por lo que esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué medidas concretas ha puesto en marcha el Departamento de Sanidad para solucionar la situación deficiente de la infraestructura del centro de salud de Sabiñánigo?

Zaragoza, 3 de marzo de 2020.

La Diputada
ANA MARÍN PÉREZ

Pregunta núm. 167/20, relativa a residencia de menores extranjeros no acompañados bajo la tutela del IASS.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª Marta Fernández Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa a residencia de menores extranjeros no acompañados bajo la tutela del IASS

PREGUNTA

¿Nos pueden informar de la situación por la que atraviesa el Centro de Acogida de Menores Extranjeros no Acompañados sito en Ctra. Movera a Pastriz, Km. 6,5, así como de los controles realizados a la fundación adjudicataria con la que se firmó el concierto para la prestación de esos servicios?

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

La Diputada
MARTA FERNÁNDEZ MARTÍN

Pregunta núm. 168/20, relativa a bienes de Sijena.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª Marta Fernández Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Educación, Cultura y Deporte, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa a bienes de Sijena.

PREGUNTA

¿Qué planes de acción tienen programados para que sean devueltos al Real Monasterio de Sijena los bienes expoliados, depositados o irregularmente vendidos, tales como objetos y obras de arte, incluyendo las pinturas murales de la Sala Capitular, que se encuentran hoy en día almacenados o expuestos en el Museo Diocesano de Lérida, en el MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) de Barcelona y en cualquier otro lugar del mundo?

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

La Diputada
MARTA FERNÁNDEZ MARTÍN

Pregunta núm. 169/20, relativa a la relación económica de Aragón con China.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Javier Campoy Monreal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la relación económica de Aragón con China.

ANTECEDENTES

China es uno de los países con mayor peso exportador para las empresas aragonesas. Los últimos estudios económicos alertan de una contracción del mercado chino tras la declaración de la OMS de Emergencia Internacional debido al covid-19 (coronavirus).

Esta situación se está extendiendo a otros países como Italia y puede suponer un problema también para España y afectar a nuestra comunidad autónoma, por lo que este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

¿Se han analizado los posibles efectos que sobre las empresas aragonesas puede tener la ralentización de la economía china y las medidas que, en tal caso, debe tomar su Departamento?

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

El Diputado
JAVIER CAMPOY MONREAL

Pregunta núm. 170/20, relativa a la visita comercial a China de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Javier Campoy Monreal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la visita comercial a China de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo.

ANTECEDENTES

Al final de la pasada legislatura se llevó a cabo por la Consejera de Economía, Planificación y Empleo una visita comercial a China, estableciéndose contactos con el citado país en relación a la ruta de la seda.

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuáles fueron los resultados, los compromisos y los contactos establecidos por la Consejera de Economía, Planificación y Empleo con China durante las visitas que realizó en su viaje al país asiático?

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

El Diputado
JAVIER CAMPOY MONREAL

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA

3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite las Preguntas que figuran a continuación formuladas por las señoras y señores Diputados, para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261.5 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Pregunta núm. 154/20, relativa a proyectos de envejecimiento activo.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

M.º Ángeles Orós Lorente, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 259 y 262 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a proyectos de envejecimiento activo.

ANTECEDENTES

En el año 2018, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales publicó la Orden CDS/1201/2018, de 2 de julio, por la que se hizo pública la convocatoria de subvenciones, a entidades locales, para el desarrollo de proyectos de envejecimiento activo para las anualidades 2018 y 2019, el 2 de julio de 2018.

Está finalizando el mes de febrero y las entidades locales necesitan saber si va a salir una nueva orden y, de ser así, cuándo van a convocar las subvenciones a entidades.

PREGUNTA

¿Va a salir una nueva orden de subvenciones a entidades locales para desarrollar proyectos de envejecimiento activo y, de ser así, cuándo tienen previsto publicarlas?

Zaragoza, 25 de febrero de 2020.

La Diputada
M.º ÁNGELES ORÓS LORENTE

Pregunta núm. 161/20 relativa a la carta enviada por el Gobierno de Aragón a la Ministra de Hacienda sobre la reclamación del mes 13 de IVA correspondiente a 2017.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Carmen M.º Susín Gabarre, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 259 y 262 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Hacienda y Administración Pública, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la carta enviada por el Gobierno de Aragón a la Ministra de Hacienda sobre la reclamación del mes 13 de IVA correspondiente a 2017.

ANTECEDENTES

El Presidente Lambán anunció públicamente que el Gobierno de Aragón había enviado una carta a la Ministra de Hacienda reclamando el pago de los 80 millones correspondientes al mes 13 de IVA de 2017. En dicho anuncio, el Presidente dijo que había dado un plazo de un mes al Ministerio para proceder a la devolución, en caso contrario se daría inicio al procedimiento administrativo previo a la reclamación judicial.

El plazo dado por el Gobierno de Aragón venció el pasado día 19 de febrero, por lo que esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

¿Ha respondido la Ministra de Hacienda a la misiva enviada Gobierno de Aragón requiriendo el pago del mes 13 de IVA de 2017? En caso de que haya respondido, ¿en qué sentido lo ha hecho? Si la Ministra no ha respondido al requerimiento del Gobierno de Aragón, ¿se han iniciado los trámites para el procedimiento administrativo previo y con qué actuación concreta?

Zaragoza, 28 de febrero de 2020.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 162/20, relativa a la inejecución del presupuesto para el 2019.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Carmen M.ª Susín Gabarre, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 259 y 262 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Hacienda y Administración Pública, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la inejecución del presupuesto para el 2019.

PREGUNTA

¿Cuál ha sido la cifra total de inejecución del presupuesto para el año 2019?

Zaragoza, 28 de febrero de 2020.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 163/20, relativa al coste de la licitación de un contrato de operaciones de crédito a corto plazo.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Carmen M.ª Susín Gabarre, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 259 y 262 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Hacienda y Administración Pública, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al coste de la licitación de un contrato de operaciones de crédito a corto plazo.

ANTECEDENTES

El Gobierno de Aragón ha licitado un contrato de operaciones de crédito a corto plazo por importe de 519 millones de euros, por lo que esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuál es el cálculo que ha hecho el Gobierno de Aragón sobre el coste que van a tener dichas operaciones de crédito a corto plazo, en intereses y comisiones bancarias?

Zaragoza, 28 de febrero de 2020.

La Diputada
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE

Pregunta núm. 164/20, relativa a la subvención afectados Idental.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Álvaro Sanz Remón, portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (Grupo Mixto), de acuerdo con lo establecido en el artículo 259 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la subvención afectados Idental.

ANTECEDENTES

En el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía se recoge la línea de subvención 480697: Subvención Afectados Idental.

Dicha subvención se dirige a la realización de tratamiento urgente a aquellas personas vulnerables afectadas por la mala praxis y/o tratamiento incompleto de estas clínicas.

Y señalan como indicadores pero sin definir claramente:

- Vulnerabilidad económica: renta unidad familiar
- Vulnerabilidad sanitaria: condición médica del afectado y urgencia en tratamiento.

También se explicita que dicha subvención se llevará a cabo mediante un convenio de colaboración/subvención a entidad privada sin ánimo de lucro para la atención bucodental a los afectados vulnerables.

La Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia, en su artículo 7, Ayudas de urgencia, ya contempla en su punto g) Gastos de medicación y otros cuidados sanitarios, que vengán diagnosticados por un facultativo sanitario del sistema público de salud, cuando no se hayan podido cubrir por otros sistemas de protección social.

Estas ayudas están destinadas a unidades de convivencia de ingresos iguales o inferiores a una vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que podrán ampliarse hasta 1,5 veces el IPREM en según qué situaciones, las definidas de especial vulnerabilidad en el marco de la ley.

Además, en el artículo 3, Naturaleza de las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales, de la Ley 10/2016 se recoge en el punto 1: «Las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales son aportaciones dinerarias con un régimen jurídico propio, definidas por su carácter finalista, requisitos y condiciones de reconocimiento, y carecen de la consideración de subvenciones públicas».

Pero, en conversaciones con afectados, dichas personas no han recibido la ayuda por diferentes motivos a pesar de cumplir las condiciones. Algunos, por deudas pendientes en el municipio de referencia, incumpliendo el artículo 3 de la ley. Otros porque por motivos económicos comparten vivienda con sus progenitores, ampliándose la unidad de convivencia y saliendo fuera del límite. Y otros porque, si se presentan como afectados de Idental, ni siquiera estudian su caso en los servicios sociales.

Por último, después de años de espera, la urgencia es totalmente relativa o más urgente todavía si cabe para que el plazo de ejecución sea de un año.

Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

¿Qué renta de unidad familiar se va a considerar para el acceso a la subvención afectados Idental? ¿Cómo se va a definir la urgencia del tratamiento y qué criterio se va a seguir? ¿Con qué entidad se está trabajando para canalizar la subvención y en qué plazo se prevé resolver? ¿Cuántas personas afectadas por Idental han cursado solicitud en servicios sociales una ayuda de urgencia? ¿Cuántas personas han recibido dicha ayuda para gasto sanitario? ¿Cómo se ha materializado dicha ayuda?

En Zaragoza, a 28 de febrero de 2020.

El Portavoz
ÁLVARO SANZ REMÓN

3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 89/20, relativa a la salud bucodental en personas con discapacidad (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).

La atención bucodental en personas con discapacidad es competencia del Departamento de Sanidad.

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales
M.ª VICTORIA BROTO COSCULLUELA

Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 90/20, relativa a las acciones de la Dirección General de Consumo relacionadas con los servicios bancarios de seguros y de inversiones (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).

Con el objetivo de implementar el trabajo en red, la Dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios genera, distribuye y aporta a la web periódicamente información actualizada dirigida, en primer lugar, a los agentes activos de consumo que prestan servicios en el Red Aragonesa de Información al Consumidor. Esto es: genera, sistematiza y distribuye información para los informadores.

Además, el personal de esta red (RAIC) que presta servicios en oficinas de información al consumidor de entidades locales y asociaciones de consumidores en nuestra Comunidad Autónoma recibe formación continua desde la misma Dirección General con el objeto de prestar un servicio a los consumidores y usuarios de todo el territorio aragonés.

En concreto, para la actualización de la información, la legislación y sus novedades, mensualmente se elabora el Boletín RAIC del centro de documentación de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, a través del que se informa puntualmente de todas las novedades en legislación y documentación de consumo:

— <https://www.aragon.es/en/-/boletin-de-novedades-de-la-raic>

El itinerario para la atención al consumidor.

<https://www.aragon.es/documents/20127/5621737/itinerario%20consumidor.pdf/022c9281-c1ad-22a8-af4a-f27ee0598e65?t=1563348886505>

Este documento o guía (en permanente revisión y actualización) tiene por propósito facilitar al consumidor y al profesional el cauce de consulta y reclamación, en su caso, en cada uno de los sectores, con las vías, plazos y formularios.

Los programas de formación, información y educación al consumidor se establecen para llegar a todos los sectores de la población, y su extensión por el territorio, incluyendo contenidos de servicios financieros, banca y seguros dirigidos a consumidores en acciones como:

¿Cuál es la función de la comisión interdepartamental y en qué líneas está trabajando?

El objetivo es permitir una actuación ágil y eficiente para garantizar en todo momento un alto nivel de protección de los consumidores y usuarios, especialmente a través de la unificación de criterios de actuación en los distintos ámbitos que afectan a consumo.

Con este órgano se pretende facilitar una mayor comunicación e intercambio de información entre los distintos departamentos de la Comunidad Autónoma cuya actuación pueda incidir en el ámbito de consumo, permitiendo identificar los campos de actuación prioritarios, evitando duplicidades y consiguiendo además un importante ahorro de costes.

Entre las funciones que se le atribuyen se encuentra la implantación de medidas que integren la promoción y difusión del consumo responsable, la elaboración de catálogos de actuaciones y programas estratégicos para el desarrollo del mismo, estudio de los problemas de consumo y de las iniciativas del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios y el Consejo Aragonés de Consumo, y en definitiva el tratamiento de aquellas materias que afecten a la protección de los consumidores y usuarios que sean competencia de los integrantes de la Comisión.

Respecto a las líneas de trabajo de la Comisión Interdepartamental, en relación al sector financiero, recordemos que se trata de materias cuya competencia es asumida por la Administración central. No obstante, la coordinación y flujo de información es permanente con objeto de garantizar una mayor eficacia en el desarrollo de proyectos y solución de controversias en el marco de las competencias atribuidas legalmente.

¿Qué acciones de divulgación se están haciendo desde la Dirección General de Consumo relacionadas con los servicios bancarios, de seguros y de inversiones?

1. Programa de Educación Permanente 2020: Educación Financiera.
2. Escolares: Programa de Educación del Consumidor en Aragón 2018-2019. Campaña «Educar para un Consumo Responsable». Programa de educación del consumidor 2019-2020.
3. Jornadas de Información al Consumidor en los municipios (Gobierno de Aragón/famcp 2019) Incluyeron Ponencia sobre la «Nueva Ley Hipotecaria» (Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito Inmobiliario).
4. Formación a empleados/as públicos que atienden servicios a consumidores: Plan de Formación Continua Interadministrativo del Personal de las Administraciones de Consumo de 2019.
5. Programa «Aulas de Consumo Aragón».

Por último, señalar que la Inspección de Consumo del Gobierno de Aragón ha llevado a cabo en los últimos años diversas campañas de inspección dirigidas al sector financiero. En el año 2020 se ha programado una campaña de inspección de créditos al consumo, que se va a acometer en el primer semestre, en la que se va a prestar especial atención a los sectores relacionados con los colectivos más vulnerables.

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales
M.ª VICTORIA BROTO COSCULLUELA

Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 91/20, relativa a la regulación del asistente personal (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).

Sí, la Comunidad Autónoma de Aragón participa en las reuniones que celebra el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Al ser una competencia de dicho órgano colegiado, bajo la dirección del Gobierno de Aragón, no puede hacerse una estimación.

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales
M.ª VICTORIA BROTO COSCULLUELA

Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 94/20, relativa al seguimiento de la calidad de las plazas concertadas (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).

¿Qué resultados se han obtenido de las últimas inspecciones a la Ciudad Residencial Sonsoles de Atades?

Cabe informar que la Ciudad Residencial Sonsoles de Atades está integrada por los siguientes centros:

- Residencia Sonsoles
- Residencia La Estrella Sonsoles
- Residencia CAMP Sonsoles
- Residencia de Envejecimiento Sonsoles
- Centro Ocupacional Sonsoles

SONSOLES RESIDENCIA MEDIOS Y LIGEROS

El centro Residencia Sonsoles consta inscrito en el Libro Registro de Servicios y Establecimientos, Sección de Servicios Sociales Especializados, Subsección Centros de Servicios Sociales con Internamiento, apartado Residencia De Discapacidad, bajo el número 767, con una capacidad máxima de 188 plazas asistenciales y 59 plazas de servicio de estancias diurnas.

Constan las siguientes visitas:

Acta número 45/2010, de fecha 6 de mayo: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización provisional de apertura.

Residencia de discapacitados psíquicos medios y ligeros. Compuesta por 4 módulos iguales A, B, C y D. Cada módulo tiene 48 plazas.

Se informa favorablemente la autorización provisional de apertura para los módulos A, B y C.

Acta número 62/2015, de 29 de junio: Seguimiento tras obtención de autorización provisional de apertura.

- Se comprueba que el módulo D está terminado y funcionando.
- Se indica la ocupación existente.
- Se solicita revisión por empresa autorizada de puertas cortafuegos y justificación.
- Se hace entrega de requerimiento de aportación de documentación.
- Se aporta por la entidad documentación relativa a condiciones materiales que es valorada de forma correcta.

Acta número 104/2016, de 8 de noviembre: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización definitiva de funcionamiento.

- Se relaciona la ocupación existente.
- Con carácter general, se observó una buena organización y funcionamiento por lo que se informó favorablemente como residencia para discapacitados intelectuales, medios y ligeros, con 144 plazas de capacidad residencial y residencia para personas con discapacidad intelectual severos-profundos con 44 plazas de capacidad y 59 plazas de servicios de estancias diurnas.

A las visitas de inspección ha de sumarse la valoración de documentación, debiendo resaltarse a este respecto que se ha requerido la subsanación de planos de evacuación y la aportación de plan de autoprotección general que recoja todo el conjunto del centro Ciudad Residencial Sonsoles, así como como específicos para cada centro autorizado.

SONSOLES LA ESTRELLA RESIDENCIA SEVEROS Y PROFUNDOS

El centro Residencia La Estrella Sonsoles consta inscrito en el Libro Registro de Servicios y Establecimientos, Sección de Servicios Sociales Especializados, Subsección Centros de Servicios Sociales con Internamiento, apartado Residencia de Discapacidad, bajo el número 766, con una capacidad máxima de 60 plazas asistenciales y 60 plazas de servicio de estancias diurnas.

Constan las siguientes visitas:

Acta número 46/2010, de fecha 6 de mayo: Se realizó visita de inspección con motivo de la solicitud de Autorización provisional de apertura.

Residencia de discapacitados psíquicos severos y profundos.

Se emite informe favorable para la autorización provisional de apertura como residencia para discapacitados psíquicos severos y profundos con una capacidad máxima de 60 plazas y 60 plazas de servicio de estancias diurnas.

Acta número 59/2015, de 29 de junio: Seguimiento.

- En el momento de la visita se encuentra sin ocupar. Se utiliza el centro para realizar actividades diversas de tipo ocupacional.
- Se indica que en el momento en que se ponga en funcionamiento el centro deberán informar a inspección de centros y servicios sociales.
- Se entrega relación de documentación a presentar por la entidad.

Acta número 105/2016, de 8 de noviembre: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización definitiva de funcionamiento.

- En el momento de la visita el centro se encuentra sin ocupar. Se utiliza para actividades de tipo ocupacional. En consecuencia, no se puede informar favorablemente la concesión de autorización definitiva de funcionamiento y modificación de plazas, debiendo comunicar a Inspección de Centros y Servicios Sociales cuando se proceda a la ocupación del mismo por residentes.

SONSOLES CAMP RESIDENCIA SEVEROS Y PROFUNDOS

El centro Residencia Camp Sonsoles consta inscrito en el Libro Registro de Servicios y Establecimientos, Sección de Servicios Sociales Especializados, Subsección Centros de Servicios Sociales con Internamiento, apartado Residencia de Discapacidad bajo el número 765, con una capacidad máxima de 64 plazas asistenciales y 64 plazas de servicio de estancias diurnas.

Constan las siguientes visitas:

Acta número 47/2010, de 6 de mayo: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización provisional de apertura.

Residencia de discapacitados psíquicos severos y profundos.

Se informa favorablemente la autorización provisional de apertura como residencia de discapacitados psíquicos severos y profundos, con una capacidad máxima de 64 plazas y 64 plazas de servicio de estancias diurnas.

Acta número 60/2015, de 29 de junio: Seguimiento.

- Se indica la ocupación existente.
- En general, se observa una correcta organización higiénico-sanitaria y de funcionamiento.
- Se hace entrega de notificación de requerimiento de documentación.

Acta número 107/2016, de 8 de noviembre: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización definitiva de funcionamiento.

- Se indica la ocupación existente.
- Con carácter general, se observaron deficiencias relacionadas con el mantenimiento del centro, con condiciones higiénico-sanitarias, vías de evacuación sin despejar y revisión de puertas cortafuegos.
- Se informa desfavorablemente la concesión de autorización definitiva de funcionamiento.

Acta número 28/2017, de 3 de abril: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización definitiva de funcionamiento.

- Se indica la ocupación existente.
- Se comprueba que han sido subsanadas la mayoría de los requerimientos contenidos en anterior acta.
- Se informa favorablemente la concesión de autorización definitiva de funcionamiento.

A las visitas de inspección ha de sumarse la valoración de documentación debiendo resaltarse a este respecto que recientemente se ha valorado como correcta documentación acreditativa del funcionamiento correcto de las puertas cortafuegos.

SONSOLES RESIDENCIA DE ENVEJECIMIENTO

El centro Residencia de Envejecimiento Sonsoles, consta inscrito en el Libro Registro de Servicios y Establecimientos, Sección de Servicios Sociales Especializados, Subsección Centros de Servicios Sociales con Internamiento, apartado Residencia de Discapacidad, bajo el número 768, con una capacidad máxima de 20 plazas asistenciales y 20 plazas de servicio de estancias diurnas.

Constan las siguientes visitas:

Acta número 48/2010, de 6 de mayo: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización provisional de apertura.

Residencia destinada a discapacitados psíquicos mayores.

Se emite informe favorable condicionado a nueva visita de inspección para comprobar la finalización de las obras.

Acta número 61/2015, de 29 de junio: Seguimiento.

- Se indica la ocupación existente.
- En general, se observa una correcta organización higiénico-sanitaria y de funcionamiento por lo que se ratifica informe favorable a la concesión de autorización provisional de apertura.
- Se hace entrega de notificación de requerimiento de documentación.

Acta número 103/2016, de 8 de noviembre: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización definitiva de funcionamiento.

- Se indica la ocupación existente.
- Con carácter general, se observa una buena organización y funcionamiento por lo que se informa favorablemente la concesión de autorización definitiva de funcionamiento.

A las visitas de inspección ha de sumarse la valoración de documentación no procediendo resaltar ninguna incidencia hasta la fecha.

CENTRO OCUPACIONAL SONSOLES

El Centro Ocupacional Sonsoles consta inscrito en el Libro Registro de Servicios y Establecimientos, Sección de Servicios Sociales Especializados, Subsección Centros de Servicios Sociales sin Internamiento, apartado Centros de Día, bajo el número 659, con una capacidad de 140 plazas.

Constan las siguientes visitas:

Acta número 71/2010, de 6 de mayo: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización provisional de apertura.

Edificio destinado a talleres ocupacionales dentro del complejo.

Se observan algunas deficiencias fácilmente subsanables, por lo que se informa favorablemente la autorización provisional de apertura.

Acta número 63/2015, de 29 de junio: Seguimiento.

- Se indica la ocupación existente.
- Se observa deficiente mantenimiento. No obstante, informan que van a proceder a la reforma y rehabilitación del centro para lo que cuentan con diferentes presupuestos para su realización.
- Se hace entrega de notificación de requerimiento de documentación.

Acta número 81/2016, de 27 de julio: Se realiza visita de inspección con motivo de la petición de modificación de la capacidad.

- Se indica la ocupación existente.
- Se constata que no se han iniciado las obras de reforma del centro. Se relaciona la documentación que han de presentar con motivo de la solicitud de autorización para la ampliación de capacidad.

Acta número 106/2016, de 8 de noviembre: Se realiza visita de inspección con motivo de la solicitud de autorización definitiva de funcionamiento.

- Se indica la ocupación existente, la reubicación de personas usuarias en otras instalaciones anexas, en tanto se ejecutan las obras de reforma.
- Se constata que no se han iniciado las obras de reforma del centro.
- Se informa desfavorablemente la autorización definitiva de funcionamiento.

CENTRO	CÓDIGO PLAZA	2011-2015 PLAZAS OCUPADAS (MARZO 2015)	2015-2019 PLAZAS OCUPADAS (MARZO 2019)	2019-2023 PLAZAS OCUPADAS (FEB. 2020)
CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES	Residencia	249	255	253
	Centro de día	2	3	9
	Centro ocupacional	1	1	1
CENTRO SANTO ÁNGEL	Residencia	262	265	272
CENTRO EL VERGEL	Centro de día	20	25	25
PISO TUTELADO PINTOR STOLZ	Pisos Tutelados o Asistidos para Personas con Discapacidad Intelectual Moderada o Ligera		1	0
PISO TUTELADO MARGARITA XIRGÚ 26-1.º B	Pisos Tutelados o Asistidos para Personas con Discapacidad Intelectual Moderada o Ligera		2	2
PISO TUTELADO MARGARITA XIRGÚ 26-1.º C	Pisos Tutelados o Asistidos para Personas con Discapacidad Intelectual Moderada o Ligera		2	2
PISO TUTELADO CUELLAR	Pisos Tutelados o Asistidos para Personas con Discapacidad Intelectual Moderada o Ligera		1	1
PISO TUTELADO JUAN CARLOS I	Pisos Tutelados o Asistidos para Personas con Discapacidad Intelectual Moderada o Ligera			0
PISO TUTELADO EUGENIO LUCAS	Pisos Tutelados o Asistidos para Personas con Discapacidad Intelectual Moderada o Ligera			0
PISO TUTELADO PLAZA POESÍA	Pisos Tutelados o Asistidos para Personas con Discapacidad Intelectual Moderada o Ligera			0

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales
M.º VICTORIA BROTO COSCULLUELA

Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 95/20, relativa a las personas con inteligencia límite (BOCA núm. 39, de 11 de febrero de 2020).

El concepto de «personas con inteligencia límite», tal y como se define en la pregunta, es decir, «personas que, no tienen certificado de discapacidad, pero que sin embargo tampoco llegan a los parámetros normales de coeficiente intelectual», es ajeno a las competencias del IASS y consideramos que también lo es respecto de las competencias del Departamento, sin perjuicio de mejor criterio.

En cualquier caso, desde el IASS no se desarrollan programas específicamente dirigidos a personas por su coeficiente intelectual, salvo que sean reconocidas como personas con discapacidad; si bien es cierto que muchos de los programas que se realizan financiados con las subvenciones de innovación, son itinerarios de inclusión en los que participan personas con situaciones muy limitadas en cuanto a preparación y recursos personales.

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales
M.º VICTORIA BROTO COSCULLUELA

Respuesta escrita de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Pregunta núm. 135/20, relativa a la financiación de la dependencia (BOCA núm. 41, de 25 de febrero de 2020).

Cuantía total: 39.606.752,58 €
En porcentaje: 17,21%

Zaragoza, 27 de febrero de 2020.

La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales
M.ª VICTORIA BROTO COSCULLUELA

3.5. COMPARECENCIAS

3.5.1. DE MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

3.5.1.1. EN PLENO

Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite la solicitud de comparecencia del Sr. Presidente del Gobierno de Aragón ante el Pleno, formulada a petición del G.P. Popular, al amparo del artículo 237.1 del Reglamento de la Cámara.

El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Presidente informe sobre la situación actual de las obras del nuevo Hospital de Alcañiz.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Solicitud de comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite la solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública ante el Pleno, formulada a petición del G.P. Popular, al amparo del artículo 237.1 del Reglamento de la Cámara.

El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Consejero informe sobre la liquidación provisional del presupuesto 2019.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Solicitud de comparecencia de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite la solicitud de comparecencia de la Sra. Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ante el Pleno, formulada a petición del G.P. Popular, al amparo del artículo 237.1 del Reglamento de la Cámara.

El objeto de esta comparecencia es que la Sra. Consejera informe sobre el Mínimo Vital Digno.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

3.5.1.2. EN COMISIÓN

La solicitud de comparecencia del Consejero de Educación, Cultura y Deporte pasa a tramitarse ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha conocido el escrito presentado por el Portavoz del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) en el que solicita que la comparecencia del Consejero de Educación, Cultura y Deporte ante el Pleno, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), publicada en el BOCA núm. 30, de 16 de diciembre de 2019, pase a tramitarse ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Consejero informe sobre la política del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en relación con el uso de dispositivos digitales en los centros docentes.

Se ordena la publicación de este cambio en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Solicitud de comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite la solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, formulada a petición del G.P. Popular, al amparo del artículo 237.1 del Reglamento de la Cámara.

El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Consejero informe sobre la viabilidad del presupuesto 2020 de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

Solicitud de comparecencia de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento ante la Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, ha admitido a trámite la solicitud de comparecencia de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento ante la Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, formulada a petición del G.P. Popular, al amparo del artículo 237.1 del Reglamento de la Cámara.

El objeto de esta comparecencia es que la Sra. Consejera informe sobre sus actuaciones en relación con la calidad del servicio de banda ancha prestado en municipios de la comunidad autónoma.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

3.5.2. DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y OTRAS PERSONAS

Solicitud de comparecencia de la Directora General de Planificación y Equidad ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa Ampliada de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.1.d) del Reglamento de la Cámara, ha acordado solicitar la comparecencia, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, de la Directora General de Planificación y Equidad ante la citada Comisión, para informar sobre el proceso de escolarización correspondiente al curso 2020-2021.

Se ordena la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 3 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

12. CÁMARA DE CUENTAS

12.2. OTROS INFORMES

Resolución del Presidente de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón por la que se abre el plazo de presentación de propuestas de resolución al Informe de fiscalización de las cuentas anuales de determinados consorcios y de la situación financiera de determinadas empresas del sector público aragonés en el ejercicio 2016.

Finalizado el debate del Informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de las cuentas anuales de determinados consorcios y de la situación financiera de determinadas empresas del sector público aragonés en el ejercicio 2016, y conforme a lo establecido en el artículo 320 del Reglamento de las Cortes de Aragón, y en el acuerdo adoptado por la Ponencia con fecha 21 de octubre de 2019, se procede a la apertura del plazo de presentación de propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, que concluirá el día 13 de marzo de 2020, a las 12 horas, que deberán ser congruentes con la materia objeto del debate.

Posteriormente, el debate y votación de las propuestas de resolución tendrá lugar en una próxima sesión de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas.

Zaragoza, 9 de marzo de 2020.

El Presidente de la Comisión
ÁLVARO BURRELL BUSTOS

Informe que la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas de Aragón eleva a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el Informe de la Cámara de Cuentas de Aragón de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a las Cortes de Aragón de 26 de mayo de 2019.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del Informe que la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas ha emitido en relación con el Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a las Cortes de Aragón de 26 de mayo de 2019, y que eleva a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario para su debate.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 320. d) del Reglamento de las Cortes de Aragón.

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

El Presidente de las Cortes
JAVIER SADA BELTRÁN

La Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas de Aragón, encargada del estudio y debate de los procedimientos relacionados con este órgano de fiscalización externa e integrada por los Diputados D. Oscar Galeano Gracia, del G.P. Socialista, D.ª Ana Cristina Sainz Martínez, del G.P. Popular, D. José Luis Saz Casado, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), D.ª Erika Sanz Méliz, del G.P. Podemos Equo Aragón, D.ª Carmen Martínez Romances, del G.P. Chunta Aragonesista, D.ª Marta Fernández Martín, del G.P. Vox en Aragón, D. Jesús Guerrero de la Fuente, del G.P. Aragonés, y D. Álvaro Sanz Remón, del G.P. Mixto (A.P. de Izquierda Unida Aragón), ha examinado con todo detenimiento el Informe de la Cámara de Cuentas de Aragón de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a las Cortes de Aragón de 26 de mayo de 2019, así como la propuesta de resolución presentada al mismo y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 320 del Reglamento de las Cortes de Aragón, eleva a la Comisión el presente

INFORME

La propuesta de resolución única presentada conjuntamente por los GG.PP. Socialista, Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), Podemos Equo Aragón, Chunta Aragonesista, Vox en Aragón, Aragonés y G.P. Mixto (A.P. Izquierda Unida Aragón) es aprobada por unanimidad en los siguientes términos:

«Las Cortes de Aragón instan a las formaciones políticas a atender las recomendaciones recogidas en el Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a las Cortes de Aragón de 26 de mayo 2019, emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón, y llevar a cabo las consiguientes actuaciones para cumplir con las mismas».

Zaragoza, 2 de marzo de 2020.

Los Diputados
ÓSCAR GALEANO GRACIA
ANA CRISTINA SAINZ MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS SAZ CASADO
ERIKA SANZ MÉLIZ
CARMEN MARTÍNEZ ROMANCES
MARTA FERNÁNDEZ MARTÍN
JESÚS GUERRERO DE LA FUENTE
ÁLVARO SANZ REMÓN

ÍNDICE DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
 - 1.1. Proyectos de Ley
 - 1.1.1. Aprobados
 - 1.1.2. En tramitación
 - 1.1.3. Rechazados
 - 1.1.4. Retirados
 - 1.2. Propositiones de Ley
 - 1.2.1. Aprobadas
 - 1.2.2. En tramitación
 - 1.2.3. Rechazadas
 - 1.2.4. Retiradas
 - 1.3. Iniciativas legislativas populares
 - 1.3.1. Aprobadas
 - 1.3.2. En tramitación
 - 1.3.3. Rechazadas
 - 1.3.4. Retiradas
 - 1.4. Procedimientos legislativos especiales
 - 1.4.1. Lectura única
 - 1.4.1.1. Aprobados
 - 1.4.1.2. En tramitación
 - 1.4.1.3. Rechazados
 - 1.4.1.4. Retirados
 - 1.4.2. Proyecto de Ley de Presupuestos
 - 1.4.2.1. Aprobado
 - 1.4.2.2. En tramitación
 - 1.4.2.3. Rechazado
 - 1.4.2.4. Retirado
 - 1.4.3. Reforma del Estatuto de Autonomía
 - 1.4.3.1. Aprobada
 - 1.4.3.2. En tramitación
 - 1.4.3.3. Rechazada
 - 1.4.3.4. Retirada
 - 1.4.4. Procedimientos legislativos ante las Cortes Generales
 - 1.4.4.1. Aprobados
 - 1.4.4.2. En tramitación
 - 1.4.4.3. Rechazados
 - 1.4.4.4. Retirados
 - 1.4.4.5. Caducados
 - 1.4.5. Delegaciones legislativas
 - 1.4.5.1. Comunicación del uso de la delegación legislativa
 - 1.4.5.2. Control del uso de la delegación legislativa
 - 1.4.6. Decretos Leyes
 - 1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
 - 1.5.1. Reglamento
 - 1.5.2. Resoluciones interpretativas
2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
 - 2.1. Sesión de investidura
 - 2.2. Moción de censura
 - 2.3. Cuestión de confianza
3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
 - 3.1. Propositiones no de Ley
 - 3.1.1. Aprobadas
 - 3.1.1.1. En Pleno
 - 3.1.1.2. En Comisión
 - 3.1.2. En tramitación
 - 3.1.2.1. En Pleno
 - 3.1.2.2. En Comisión
 - 3.1.3. Rechazadas
 - 3.1.3.1. En Pleno
 - 3.1.3.2. En Comisión
 - 3.1.4. Retiradas
 - 3.1.5. Caducadas
 - 3.2. Interpelaciones
 - 3.2.1. En tramitación
 - 3.2.2. Retiradas
 - 3.3. Mociones
 - 3.3.1. Aprobadas
 - 3.3.1.1. En Pleno
 - 3.3.1.2. En Comisión
 - 3.3.2. En tramitación
 - 3.3.2.1. En Pleno
 - 3.3.2.2. En Comisión
 - 3.3.3. Rechazadas
 - 3.3.3.1. En Pleno
 - 3.3.3.2. En Comisión
 - 3.3.4. Retiradas
 - 3.4. Preguntas
 - 3.4.1. Para respuesta oral
 - 3.4.1.1. En Pleno
 - 3.4.1.2. En Comisión
 - 3.4.1.3. En Diputación Permanente
 - 3.4.1.4. Retiradas
 - 3.4.2. Para respuesta escrita
 - 3.4.2.1. Preguntas formuladas
 - 3.4.2.2. Respuestas
 - 3.4.2.3. Retiradas
 - 3.5. Comparecencias
 - 3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón
 - 3.5.1.1. En Pleno
 - 3.5.1.2. En Comisión
 - 3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras personas
 - 3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o jurídicas
 - 3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia
 - 3.6. Comunicaciones de la DGA
 - 3.6.1. Comunicaciones
 - 3.6.2. Propuestas de resolución
 - 3.6.3. Resoluciones aprobadas
 - 3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
 - 3.7.1. Planes y programas
 - 3.7.2. Propuestas de resolución
 - 3.7.3. Resoluciones aprobadas
 - 3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
 - 3.8.1. Comunicación del Presidente de la Diputación General
 - 3.8.2. Propuestas de resolución
 - 3.8.3. Resoluciones aprobadas
 - 3.9. Comisiones de investigación
 - 3.10. Comisiones especiales de estudio
 - 3.11. Ponencias especiales
4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
 - 4.1. Tribunal Constitucional
 - 4.2. Tribunal de Cuentas
 - 4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
 - 4.4. Otras instituciones y órganos

5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN
 - 5.1. Convenios y acuerdos
 - 5.2. Ratificación

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO
 - 6.1. Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
 - 6.2. Justicia de Aragón
 - 6.3. Auditor General
 - 6.4. Vocales de la Junta Electoral
 - 6.5. Terna del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
 - 6.6. Consejo Asesor de RTVE en Aragón
 - 6.7. Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
 - 6.8. Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. ACTAS
 - 7.1. De Pleno
 - 7.2. De Diputación Permanente
 - 7.3. De Comisión

8. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA
 - 8.1. Mesa
 - 8.2. Grupos Parlamentarios
 - 8.3. Diputación Permanente
 - 8.4. Comisiones
 - 8.5. Ponencias

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA
 - 9.1. Organización y normas de funcionamiento
 - 9.2. Régimen interior
 - 9.3. Personal
 - 9.4. Otros

10. JUSTICIA DE ARAGÓN
 - 10.1. Informe anual
 - 10.2. Informes especiales
 - 10.3. Organización y normas de funcionamiento
 - 10.4. Régimen interior

11. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

12. CÁMARA DE CUENTAS
 - 12.1. Informe anual
 - 12.2. Otros informes
 - 12.3. Organización y normas de funcionamiento
 - 12.4. Régimen interior

13. OTROS DOCUMENTOS
 - 13.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma
 - 13.1.1. Aprobada
 - 13.1.2. En tramitación
 - 13.1.3. Rechazada
 - 13.2. Expedientes de modificación presupuestaria
 - 13.2.1. Aprobados
 - 13.2.2. En tramitación
 - 13.2.3. Rechazados
 - 13.2.4. Retirados
 - 13.3. Resoluciones de modificaciones presupuestarias
 - 13.4. Otros documentos